



REGISTRO OFICIAL

ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

Administración del Sr. Ec. Rafael Correa Delgado
Presidente Constitucional de la República

EDICIÓN ESPECIAL

Año I - Nº 20

**Quito, miércoles 10 de
julio del 2013**

Valor: US\$ 1.25 + IVA

**ING. HUGO ENRIQUE DEL POZO
BARREZUETA
DIRECTOR**

Quito: Avenida 12 de Octubre
N 16-90 y Pasaje Nicolás Jiménez

Dirección: Telf. 2901 - 629
Oficinas centrales y ventas:
Telf. 2234 - 540

Distribución (Almacén):
Mañosca Nº 201 y Av. 10 de Agosto
Telf. 2430 - 110

Sucursal Guayaquil:
Malecón Nº 1606 y Av. 10 de Agosto
Telf. 2527 - 107

Suscripción anual: US\$ 400 + IVA
para la ciudad de Quito
US\$ 450 + IVA para el resto del país
Impreso en Editora Nacional

40 páginas

www.registroficial.gob.ec

**Al servicio del país
desde el 1º de julio de 1895**

SUMARIO:

Págs.

FUNCIÓN JUDICIAL Y JUSTICIA INDÍGENA

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

SEGUNDA SALA DE LO PENAL:

Recursos de casación en los juicios seguidos en
contra de las siguientes personas:

018-2010	José Luis Carrillo Endara	2
021-2010	Guido Trajano Haro Toscano	4
022-2010	José Luis Barrezueta Rodríguez	5
023-2010	Alfredo Sevilla Quiroz	7
024-2010	Juan Alberto Gissi Viotti	8
025-2010	José Rogelio Tocagón Cobacango	10
029-2010	Luis Efraín Collahuazo Muñoz	12
030-2010	Herminio Leopoldo Chuchuca León	14
031-2010	Daniel Criollo Albarracín	15
032-2010	Edison Arturo Palma Ostaiza	16
034-2010	Reyes Casimiro Carranza Tuárez	17
036-2010	Jhon Jadman Córdova Castillo y otro	19
041-2010	Iván Zenén Bravo Carrión	22
042-2010	Segundo Eduardo Buestán Lliguín y otra	23
044-2010	Mario Roberth Briceño Rojas	25
045-2010	César Cruz	28
048-2010	Víctor Manuel Rodríguez Semper	30
052-2010	Manuela Cesarina Lucas Pincay	32

	Págs.
053-2010 Jhon Kennedy Cuarán Queta	33
68-2010 Reina Amelia Zambrano Zambrano y otros	35

No. 018-2010

Juicio Penal No. 587-2009 seguido en contra de JOSE LUIS CARRILLO ENDARA, como autor responsable del delito de asesinato previsto y sancionado en el Art. 450, con la circunstancia 7 del Código Penal.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO PENAL

Quito, 15 de enero del 2010; las 09h00.

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en calidad de Jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia y Conjuez Nacional, en virtud del Oficio No. 067-SG-2010-PCH. En lo principal, el procesado José Luis Carrillo Endara y la acusadora particular Blanca Irma Andrango Andrango, interponen recurso de casación de la sentencia expedida el 22 de octubre del 2007, por el Tribunal Primero de lo Penal de Pichincha, que declara a José Luis Carrillo Endara, autor responsable del delito de asesinato, previsto y sancionado en el Art. 450 con la circunstancia 7 del Código Penal, imponiéndole la pena modificada de catorce años de reclusión mayor extraordinaria. Concluido el trámite y siendo el estado de la causa, el de resolver, para hacerlo se considera: **PRIMERO.-** Esta Segunda Sala Especializada de lo Penal es competente para conocer y resolver este recurso de casación, en virtud del Art. 184 de la Constitución Política de la República del Ecuador, vigente a partir del 20 de octubre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 449; por lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 4 de la sentencia interpretativa 001-08-SI-CC de fecha 28 de noviembre de 2008, dictada por la Corte Constitucional de la República, publicada en el Registro Oficial No. 479 de 2 de diciembre de 2008; por Resolución Sustitutiva de 22 de diciembre del 2008, (publicada en el Registro Oficial No. 511 de 21 de enero de 2009), a la aprobada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, el 17 de diciembre de 2008; y, por el sorteo legal de 10 de diciembre de 2007. **SEGUNDO.-** A fs. 6 a 7 del cuaderno de la Sala consta el escrito de fundamentación del recurso formulado por la acusadora particular Blanca Irma Andrango Andrango, en el que, en lo principal expresa, que impugna la sentencia del Tribunal Primero de lo Penal y dicha pena, acogiendo a la irrelevante circunstancia atenuante, sin considerar la circunstancia agravante establecida en el Art. 30 numeral 4 del Código Penal, cuyas dos normas tienen el mismo valor, pero con diferencia que la agravante está probada en el proceso y la única atenuante

posterior al delito no modifica la pena, como lo establece el Art. 72 del Código Penal, por lo que solicita se imponga a José Luis Carrillo Endara el máximo de la pena prevista en el Art. 450 numeral 7 del Código Penal. Por otra parte, el procesado José Luis Carrillo Endara, en su escrito de fundamentación, del recurso de casación por él propuesto, sostiene que en la sentencia dictada por el Tribunal Primero de lo Penal de Pichincha, se han violado normas legales y se ha hecho una aplicación errónea de la ley al imputarle y condenarle injustamente por el delito de asesinato, tipificado en el Art. 450 numeral 7 del Código Penal; que también se han violentado las normas de los Arts. 143 inciso segundo, 87, 88 y 250 del Código de Procedimiento Penal, por lo que solicita a la Sala, "se modifique la sentencia, en el evento no consentido en todo caso debía aplicarse los Arts. 449 y 461 del Código Penal; porque el supuesto homicidio fue cometido sin ninguna de las circunstancias detalladas en el Art. 450 ibídem". **TERCERO.-** El Ministro Fiscal General del Estado, al contestar el traslado corrido con la fundamentación del recurso constante a fs. 13 a 15 del cuaderno de la Sala, luego de realizar el análisis de las pruebas actuadas en la audiencia de juzgamiento, en lo principal manifiesta que: "el juzgador en la sentencia hace un análisis de todos los indicios reunidos en el proceso, considerando improcedente un nuevo análisis", argumenta además, "que la casación de acuerdo con el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal, se contrae a examinar si en la sentencia se hubiese violado la ley, ya por contravenirla expresamente, ya por haberla aplicado falsamente o por interpretarla erróneamente. El Tribunal Primero de lo Penal de Pichincha al haber aplicado el Art. 450 numeral 7 del Código Penal, imponiendo al recurrente, la pena correspondiente a su acción delictiva, ha sustentado su sentencia condenatoria en la prueba presentada en la audiencia de juicio, conforme al Art. 79 del Código de Procedimiento Penal, cumpliendo los principios del modelo acusatorio, esto es oral y pública, con derecho al contradictorio y respetando los principios de continuidad, así como cumpliendo con el principio de inmediación de la prueba con el juez de la sentencia". Termina, expresando que es de la opinión de que el recurso de casación interpuesto por los recurrentes, acusadora particular y procesado se los declare improcedentes. **CUARTO.-** Examinada la sentencia, por parte de la Sala, se observa que en los considerandos Cuarto y Quinto del fallo, el Tribunal Juzgador expresa que tanto la materialidad de la infracción como la responsabilidad del procesado se ha comprobado conforme a derecho con la práctica de las siguientes diligencias actuadas en la audiencia del juicio; en cuanto a la materialidad de la infracción con: **1.-** El testimonio del Dr. Luis Figueroa Simbaña, perito médico legista que el 21 de octubre del 2006, practicó la autopsia al cadáver de quien en vida se llamó Julio Luciano Casimba Quilca, de 27 años de edad, quien en el tórax, región infraclavicular izquierda, presentaba una herida manipulada quirúrgicamente suturada de trazo oblicuo, de nueve centímetros de extensión, concluyendo que la causa de la muerte fue producida por hemorragia aguda interna, laceración de pulmón izquierdo, fractura costal por penetración de arma punzo cortante, por lo que la muerte fue violenta, ratificando en la audiencia pública de juzgamiento ante el Tribunal Penal su informe. **2.-** Testimonios de los policías Wilson Caiza y Luis Soto quienes realizaron el levantamiento del cadáver del occiso

Julio Luciano Casimba Quilca, el que presentaba una herida cortopunzante a la altura del pectoral izquierdo de más o menos unos 8 centímetros, la misma que estaba suturada.

3.- Con la partida de defunción del occiso; y, 4.- Con el Testimonio del Cabo de Policía Milton Jiménez Cueva, quien testificó ante el Tribunal Penal. Que en compañía del Cabo de Policía Luis Tenelema, realizó el reconocimiento del lugar de los hechos, que se trata de una escena abierta, ubicada en Cumbayá, sector "la Y", costado derecho de la avenida Intersección Guayasamin. La responsabilidad del procesado José Luis Carrillo Endara, el Tribunal Juzgador la establece con: los testimonios de Roberto Marcelo Parreño Toapanta, Edwin Iván Sulca Álvarez, Blanca Irma Andrango Andrango y del policía Glen Falcónez Ramírez, los mismos que coinciden, en afirmar que el día 20 de octubre del 2006, a eso de las 22H00 aproximadamente había sido objeto de acuchillamiento Julio Luciano Casimba Quilca, en el sector de la Avenida Interoceánica y Chimborazo de la parroquia Cumbayá por el procesado José Luis Carrillo Endara, por cuanto el occiso se negó a darle dinero, luego de lo cual se ha dado a la fuga; que con la colaboración de pobladores del sector se ha localizado y aprehendido a Luis Alberto Zambrano, Esmeralda y Liliana Lanchimba, quienes han manifestado que el autor de la puñalada a Julio Casimba Quilca había sido José Luis Carrillo Endara, que vestía con una camiseta negra, un pantalón jean azul y un pañuelo en la frente, quien para cometer el delito de acercó hasta las gradas de una ferretería lugar en el que se encontraba sentado el occiso y cuando el fallecido levantó su brazo, el joven agresor sacó un cuchillo de su cintura y le apuñaló; que estudiantes del Colegio Cumbayá quisieron detenerle siendo amenazados con un cuchillo por el agresor, luego se dirigió con dos amigos en dirección a San Juan de Cumbayá, siendo posteriormente detenido por la policía. De lo analizado se puede establecer claramente que el Tribunal Primero de lo Penal de Pichincha, analizó y valoró correctamente las pruebas en sentencia, pues la existencia material del hecho que motiva el proceso se encuentra comprobada conforme a derecho, presupuesto necesario para establecer el nexo causal entre la infracción y sus responsables y formular la correspondiente presunción que se funda en indicios probados, graves, precisos y concordantes, que en el caso son varios, relacionados, unívocos y directos tal como lo exigen los Arts. 87 y 88 del Código de Procedimiento Penal, y de esta manera el Tribunal Juzgador ha establecido con certeza que José Luis Carrillo Endara, es autor de delito de Asesinato tipificado y sancionado en el Art. 450 bajo la circunstancia contemplada en el Art. 7 del Código Penal, pues Julio Luciano Casimba Quilca, cuando se encontraba en el sector del semáforo de Cumbayá entre la Avenida Interoceánica y Chimborazo, recibió una apuñalada por parte del hoy sentenciado José Luis Carrillo Endara, la misma que le produjo la muerte a consecuencia de hemorragia aguda interna, laceración de pulmón izquierdo y fractura costal. Consecuentemente, el Tribunal Juzgador ha valorado la prueba, a la luz de la sana crítica, confrontando los testimonios rendidos por el ahora sentenciado con la prueba testifical recibida en la audiencia de juzgamiento. Ha hecho acopio de los indicios que en atención a las reglas fijadas en el Art. 88 del Código Penal, componen la prueba de presunciones eficaz al propósito de fundar el fallo en este causal probatorio; no aparece entonces la inobservancia de las normas legales, esgrimida por el sentenciado en su escrito de fundamentación del recurso de casación. Por otro

lado, en cuanto a lo manifestado por la acusadora particular en su escrito de fundamentación del recurso de casación, de que el Tribunal Juzgador no debía considerar atenuantes por cuanto el delito de asesinato se cometió bajo la circunstancia agravante contemplada en el numeral 4 "Ejecutar el hecho punible buscando de propósito el despoblado o la noche..." del Art. 30 del Código Penal. Al respecto, la Sala deja en claro que, la circunstancias contemplada en el numeral 7 "Buscando de propósito la noche o el despoblado para cometer el homicidio" del Art. 450 ibidem, siendo circunstancia constitutiva de la infracción, que convirtió el homicidio simple en asesinato, no impide la reducción de la pena ante la presencia de dos o más circunstancias atenuantes, impedimento que ocurre únicamente cuando se han demostrado circunstancias agravantes generales o genéricas, ejemplificadas en el Art. 30 del mismo cuerpo legal, por lo tanto la circunstancia constitutiva de la infracción no puede ser aplicada a la vez como circunstancia agravante genérica, porque son situaciones jurídicas que se excluyen. Más efectivamente esta Sala considera que, si existe violación de los Arts. 29 numeral 7 y 72 del mismo cuerpo legal, por parte del Tribunal Juzgador en su sentencia, al disminuir la pena por la presencia de circunstancias atenuantes pues no se ha justificado legalmente la circunstancia atenuante establecida en el numeral 7 del Art. 29 del Código Penal, ya que, constan del proceso certificaciones de los Tribunales Penales, que lo único que dan fe es de no haber sido enjuiciado o sentenciado, pero nada refieren sobre la conducta con anterioridad al delito; y, cartas de terceros, que hacen referencia a signos distintivos de la personalidad del procesado, son instrumentos privados que tanto por su contenido como por su condición de insolemnes deviene inidóneos al propósito de probar la atenuante prevista en el numeral 7 del Art. 29 del Código Penal, particular que debe justificarse por medios ajustados a la ley, consecuentemente, no se ha cumplido con lo requerido en el Art. 72 ibidem que establece que se reducirán las penas de reclusión, siempre que se prueben dos o más circunstancias atenuantes, pues el procesado solo probó una de ellas la contemplada en el numeral 6 del Art. 29 del Código Penal. En consecuencia, el Tribunal Juzgador ha interpretado erróneamente el numeral 7 del Art. 29 y 72 del Código de Procedimiento Penal. Por las consideraciones que anteceden, la Segunda Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY**, declara improcedentes el recurso de casación interpuesto por el procesado José Luis Carrillo Endara y la acusadora particular Blanca Irma Andrango Andrango. Y de conformidad con lo previsto en el Art. 358 del Código de Procedimiento Penal, casa parcialmente la sentencia recurrida, y enmendando el error de derecho, declara a José Luis Endara Carrillo, cuyo estado y condición constan del proceso, autor responsable del delito de asesinato, ilícito tipificado y sancionado en el Art. 450 numeral 7 del Código Penal, y le impone la pena de dieciséis años de reclusión mayor especial, sin la consideración de atenuantes por lo antes señalado, condena, que la cumplirá en el Centro de Rehabilitación Social de Varones de Pichincha, debiendo, descontarse, el tiempo que el sentenciado haya estado privado de su libertad por esta causa. Se confirma en todo lo demás la

sentencia recurrida. Notifíquese y devuélvase el proceso al Tribunal Penal de origen para los fines de ley. Actúe el Dr. Milton Álvarez Chacón, Secretario Relator Encargado, por licencia del Titular.

f.) Dr. Luis Abarca Galeas, Juez Nacional Presidente.

f.) Dr. Máximo Ortega Ordóñez, Juez Nacional.

f.) Dr. Luis Quiroz Erazo, Conjuez.

Certifico:

f.) Dr. Milton Álvarez Chacón, Secretario Relator, encargado.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 24-6-2011.- las- Certifico.- f.) El Secretario Relator.

No. 021-2010

Juicio Penal No. 194-2009 seguido en contra de GUIDO TRAJANO HARO TOSCANO, como autor del delito tipificado y sancionado en el Art. 464 del Código Penal.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO PENAL

Quito, 15 de enero de 2010; las 10h00.

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en calidad de Jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia y Conjuez Nacional en virtud del oficio No. 067-SG-2010-PCH. En lo principal, el recurrente Guido Trajano Haro Toscano, interpone recurso, de casación de la sentencia dictada por el Tribunal Primero de lo Penal de Tungurahua, que lo declara autor del delito tipificado y sancionado en el Art. 464 del Código Penal, imponiéndole la pena de dos meses de prisión correccional y multa de quince dólares americanos. Concluido el trámite y siendo el estado de la causa, el de resolver, para hacerlo se considera: **PRIMERO:** Esta Segunda Sala Especializada de lo Penal es competente para conocer y resolver este recurso de casación, en virtud del Art. 184 de la Constitución de la República del Ecuador, vigente a partir del 20 de octubre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 449; por lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 4 de la Sentencia Interpretativa: 001-08-SI-CC, de fecha 28 de noviembre del 2008, dictada por la Corte Constitucional de la República, publicada en el Registro Oficial No. 479, de 2

de diciembre de 2008; por el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal y por sorteo de 23 de abril de 2007. **SEGUNDO:** A fojas 4 a 15 del cuadernillo de casación, el recurrente Guido Trajano Haro Toscano, realiza un análisis desde su particular punto de vista de las actuaciones probatorias practicadas en esta causa y a continuación fundamenta el recurso de casación expresando en lo principal: Que se ha violado la ley en la sentencia al interpretar erróneamente, haber realizado una falsa aplicación y contravenir expresamente al texto de los Arts. 86, 304-A y 309 numerales 2 y 3 del Código de Procedimiento Penal, y que se han violado las reglas de la sana crítica, falta de motivación de la sentencia, ausencia de exposición apropiada de los fundamentos de hecho y de derecho de la misma. **TERCERO:** El señor Representante. del Ministerio Público, contestando al traslado con la fundamentación del recurso de casación, luego de realizar el respectivo análisis de la sentencia impugnada emite su criterio en los siguientes términos: "(...) Al pronunciarse sobre la diminuta fundamentación del recurso accionado por el referido procesado y las actuaciones procesales, emitió las siguientes consideraciones jurídicas: a) El Tribunal Primero de Penal de Tungurahua al dictar la sentencia condenatoria, objeto de la impugnación, no ha violado la ley, contraviniendo expresamente su texto, tampoco ha incurrido en falsa aplicación de la ley, ni ha interpretado erróneamente los catálogos que regulan la apreciación y valoración de la prueba. Por el contrario, las actuaciones procesales y el expediente conjunto probatorio se ajustan a las previsiones establecidas por el Art. 194 de la Constitución Política de la República y a las normas reguladoras de la prueba, Arts. 83, 85, 87 y 88 del Código de Procedimiento Penal, habiendo observado los principios dispositivo, de concentración e inmediación.- b) La noticia crimini demostrada judicialmente, se ajusta a la realidad histórica procesal que recoge la sentencia materia del recurso, encuadrada en los presupuestos normativos establecidos por los Arts. 309, 250, 252, 304-A y 312 inciso primero del Código de Procedimiento Penal, condicionantes indefectibles para el pronunciamiento de condena, resultando que la sentencia que narra e invoca motivadamente la prueba aportada en el juicio, tipifica la conducta e impone la pena,. Guarda armonía con la realidad histórica procesal que han conducido a la convicción de condena, tanto más que el acusado al rendir su declaración en el juicio, admite implícitamente su participación en los hechos, cuando expresa que el día del suceso, mantuvo un incidente con el ofendido, provocado por el propio encausado, del que resulta afectado físicamente Luis Alfredo Toscano Bonilla, conforme lo acredita en forma fehaciente la prueba testimonial; desprendiéndose una vinculación con causal entre la infracción y su responsable, el hoy procesado, sin que haya probado en su defensa que tales lesiones fueron provocadas por otro agente o respondan a circunstancias diversas de las alegadas por él; siendo de destacar que las mismas; de acuerdo a la descripción del forense, afectaron a varias partes de su cuerpo (cabeza, ojos, mejilla, frente); hecho, que bajo una lógica elemental debieron ejecutarse en acciones secuenciales (varias) lo que contradice la aseveración que tales lesiones son consecuencia de la pedrada dada involuntariamente por la enamorada de Luis Alfredo Toscano Bonilla (...)" **CUARTO:** El recurrente deduce contra la sentencia el cargo de que no realiza un análisis crítico de la prueba y que se limita a la simple

descripción. Al respecto, la Sala luego de analizar el contenido de la sentencia en relación a esta alegación, establece que el juzgador con toda propiedad en el considerando SEGUNDO de la sentencia procede a señalar, describir y explicar las pruebas de cargo constitucionalmente practicada en la audiencia de juzgamiento por el Fiscal; y de igual modo en el considerando TERCERO de la misma procede a señalar describir y explicar las pruebas de descargo presentadas por el acusado. En esta forma ordenada el juzgador primeramente hace constar los resultados probatorios que constituyen la tesis probatoria presentada por el Fiscal; y en segundo lugar la antítesis probatoria o contradicción presentada por la defensa del acusado. Y a continuación en el considerando CUARTO de la sentencia el juzgador procede a su valoración de la prueba en su conjunto, precisando la que utiliza para declarar con certeza la existencia material del delito objeto del juicio así como las que utiliza para declarar la responsabilidad del acusado, autor del mismo, para lo cual expresa que aplica las reglas de la sana crítica y si bien es verdad que no enuncia cuales son estas reglas, el juzgador procede estrictamente apegado a estas reglas, ateniéndose objetivamente a los hechos que declara probados en la valoración, porque estas reglas por su contenido se refieren a la obtención del conocimiento objetivo proporcionado por la pruebas, y para lo cual elimina aquellas que carecen de objetividad y por lo tanto no tiene relación con el objeto del proceso, o que por ser inconstitucionales carecen de valor; por lo que no se violan estas reglas en forma alguna, ya que no son otra cosa que la utilización de la lógica, la experiencia, la técnica y la ciencia para extraer el significado probatorio de los hechos probados en el juicio en relación al objeto del proceso, esto es a la existencia material del delito objeto del juicio y a la responsabilidad del acusado como su autor o partícipe. En el presente caso el juzgador valora la prueba con absoluta objetividad o aplicando las reglas de la sana crítica por lo que se desecha esta alegación del acusado recurrente. **QUINTO:** El acusado recurrente también formula contra la sentencia el cargo de que se viola el Art. 304-A del Código de Procedimiento Penal, porque la sentencia no se encuentra motivada, ya que no existe la disposición apropiada de los fundamentos de hecho y de derecho de la sentencia, conforme lo exige los numerales 2 y 3 del Art. 309 del mismo Código Procesal. La Sala, por las consideraciones expuestas en el considerando anterior, establece que los hechos que el juzgador declara probados en el considerando. CUARTO: en que se contiene la motivación del fallo condenatorio, es coherente con el fallo condenatorio que declara autor responsable al acusado y le impone la pena de dos meses de prisión correccional, pronunciándose en esta forma sobre la acusación fiscal realizada en la fase del debate, en aplicación del inciso primero del Art. 303 del Código de Procedimiento Penal, puesto que era obligación del juzgador pronunciarse sobre la acusación del Fiscal por el delito tipificado y sancionado en el inciso primero del Art. 464 del Código Penal, como efectivamente así lo ha hecho; por lo que la sentencia reúne todos los requisitos que exige el Art. 309 del Código de Procedimiento Penal y consecuentemente se encuentra debidamente motivado conforme lo exige el literal 1) del No 7 del Art. 76 de la Constitución de la República y el Art. 304-A del Código de Procedimiento Penal. Por estas consideraciones, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD**

DE LA LEY, se declara improcedente el recurso interpuesto por el recurrente Guido Trajano Haro Toscano. Actúe el Dr. Milton Álvarez Chacón, Secretario Relator Encargado, por licencia del Titular. Notifíquese.

f.) Dr. Luis Abarca Galeas, Juez Nacional Presidente.

f.) Dr. Máximo Ortega Ordóñez, Juez Nacional.

f.) Dr. Luis Quiroz Erazo, Conjuez Nacional.

Certifico:

f.) Dr. Milton Álvarez Chacón, Secretario Relator, encargado.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 24-6-2011; las- Certifico f.) El Secretario Relator.

No. 022-2010

Juicio Penal No. 918-2009 seguido en contra de JOSE LUIS BARREZUETA RODRIGUEZ, como autor responsable del delito de robo calificado, previsto en el Art. 550 y sancionado en los Arts. 552 numeral 2 y 551 del Código Penal.

**CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
SEGUNDA SALA DE LO PENAL**

Quito, 15 de enero de 2010; las 10h00.

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en calidad de Jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia y Conjuez Nacional, en virtud del Oficio No. 067-SG-2010-PCH. En lo principal, José Luis Barrezueta Rodríguez, interpone recurso de casación de la sentencia expedida el 14 de mayo de 2009, por el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Los Ríos, que lo declara autor responsable del delito de robo calificado, previsto en el Art. 550 y sancionado en los Arts. 552 numeral 2 y 551 del Código Penal, imponiéndole la pena de seis años de reclusión menor. Concluido el trámite y siendo el estado de la causa, el de resolver, para hacerlo se considera: **PRIMERO.-** Esta Segunda Sala Especializada de lo Penal es competente para conocer y resolver este recurso de casación, en virtud del Art. 184 de la Constitución Política de la República del Ecuador, vigente a partir del 20 de octubre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 449; por lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 4 de la sentencia interpretativa 001-08-SI-CC de fecha 28 de

noviembre de 2008, dictada por la Corte Constitucional de la República, publicada en el Registro Oficial No. 479 de 2 de diciembre de 2008; por Resolución Sustitutiva de 22 de diciembre del 2008, (publicada en el Registro Oficial No. 511 de 21 de enero de 2009), a la aprobada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, el 17 de diciembre de 2008; y, por el sorteo de ley de 1 de junio del 2009. **SEGUNDO.-** A fs. 4 y 4 vta. del cuaderno de la Sala consta el escrito de fundamentación del recurso formulado por el sentenciado José Luis Barrezueta Rodríguez, en el que, en lo fundamental expresa: que el Tribunal Juzgador aplicó erróneamente los Arts. 552 numeral 2 del Código Penal que tipifica el delito de robo agravado, toda vez que su conducta se adecúa en la de robo simple previsto y sancionado en los Arts. 550 y 551 del mismo cuerpo legal; agrega además, que no se le reconoció circunstancias atenuantes para efectos de la modificación de la pena, pese haber acreditado y justificado la de los numerales 5, 6 y 7 del Art. 29 del Código Penal. **TERCERO.-** El Ministro Fiscal General del Estado, al contestar el traslado corrido con la fundamentación del recurso constante a fs. 6 y 6 vta. del expediente de la Sala, en lo fundamental manifiesta: "... Por su parte, el considerando séptimo de la sentencia muestra que el Juzgador desarrolla el análisis de ponderación y valoración de los medios de prueba presentados en la audiencia de juzgamiento, con cuyos antecedentes llega a la certeza en cuanto a que los elementos fácticos junto con la vinculación objetiva y subjetiva del acusado con el hecho a él atribuido se corresponden con el delito establecido en el Art. 552 numeral 2 del Código Penal, tanto más que se justifica las circunstancias de que el robo se produjo por la noche y en vía pública, con lo que la alegación esgrimida por el recurrente de que su conducta se encasilla con la figura del robo simple deviene en improcedente. ...". Concluye manifestando que es del criterio que el recurso de casación formulado por el recurrente debe ser rechazado por improcedente. **CUARTO.-** En la especie que se juzga, esta Sala advierte que, examinada la sentencia, se observa que en la misma, el Tribunal Juzgador expresa que tanto la materialidad de la infracción como la responsabilidad del procesado se ha comprobado conforme a derecho con la práctica de las siguientes diligencias procesales actuadas en la audiencia del juicio, en lo atinente a la materialidad de la infracción con: 1. La copia certificada de una factura otorgada por Comandato, por la venta de una motocicleta Suzuki AX100, color negro, por el valor de \$. 1.783.04; y, 2.- La declaración del perito criminalista Wilmer Leonel Oñate Pacheco, quien refiere haber sido designado como perito para las diligencias de reconocimiento del lugar de los hechos y de las evidencias físicas, que para la primera diligencia se constituyó en el inmueble Sana Sana calles Bolívar, entre Sexta y Séptima, lugar poblado, con un semáforo, con normal circulación peatonal y vehicular; que la diligencia de reconocimiento de evidencias se llevó a cabo en la Policía Judicial, de una motocicleta que se dice sustraída, Suzuki AX100, color negro, sin placas, en buen estado, cuyo valor aproximado es de \$. 1.200.00. La responsabilidad del procesado José Luis Barrezueta Rodríguez el Tribunal Juzgador la establece con: 1.- Las declaraciones de los agentes de policía Alex Vinicio Morán Zambrano y David Alberto Muñoz Arévalo, quienes son coincidentes en señalar que el 12 de diciembre del 2008, a las 21 H30, por la central de radio se reportó el robo de una motocicleta a un miembro policial, a la altura de las calles Bolívar y Séptima, que concurren hasta el cementerio en

donde se tenía localizado a uno de los autores, el mismo que les informó donde se encontraba la motocicleta, motivo por lo que se dirigieron por el terminal a la Venus del Río Quevedo, en donde efectivamente encontraron al otro individuo que conducía la moto sustraída, él que no hizo caso al pare y los miembros del GOE lo cerraron con las motocicletas de la Policía siendo reconocido por la víctima. 2.- El testimonio del ofendido Juan Gabriel Mora Moreno, quien manifiesta que el 12 de diciembre del 2008, a las 21 H30, circulaba en su moto por las calles Bolívar y Séptima, por la farmacia Sana Sana, siendo asaltado por los dos sujetos que andaban en una motocicleta, bajándose el acompañante José Luis Barrezueta y encañonándolo le despojó de su moto, pidiendo la colaboración a un taxi sigue al de apellido Rosado, a quien alcanza a la altura de las Avenida Los Álamos frente a la morgue del cementerio porque sufrió un accidente al chocar con el parterre y al otro sujeto le da alcance por la tienda Alexandra en la parroquia Venus, recuperando su motocicleta; y, 3. Testimonios de los procesados Orly Luis Rosado Castillo y José Luis Barrezueta Rodríguez, los mismos que expresan: que el 12 de diciembre del 2008 se encontraban libando con varios amigos en la Ciudadela Santa Rosa, que acordaron comprar una botella de licor, pero como las tiendas estaban cerradas por el sector deciden ir al centro de Quevedo, concretamente a la licorería "El Búho", que quien conducía la motocicleta era Orly Luis Rosado Castillo, que luego de comprar la botella los coge el semáforo en rojo, incriminándose entre sí en que bajaron de la motocicleta y luego siguieron la marcha, sin aceptar que le sustrajeron la motocicleta a la víctima, pero que si fueron aprehendidos en las circunstancias anotadas por los testigos y ofendido. De esta síntesis se infiere fácilmente que la prueba que sirve para llegar a la convicción y certeza de la existencia material del delito que se juzga y de la culpabilidad de los acusados se actuó en la diligencia de audiencia de juzgamiento, conforme lo establecen los Arts. 79 y 83 del Código de Procedimiento Penal; por lo que se demuestra que el Tribunal Juzgador, correctamente adecuó los hechos objeto del proceso al delito de robo agravado tipificado y sancionado en los Arts. 550, 551 y 552 numeral 2 del Código Penal, por haberse ejecutado en la noche y en vía pública; así también es correcta la pena impuesta al procesado de seis años de reclusión menor. Al tenor de lo dispuesto en la parte segunda del Art. 162 del Código de Procedimiento Penal existe flagrancia al haberse descubierto el hecho inmediatamente después de su comisión y aprehenderse al infractor José Luis Barrezueta Rodríguez con la evidencia como lo es la motocicleta marca Suzuki, placas AX100. Más aún se encuentra satisfecha la exigencia consignada en el Art. 106 del Código de Procedimiento Penal, relativa a justificar en el juicio tanto la preexistencia de la cosa sustraída como el hecho de que se encontraba en el lugar donde se dice estuvo al momento de ser sustraída. Por otro lado, en lo referente a las atenuantes 5, 6, 7 y 12 del Art. 29 del Código Penal que el recurrente arguye, no se le han tomado en cuenta para la modificación de la pena, es importante señalar que constan del proceso certificaciones de los Tribunales Penales, que lo único que dan fe es de no haber sido enjuiciado o sentenciado, pero nada refieren sobre la conducta con anterioridad al delito; y, firmas de respaldo, son instrumentos privados que tanto por su contenido como por su condición de insolemnes deviene en in idóneos al propósito de probar la atenuante prevista en el numeral 7

del Art. 29 del Código Penal, particular que debe justificarse por medios ajustados a la ley; así tampoco se ha probado la atenuante contemplada en el numeral 5 del Art. 29 ibídem, pues el sentenciado no se presentó voluntariamente a la justicia, sino que fue aprehendido en delito flagrante inmediatamente de haber cometido el robo; en lo referente a la atenuante contemplada en el numeral 12 del Art. 29 del Código Penal, cabe precisar que el pequeño valor tiene que considerarse en relación a la situación económica del ofendido y en el presente caso, este es un policía cuyo sueldo es de carácter básico, que apenas le alcanza para mantener a su familia por lo que la motocicleta para el ofendido es de gran valor. Por lo tanto no se ha cumplido con lo requerido en el Art. 72 ibídem que establece que se reducirán las penas de reclusión siempre que se prueben dos o más circunstancias atenuantes y ninguna agravante, pues en el caso el recurrente únicamente ha justificado la atenuante de ejemplar conducta posterior al cometimiento del delito establecida en el numeral 6 del Art. 29 del Código Penal, por lo que resulta insuficiente al propósito de modificar la pena. En consecuencia, la sentencia pronunciada por el Tribunal Juzgador se ajusta a derecho y no incurre en violación alguna de la ley. Por las consideraciones que anteceden, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY**, declara improcedente el recurso de casación interpuesto por José Luis Barrezueta Rodríguez y se dispone remitir el proceso al Tribunal Penal de origen, para los fines de ley. Actúe el Dr. Milton Álvarez Chacón, Secretario Relator Encargado, por licencia del Titular. Notifíquese.

f.) Dr. Luis Abarca Galeas, Juez Nacional Presidente.

f.) Dr. Máximo Ortega Ordóñez, Juez Nacional.

f.) Dr. Luis Quiroz Erazo, Conjuez.

Certifico:

f.) Dr. Milton Álvarez Chacón, Secretario Relator, encargado.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 24-6-2011; las- Certifico.- f.) El Secretario Relator.

No. 023-2010

Juicio Penal No. 430-2009 seguido en contra de ALFREDO SEVILLA QUIROZ, como autor responsable del delito tipificado y sancionado en el Art. 495 del Código Penal, por injurias no calumniosas graves.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO PENAL

Quito, 15 de enero de 2010; las 10h00.

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en calidad de Jueces Nacionales de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia y Conjuez Nacional en virtud del oficio No. 067-SG-2010-PCH. En lo principal, el recurrente Alfredo Sevilla Quiroz, interpone recurso de casación de la sentencia dictada por la Tercera Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que le declara autor responsable del delito tipificado y sancionado en el Art. 495 del Código Penal por injurias no calumniosas graves, confirmando la del inferior que lo declara autor del delito de injurias no calumniosas graves por escrito y le condena a tres meses de prisión. Concluido el trámite y siendo el estado de la causa, el de resolver, para hacerlo se considera: **PRIMERO:** Esta Segunda Sala Especializada de lo Penal es competente para conocer y resolver este recurso de casación, en virtud del Art. 184 de la Constitución de la República del Ecuador, vigente a partir del 20 de octubre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 449; por lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 4 de la Sentencia Interpretativa: 001-08-SI-CC, de fecha 28 de noviembre del 2008, dictada por la Corte Constitucional de la República, publicada en el Registro Oficial No. 479, de 2 de diciembre del 2008; por el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal y por el sorteo legal de 19 de enero del 2009. **SEGUNDO:** A fojas 4 a 9 el recurrente ...Alfredo Sevilla Quiroz, fundamenta su recurso expresando: Que existe violación expresa de la ley, contraviniendo expresamente el texto de la Constitución de la República puesto que el Juez ha actuado con iniciativa quebrantando el principio dispositivo Que en la sentencia se ha reconocido que el querellante ha acusado de la comisión del delito de injuria calumniosa y no de injuria no calumniosa, pero sin embargo de oficio se le ha sentenciado por la supuesta comisión del delito de injuria no calumniosa, por lo que se ha hecho una falsa aplicación e interpretado erróneamente del Art. 495 del Código Penal. **TERCERO:** El recurrente formula contra la sentencia del Tribunal de Apelación el cargo de que se le ha juzgado por un delito que no fue objeto de la acusación particular deducida en su contra y que este error de derecho también se comete en la sentencia de primer nivel. Que se lo acusa de injurias calumniosas y se las juzgó por injurias no calumniosas graves. Al respecto, la Sala establece que efectivamente en la formalización de la acusación particular de fs. 300 de los autos, consta que se le acusó por el delito de injurias calumniosas tipificado en el Art. 489 del Código Penal y sancionado en el Art. 490 de este mismo Código; por lo que se viola la ley en la sentencia de segunda instancia al haberse pronunciado por un delito que no fue materia de la acusación particular. **CUARTO:** En los delitos de acción penal privada los límites objetivos del pronunciamiento del juzgador o de la sentencia se encuentra constituido por el delito acusado en la formalización de la acusación particular, de tal modo que, no es permitido al Juez pronunciarse por un delito diferente al acusado, en aplicación del principio dispositivo contemplado como garantía del debido proceso en el numeral 6 del Art. 168 de la Constitución de la República. **QUINTO:** La violación del principio dispositivo por el Tribunal de Apelación,

determina que el fallo condenatorio carezca de motivación, por lo que se viola el literal 1) del No. 7 del Art. 76 de la Constitución de la República que contempla como garantía del debido proceso la debida motivación y las resoluciones de los poderes públicos, entre ellas las sentencias, razón por la cual la sentencia dictada por este Tribunal carece de validez jurídica procesal por lo dispuesto en esta disposición constitucional y consecuentemente, el Tribunal de Casación oficiosamente, en aplicación del Art. 358 del Código de Procedimiento Penal procede a examinar el fallo condenatorio dictado por el Juez de primer nivel a fin de establecer si existen o no violaciones de la ley en la sentencia que queda en vigor el fallo de primer nivel. **SEXTO:** En efecto, en el recurso de casación por los delitos de acción penal privada, se debe considerar las violaciones de la ley cometidas no solo en la sentencia expedida por el Tribunal de Apelación sino también las violaciones de la ley constantes en la sentencia expedida por el Juez de primer nivel cuando estas violaciones persisten a pesar de la apelación. En el presente caso por haberse violado el principio de la debida motivación contemplada como garantía del debido proceso en el literal 1) del No. 7 del Art. 76 de la Constitución de la República, solamente queda en pie la sentencia del Juez de primer nivel, la misma que luego de ser analizada en su contenido por este Tribunal de Casación se establece que en esta se dictó fallo condenatorio contra el querrellado por el delito de injuria no calumniosa grave, violándose también el principio dispositivo, de tal modo que las dos sentencias violan la garantía del debido proceso consistente en el principio de la debida motivación. Por estas consideraciones, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY**, se acepta el recurso de casación presentado por Alfredo Sevilla Quiroz. Actúe el Dr. Milton Álvarez Chacón, Secretario Relator Encargado, por licencia del Titular. Notifíquese.

f.) Dr. Luis Abarca Galeas, Juez Nacional Presidente.

f.) Dr. Máximo Ortega Ordóñez, Juez Nacional.

f.) Dr. Luis Quiroz Erazo, Conjuez Nacional.

Certifico:

f.) Dr. Milton Álvarez Chacón, Secretario Relator, encargado.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 24-6-2011; las- Certifico.- f.) Ilegible.- El Secretario Relator.

No. 024-2010

Juicio Penal No. 230-2009 seguido por el Estado Ecuatoriano en contra de JUAN ALBERTO GISSI VIOTTI, como autor del delito tipificado y sancionado en el Art. 60 de la codificación a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

**CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
SEGUNDA SALA DE LO PENAL**

Quito, Enero 15 de 2010.-Las 10h00.

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en calidad de Jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia y Conjuez Nacional, en virtud del Oficio No. 067-SG-2010-PCH. Agréguese al proceso el escrito presentado por Javier Giz Mantero, Cónsul del Uruguay. El 3 de mayo del 2007, el Tribunal Penal del Carchi, dicta sentencia condenatoria en contra de Juan Alberto Gissi Viotti a quien declara autor del delito tipificado y sancionado en el Art. 60 de la Codificación a la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y por considerar que existen circunstancias atenuantes, le impone la pena de ocho años de reclusión mayor ordinaria y multa de sesenta salarios mínimos, sentencia que al subir en consulta es confirmada en todas sus partes por la Corte Superior de Justicia de Tulcán, del fallo interpone recurso de casación el procesado, el mismo que es concedido, concluido el trámite y siendo el estado de la causa, el de resolver, para hacerlo se considera: **PRIMERO.-** Esta Segunda Sala Especializada de lo Penal es competente para conocer y resolver este recurso de casación, en virtud del Art. 184 de la Constitución Política de la República del Ecuador, vigente a partir del 20 de octubre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 449; por lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 4 de la sentencia interpretativa 001-08-SI-CC de fecha 28 de noviembre de 2008, dictada por la Corte Constitucional de la República, publicada en el Registro Oficial No. 479 de 2 de diciembre de 2008; por Resolución Sustitutiva de 22 de diciembre del 2008, (publicada en el Registro Oficial No. 511 de 21 de enero de 2009), a la aprobada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, el 17 de diciembre de 2008; y, por el sorteo legal de 7 de enero de 2009. **SEGUNDO.-** A fs. 3 y 3 vta. del cuaderno de la Sala consta el escrito de fundamentación del recurso formulado por el recurrente, en el que, en lo fundamental expresa: que en la sentencia se ha violado la ley y se ha contravenido expresamente a su texto, por cuanto se debió dictar a su favor sentencia absolutoria. Argumenta además, que se ha violentado el procedimiento legal al haberse declarado concluida la instrucción fiscal, contraviniendo el Art. 222 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, coartándole su derecho a la legítima defensa. Que se ha hecho una falsa aplicación a lo dispuesto en el Art. 60 de la Ley de sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, ya que no tiene ninguna participación en el delito; y, que se ha violentado el Art. 88 del Código de Procedimiento Penal ya que no se ha valorado debidamente la prueba. Concluye, solicitando se acepte su recurso y se lo absuelva. **TERCERO.-** El Ministro Fiscal General del Estado, al dar contestación al escrito de fundamentación del

acusado, en lo fundamental, luego de hacer una referencia y análisis de la sentencia, expresa: que por definición el recurso de casación tiene por objeto corregir los errores de derecho cometidos en la sentencia; pero como sabemos está vedado por la naturaleza misma de este recurso de casación el valorar nuevamente la prueba ya estudiada por el juzgador; pero esto no implica que se analice si las reglas para la valoración de la prueba se han aplicado conforme a la ley, de igual manera las demás normas y disposiciones legales que rigen el sistema procesal penal ecuatoriano es por ello que una vez que se ha realizado dicho análisis se puede determinar que la sentencia recurrida guarda consonancia y sindéresis jurídica con los méritos del proceso y la pena impuesta. Por lo que el Ministro Fiscal General, estima que no procede el recurso de casación interpuesto por el recurrente. **CUARTO.-** El recurso de casación tiene el carácter de extraordinario y sólo procede en los casos expresamente determinados en el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal, que se concretan a la violación de la ley en sentencia por contravenir expresamente al texto de la ley; por haberse hecho una falsa aplicación de ella; o por haberla interpretado erróneamente, lo que hace que cada una de ellas tenga su propia individualidad, con características, y circunstancias que las diferencia y distingue. De otra parte, no es posible, a través del recurso de casación, efectuar una nueva valoración de la prueba, ésta es facultad soberana del Juzgador de instancia; y precisamente del texto de la sentencia pronunciada por la Corte Superior de Justicia de Tulcán al absolver la consulta de la sentencia dictada por el Tribunal Penal del Carchi, se aprecia como se ha realizado un amplio y pormenorizado análisis de la prueba aportada en la audiencia de juzgamiento, la cual al ser valorada con estricto apego a derecho y aplicando las reglas de la sana crítica los Juzgadores, con convicción y certeza declaran comprobada conforme a derecho la existencia material de la infracción con: **1.-** El testimonio de Marcelo Noboa, Depositario del CONSEP del Carchi, quien declara que el Agente Antinarcóticos del Carchi Sargento Ángel Cervantes, le entregó dos maletas, en cuya bases se encontraba debidamente oculto clorhidrato de cocaína, con un peso de 17.300 gramos, que fue destruido mediante incineración por orden del Juez de la causa, como consta del acta de fs. 28, exhibiendo al Tribunal una muestra que fuera extraída durante la diligencia de destrucción; y, **2.-** Testimonio del Perito Químico de la Fiscalía, Elías Vera, quien intervino en el análisis químico de la sustancia incautada en este caso, junto con la doctora Wilma Yambay, y que se afirma y ratifica en el informe presentado durante la instrucción fiscal, concluyendo que la muestra enviada en el presente caso corresponde a clorhidrato de cocaína. La responsabilidad del procesado Juan Alberto Gissi Viotti, los Juzgadores la establecen con: **1.-** Las declaraciones de los Agentes Antinarcóticos Eduardo Cisneros y Marco Chicaíza, quienes son unívocos y concordantes en manifestar que el 15 de agosto del 2006, a las 18H00 aproximadamente, prestando sus servicios en el Puente Rumichaca, solicitaron la revisión de las dos maletas que portaba un ciudadano que se trasladaba a pie por el Puente, quien se identificó como Juan Alberto Gissi Viotti de nacionalidad uruguaya, a las que el perro en dotación, ha dado señal positiva, por lo que con la ayuda de un punzón, perforaron las bases de dichas maletas, encontrando una sustancia con características de estupefacientes por lo que fue detenido; y, **2.-** Con el testimonio del acusado Juan

Gissi Viotti, quien refiere que el 16 de julio del 2006, se encontraba en Medellín-Colombia, ya que su esposa es colombiana y estando en un bar tomando unos tragos, se le acercó un ciudadano y le propuso un trato, del que no recordaba por estar muy borracho, que pasaron quince días y éste ciudadano lo llamó para indicarle qué ya estaba todo listo, y si no le cumplía iba a tomar represalias en contra de su familia, viéndose obligado a aceptar, le compraron un ticket de avión para viajar desde Guayaquil a Uruguay, llevando dos maletas que según el declarante le fueron entregadas en el Terminal Terrestre de Medellín, viene a Ecuador, cruzando el Puente Internacional de Rumichaca, al revisar la maleta con la ayuda de un perro, le indicaron que llevaba droga por lo que fue detenido. Circunstancias todas que lleva a los Juzgadores a declarar que el impugnante ha adecuado su conducta al Art. 60 de la Codificación de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas, que tipifica y sanciona la conducta que motiva el proceso, por lo que le impone la pena y multa que constan en el fallo, (pues el procesado, fue aprehendido en delito flagrante teniendo en su poder dos maletas que en sus bases tenían oculto sustancias estupefacientes, participación directa que en ningún momento, dentro de la audiencia de juzgamiento ha desvanecido frente a las pruebas de cargo que existen en su contra). De modo que con ello, se cumplen con las exigencias que se determinan en los Arts. 85; 250 que se refieren a la finalidad de la prueba; 86 que impone la forma como ha de apreciarse la prueba y 88 que se relaciona con el nexo causal entre la infracción y su responsable, todas del Código de Procedimiento Penal. Consecuentemente, el Tribunal Juzgador al dictar su sentencia lo hace con estricto apego a las normas de derecho y observando las garantías constitucionales y legales del derecho al debido proceso, sin que pueda observarse violación alguna de la ley, por lo que los cargos que se le imputan quedan como meros enunciados por no haberlos comprobado en forma alguna frente a una realidad objetiva e incontestable que recoge el texto de la sentencia. Más aún, la sentencia se halla debidamente motivada, conforme lo establece el numeral 13 del Art. 24 de la anterior Constitución Política de la República y actualmente consagrada en el literal 1) del numeral 7 del Art. 76 de la Carta Magna vigente, y cumple además con lo estipulado en los Arts. 304-A y 309 del Código de Procedimiento Penal. Por estas consideraciones la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY**, declara improcedente el recurso de casación interpuesto por Juan Alberto Gissi Viotti. Ordenándose la devolución del proceso al Tribunal Penal de Origen, para los fines de Ley. Actúe el Dr. Milton Álvarez Chacón, Secretario Relator Encargado, por licencia del Titular. Notifíquese.

f.) Dr. Luis Abarca Galeas, Juez Nacional Presidente.

f.) Dr. Máximo Ortega Ordóñez, Juez Nacional.

f.) Dr. Luis Quiroz Erazo, Conjuez.

Certifico:

f.) Dr. Milton Álvarez Chacón, Secretario Relator, encargado.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 24-6-2011; las- Certifico.- f.) Ilegible.- El Secretario Relator.

No. 025-2010

Juicio Penal No. 259-2008 seguido en contra de JOSE ROGELIO TOCAGÓN COBACANGO como autor responsable del delito de asesinato previsto y sancionado en el Art. 450 numerales 1, 4 y 5 del Código Penal.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO PENAL

Quito, Enero 15 de 2010.- Las 10h00.

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en calidad de Jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia y Conjuez Nacional, en virtud del Oficio No. 067-SG-2010-PCH. En lo principal. José Rogelio Tocagón Cobacango, interpone recurso de casación de la sentencia expedida el 3 de abril del 2008, por el Tribunal Segundo de lo Penal de Pichincha, que le declara autor responsable del delito de asesinato, previsto y sancionado en el Art. 450 numerales 1, 4 y 5 del Código Penal, imponiéndole la pena de dieciséis años de reclusión mayor especial. Concluido el trámite y siendo el estado de la causa, el de resolver, para hacerlo se considera: **PRIMERO.-** Esta Segunda Sala Especializada de lo Penal es competente para conocer y resolver este recurso de casación, en virtud del Art. 184 de la Constitución Política de la República del Ecuador, vigente a partir del 20 de octubre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 449; por lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 4 de la sentencia interpretativa 001-08-SI-CC de fecha 28 de noviembre de 2008, dictada por la Corte Constitucional de la República, publicada en el Registro Oficial No. 479 de 2 de diciembre de 2008; por Resolución Sustitutiva de 22 de diciembre del 2008, (publicada en el Registro Oficial No. 511 de 21 de enero de 2009), a la aprobada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, el 17 de diciembre de 2008; y, por el sorteo legal de 29 de mayo del 2008. **SEGUNDO.-** A fs. 3 a 5, del cuaderno de la Sala consta el escrito de fundamentación del recurso formulado por el recurrente José Rogelio Tocagón Cobacango, que en lo principal expresa: que el Tribunal Segundo de lo Penal de Pichincha no era el órgano competente para enjuiciarlo, puesto que de conformidad con el Art. 191 de la Constitución Política del Estado, ser miembro de la comunidad indígena Loma Gorda, parroquia Tupigachi, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, da viabilidad para que se aplique la justicia indígena a su caso. Se refiere también a ciertos

testimonios rendidos en la audiencia de juzgamiento, los que desde su particular punto de vista no constituyen prueba alguna, específicamente los rendidos por el suboficial de policía Fausto Gerardo Acurio Pérez y por Martín Cuascota Pujota; se debió tachar al último de los testigos citado por no ser idóneo, ya que se trata de un sujeto peligroso que ha sido procesado dos veces por agresiones físicas y tentativa de asesinato. En todo momento afirma que él no estuvo presente en el lugar en donde se suscitó el incidente doloso materia de esta causa, por cuanto se encontraba laborando en la plantación florícola "Bella Rosa de Tabacundo" en donde presta sus servicios, situación que considera fue debidamente comprobada mediante los testimonios de descargo y la documentación remitida por su empleadora, que justifican plenamente que antes de las 06h00 del 6 de enero del 2006, se encontraba laborando, lejos del lugar en donde se produjo el hecho delictivo, lo que ocasiona que no se aplique la disposición del Art. 88 numerales 2 y 3 literales c) y d) del Código de Procedimiento Penal; agrega además, que si bien se encuentra comprobada la materialidad de la infracción, no se pudo establecer la responsabilidad penal de cada uno de los miembros de la Comuna Loma Gorda, siendo la única forma de sancionarlos, de acuerdo al pluralismo jurídico contemplado en el inciso cuarto del Art. 191 de la Constitución Política de la República; debiendo tenerse en cuenta que el Juzgador hace una interpretación errónea de la forma en cómo se cometen los hechos, sin que existan documentos ni testimonios que determinen su presencia en la casa comunal a la hora del ajusticiamiento, de ahí se deduce la falsa aplicación, violación e interpretación extensiva del Art. 450 en sus numerales 1, 4 y 5 del Código Penal por parte del Segundo Tribunal Penal de Pichincha, órgano que en tal caso debió interpretar las normas aplicadas en el sentido más favorable al reo; infringiéndose además los Arts. 15 del Código Penal respecto al caso fortuito o fuerza mayor al realizarse una acción ilícita; 41, 42, 43 y 44 del mismo cuerpo legal en relación a la participación criminal en calidad de autor, cómplice o encubridor, calidades que no se adecúan a su proceder, al no haberse encontrado presente en la asamblea de la Comunidad de Loma Gorda en que, por unanimidad se resuelve sancionar a dos miembros peligrosos que atentaron contra la justicia ordinaria y la justicia indígena; considera que el órgano sentenciador también viola el Art. 123 del Código de Procedimiento Penal, ya que la declaración del menor Martín Cuascota no pudo ser tomada como testimonio propio, al no ser un tercero imparcial; así como las normas constitucionales contenidas en los Arts. 191, 23 numerales 26 y 27; que se refieren a la justicia de los pueblos indígenas, la seguridad jurídica y el debido proceso. **TERCERO.-** El Director Nacional de Asesoría Jurídica, Subrogante del Ministro Fiscal General del Estado, al contestar el traslado corrido con la fundamentación del recurso constante a fs. 9 a 12 del cuaderno de la Sala, luego de realizar el análisis de las pruebas actuadas en la audiencia de juzgamiento, en lo fundamental manifiesta: "...que para que el recurso extraordinario de casación prospere, es imprescindible, que quien recurre por esta vía, demuestre los errores de derecho en los que ha incurrido el Tribunal Penal, en cualquiera de las formas determinadas taxativamente en el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal; es decir cuando se ha violado la ley en la sentencia, ya por contravenir expresamente a su texto; ya por haberse hecho una falsa aplicación de ella, ya por haberla interpretado

erróneamente; por tanto este recurso extraordinario, no está destinado para que se realice una nueva valoración de la carga probatoria, actividad que fue debida y razonadamente efectuada por el juzgador. En el caso sub judice, el recurrente sentenciado en su escrito de fundamentación no ha logrado determinar y exponer una real y manifiesta violación de la ley en la sentencia que permita que la casación propuesta prospere, porque pretende que el Tribunal de casación vuelva analizar la carga probatoria, a más de evidenciarse una clara contradicción entre su alegación de no haber estado presente en el lugar de los hechos el día y la hora en que se produce la muerte de Cuascota Pujota y su solicitud de aplicación del Art. 191 de la Constitución Política de la República, que viabiliza la aplicación de la justicia indígena; lo que refleja una presunta justificación de sus actos, caso contrario no alegaría esta norma constitucional en defensa de sus acciones". Concluye solicitando, que la Sala declare improcedente el recurso de casación interpuesto por José Rogelio Tocagón Cobacango. **CUARTO.-** Examinada la sentencia por parte de la Sala, se observa que en la misma, el Tribunal Juzgador expresa que tanto la materialidad de la infracción como la responsabilidad del procesado se ha comprobado conforme a derecho con la práctica de las siguientes diligencias procesales actuadas en la audiencia del juicio, en lo que se refiere a la materialidad de la infracción con: **1.-** El protocolo de autopsia realizado por el perito médico legista, doctor Marlon Alexis Oviedo Ramírez en el occiso José Marco Cuascota Pujota, que luego del correspondiente examen externo e interno del cadáver, llegó a la conclusión de que la causa de la muerte fue por quemaduras de tercer grado en el noventa y nueve por ciento, de su superficie corporal, estableciéndose que su muerte fue violenta. Además encontró dos heridas contusas en la región parietal, producidas por la fuerza de impacto de un objeto contundente duro, sin bordes ni aristas; quemaduras de segundo grado en los pabellones auriculares, córneas dilatadas en 5 centímetros, desprendimiento epidérmico en el tórax y el abdomen, dorso con zonas edematosas, evidenciándose por el color rojo de la piel, que cuando se metió a la persona al fuego estaba viva. **2.-** Testimonio del sargento segundo de policía Pedro Bolívar Guevara Guerra, quien manifestó que realizó el levantamiento del cadáver de José Marco Cuascota Pujota en compañía del policía Oscar Cevallos en la morgue del Hospital Eugenio Espejo de Quito el 8 de enero del 2006, a las 15H00, determinándose que el cuerpo del occiso estaba completamente quemado y lleno de ampollas. **3.-** Testimonio del policía Javier Cevallos Guzmán, agente que participó en el levantamiento del cadáver de José Cuascota Pujota en la morgue del Hospital Eugenio Espejo de Quito, lugar al que acudió por llamado de la Central de Radio Patrulla y en compañía del padre del fallecido se dirigieron a la Policía Judicial, persona que le indicó que su hijo fue acusado de robo por la comunidad en donde habitan, habiéndose decidido por los moradores quemarlo. **4.-** Testimonio del suboficial de policía Segundo Fausto Gerardo Acurio Pérez, quien expresa, que por la llamada de la central de radio patrulla acudió a la Comuna Loma Gorda, del cantón Tabacundo, el 6 de enero del 2006, aproximadamente a las 06H40, con la finalidad de verificar el linchamiento del cual le informaron. En este lugar encontró a un ciudadano amarrado con alambres que aún estaba vivo, incidente del cual nadie supo dar razón, hasta que pudo enterarse que la Comunidad había decidido

reunirse el 5 de enero del 2006 para aprobar el linchamiento de Marco Cuascota Pujota, considerado como un delincuente avezado que se dedicaba a robar y a violar, se procedió a apagar el fuego del cuerpo del linchado y le zafaron las amarras para ponerlo en el patrullero y llevarlo al hospital del cantón Cayambe; debiendo abandonar la escena ya que los comuneros insinuaron que se queme también al policía, de ahí que no se pudieron recoger ciertas evidencias; y, **5.-** Testimonio de María Dolores Pujota Bautista, quien indicó que su marido le supo informar que a sus sobrinos Marco y Martín Cuascota los han cogido para quemarlos, porque se les ha encontrado en varias ocasiones robando a los comuneros. Cuando llega al lugar de los hechos, su sobrino Marco estaba quemado, amarrado con alambres los pies y las manos, por lo que lo único que pudo hacer fue ayudar a la policía a desamarrar los alambres. Alrededor estaban muchas personas, todos bebidos, sin que tenga conocimiento de quienes son los dirigentes jurídicos de la comuna. La Responsabilidad del procesado se la establece con: **1.-** El testimonio del menor Luis Martín Cuascota Pujota, rendido en presencia de su curador Eduardo Cuascota, quien manifestó que en la madrugada del viernes 6 de enero del 2006 a él y a su hermano Marco Cuascota les sacaron de su casa varias personas, recordando con claridad únicamente a Rogelio Tocagón, a quien lo identifica como el autor de la muerte de su hermano, puesto que fue la persona que le lanzó gasolina y prendió el fósforo. Afirma que Tocagón era la persona que tenía la poma azul con gasolina y que le regó el combustible a su hermano Marco desde la cabeza a los pies y procedió a quemarlo en conjunto con otras cinco personas, entre ellos Alberto Cabascango. Expresa que a él por ser menor de edad no lo quemaron, pero que lo pegaron, bañaron en agua fría, le ortigaron, todo esto porque supuestamente se dedica a robar, hecho que lo desmiente enfáticamente; y, **2.-** Testimonio del acusado José Rogelio Tocagón Cobacango, quien manifiesta, que el día 6 de enero del 2006 se levantó a las 04h30 y salió de su casa a las 05h30 con dirección a su trabajo, al cual llega alrededor de las 05H50, haciéndose presente ante el supervisor Elías Sánchez. Refiriendo además que ese día limpió canales de bloques en compañía de sus compañeros de apellido Castillo y Toapanta, con quienes incluso jugó vóley, asegurando que laboró hasta las 15h00 y que cuando retornó a su casa, se enteró de lo sucedido. Las pruebas actuadas por el acusado no han conseguido desvirtuar la acusación fiscal, ni su no participación en este delito, pues si bien se circunscriben a ese día, éstas se refieren a otras horas, personas y lugares, donde no se suscitó el hecho, ni tiene que ver con el mismo, quedando en claro su participación directa, consciente y voluntaria en el caso que se juzga. De todo lo examinado esta Sala, observa que para establecer el nexo causal entre el acto ilícito que motiva el proceso con el agente activo del mismo, el Tribunal Segundo de lo Penal de Pichincha, procedió a realizar un estudio prolijo y detallado de toda la prueba, solicitada, ordenada y producida en la audiencia de juzgamiento, para luego en acto soberano efectuar su valoración con estricto apego a las normas legales pertinentes y de conformidad a las reglas de la sana crítica llegó a declarar con convicción y certeza tanto la existencia material del hecho que se juzga, como la responsabilidad del acusado, por lo que esta Sala estima que el Tribunal Juzgador adecuó correctamente la conducta del procesado en el delito de asesinato tipificado y sancionado en el Art. 450 bajo las circunstancias constitutivas de los numerales

(1) alevosía, pues ella presume que haya premeditación que constituyen elementos generadores de la malicia, la traición, la cobardía, como signos de este comportamiento, así como medios que aseguren el cometimiento del delito penal sin riesgo personal del hechor; la alevosía no se figura, sino que emerge como resultados de hechos acreditados con prueba concluyente, suceso y consecuencia que existe de autos pues el procesado aseguró la muerte de su víctima al rosearlo con gasolina desde la cabeza hasta los pies y procedió a prenderle fuego; (4) con ensañamiento pues aumento deliberadamente e inhumanamente el dolor de la víctima, (5) procediendo a imposibilitar a la víctima para que no pueda defenderse, atándolo con alambres a un poste; así también es correcta la pena impuesta sin la consideración de atenuantes, pues según el tratadista ecuatoriano Francisco Pérez Borja, cuando existe varias agravantes aplicables al Art. 450 ibidem como en este caso las contempladas en los numerales 1, 4 y 5, una de ellas es constitutiva del tipo de asesinato, y las demás operan como agravantes propiamente dichas, por lo cual no se puede aplicar atenuantes, al tenor de lo dispuesto en el Art. 72 del Código Penal. En lo referente a lo argumentado por el recurrente en el sentido de que se debería aplicar el Art. 191 de la Carta Magna en su caso, que se refiere al reconocimiento a las autoridades de los pueblos indígenas el ejercicio de funciones de justicia, aplicando sus costumbres o derecho consuetudinario; al respecto y como bien lo advierte el Subrogante del Ministro Fiscal General del Estado, jamás podrá ser legítimo y justo, si implica la vulneración de derechos fundamentales reconocidos y garantizados para todos los habitantes de la República; situación que claramente está determinada en el mismo Art. 191 de la Constitución Política de la República en su inciso cuarto, que dice: "... Las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de justicia, aplicando normas y procedimientos propios para la solución de conflictos internos de conformidad a sus costumbres o derecho consuetudinario, siempre que no sean contrarias a la Constitución y las leyes...". Alega también el recurrente que se violó el Art. 123 del Código de Procedimiento Penal, ya que la declaración del menor Martín Cuascota no pudo ser tomada como testimonio propio, al no ser un tercero imparcial; en torno a esto, la Sala advierte que el Art. 24 numeral 9 inciso segundo de la Constitución Política de la República del Ecuador anterior y hoy Art. 77 numeral 8 de la Carta Magna vigente establecen, respectivamente que: "... Serán admisibles las declaraciones voluntarias de quienes resultaren víctimas de un delito o las de los parientes de ésta, con independencia del grado de parentesco. ..." y "... Serán admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o de los parientes de éstas, con independencia del grado de parentesco. ...". Consecuentemente, la Sala advierte que la sola disconformidad con una sentencia de última instancia, no autoriza a recurrir en casación, pues este recurso extraordinario procede únicamente cuando en la Resolución definitiva se ha quebrantado la ley en alguna de las hipótesis fijadas en el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal, esto es por contravenir expresamente a su texto, o por haberse hecho una falsa aplicación de la norma o por haberla interpretado erróneamente; para el caso ninguno de estos eventos, logra demostrar el recurrente al sustentar la impugnación. De otro lado, necesario es destacar que por cuanto la casación no es un recurso ordinario, no está en la esfera de las facultades de la Sala efectuar nueva valoración

del causal probatorio, ni volver analizar los argumentos, jurídicos sostenidos por los sujetos procesales durante la sustanciación de la causa. Finalmente se concluye que el Tribunal Juzgador, al dictar su sentencia lo hace con estricto apego a las normas de derecho, sin que pueda observarse violación de la ley y mucho menos el Art. 4 del Código Penal, porque los hechos narrados y referidos conducen a la sola conclusión que el Tribunal Juzgador formula, respaldado en la convicción y certeza de la existencia material del hecho y de la culpabilidad del recurrente; por lo que los cargos que se le imputan a la sentencia resulta infundados y no enervan, las conclusiones a las que arribó el Tribunal Juzgador. Por estas consideraciones, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY**, La Sala declara improcedente el recurso de casación interpuesto por el procesado José Rogelio Tocagón Cobacango, ordenándose que se devuelva el proceso al Tribunal Penal de origen. Actúe el Dr. Milton Álvarez Chacón, Secretario Relator Encargado, por licencia del Titular. Notifíquese.

f.) Dr. Luis Abarca Galeas, Juez Nacional Presidente.

f.) Dr. Máximo Ortega Ordóñez, Juez Nacional.

f.) Dr. Luis Quiroz Erazo, Conjuez.

Certifico:

f.) Dr. Milton Álvarez Chacón, Secretario Relator, encargado.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 24-6-2011; las- Certifico.- f.) El Secretario Relator.

No. 029-2010

Juicio Penal No. 1255-2009 seguido en contra de LUIS EFRAIN COLLAHUAZO MUÑOZ, como coautor responsable del delito tipificado en el Art. 550, 551, 552 numerales 1, 2 y 601 del Código Penal.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO PENAL

Quito, 18 de enero de 2009, las 16h00.

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en calidad de Jueces Nacionales de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia y Conjuez Nacional en

virtud del oficio No. 067-SG-2010-PCH. En lo principal, Luis Efraín Collahuazo Muñoz, interpone recurso de casación de la sentencia condenatoria dictada por el Primer Tribunal de Garantías Penales del Azuay, en la que se le declara coautor responsable del delito tipificado en el Art. 550, 55, 552 numerales 1 y 2 y 601 del Código Penal, imponiéndole la pena de seis años de reclusión menor. Para resolver se considera: **PRIMERO:** Esta Segunda Sala Especializada de lo Penal es competente para conocer y resolver este recurso de casación, en virtud del Art. 184 de la Constitución de la República del Ecuador, vigente a partir del 20 de octubre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 449; por lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 4 de la Sentencia Interpretativa: 001-08-SI-CC, de fecha 28 de noviembre de 2008, dictada por la Corte Constitucional de la República, publicada en el Registro Oficial No. 479, de 2 de diciembre de 2008; por el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal y por el sorteo legal de 13 de octubre del 2009. **SEGUNDO:** Aceptado a trámite el recurso de conformidad con lo previsto en el Art. 345 del Código de Procedimiento Penal se lleva a cabo la audiencia el día cuatro de noviembre de 2009, a las quince horas cuarenta minutos, ante la presencia del Dr. Waldo Santelices, abogado defensor del recurrente Luis Efraín Collahuazo Muñoz; el señor representante de la Fiscalía, Dr. Julio César Molina. Se concede la palabra al abogado del recurrente para que fundamente su recurso, quien expone lo siguiente: La sentencia objeto de este recurso, fue dictada por el Primer Tribunal de Garantías Penales del Azuay, se condena a Luis Collahuazo Muñoz por los delitos contenidos en los artículos del 550 al 552 del Código Penal, en sus numerales 1,2 pasando por la pandilla y demás; imponiéndole la pena de seis años de reclusión menor, el 29 abril de 2009 en Cuenca, dos personas no identificadas en la sentencia, entran en el supermercado AKI, dos ciudadanos, entran y ocasionan heridas a unas personas presentes, la camioneta Luv era conducida por Luis Collahuazo. La sentencia es efecto de testigos y otras diligencias de reconocimiento de evidencias, entre otras. El procesado no se defendió técnicamente a fin de demostrar la inocencia, quiero demostrar los errores de derecho, seis años fue la condena, por alarma social, que no se demostró. Debíó aplicar el Tribunal las atenuantes. En caso de delitos de violación, concusión, asalto al banco, etc. Se aplica la alarma social, si bien es cierto es un robo agravado, no se usaron armas de grueso calibre, no hubo un perjuicio material más que una maquina lectora de barras avaluada en \$ 1.200 USD. Si bien es cierto que el supermercado AKI es público, no se ha probado que hubo cantidad de gente, que haya sido en horario de atención, etc. El principio de proporcionalidad de la pena, Art. 77 numeral 11 de la Constitución, atendiendo este criterio, en cuanto a la antijuricidad material que está dada, es mínima, la sustracción ascendía a algo más de \$ 1000 USD, no le afecta sustancialmente. Los hechos se adecuan 552 numeral 1 y 2 del Código Penal. Violaciones de ley expresadas, además no aplican atenuantes por existir agravantes, los hechos han puesto en peligro vidas de otras personas, no se ha demostrado que hayan otras personas. Jamás se les privó del conocimiento, se aplica indebidamente una de las agravantes que es modificatoria del robo. El Tribunal ha cometido error en aplicar agravantes no demostradas y no aplica atenuantes. Por tanto, pido se case la sentencia. Luis Collahuazo Muñoz es sentenciado como coautor y él es cómplice porque

manejaba la camioneta a fin de facilitar el escape, determinar si Luis Collahuazo aumentó las probabilidades de éxito, no se subsume en el Art. 42 del Código Penal. El tribunal deja de aplicar el Art. 43, pido a la Sala se le califique como cómplice del delito. Toma la palabra el señor representante de la Fiscalía General quien dice: La Fiscalía a través de la historia reciente de los procesos de casación ha venido sosteniendo posiciones como Institución. El proceso de casación está concebido como un mecanismo de impugnación que se dirige a uniformidad de la jurisprudencia, requiere técnica de fondo, es esencial analizar el contexto ideológico de las normas y desde este punto de vista, los hechos no pueden servir de antecedente para fundamentar el recurso de casación. El juzgador aprecia los hechos y no hay impugnación a eso. Respecto a lo dicho por el recurrente, decimos que los razonamientos y conclusiones que realizó el Tribunal Penal del Azuay, el Tribunal ha determinado la concurrencia de circunstancias que modifican las circunstancias 1 y 2 del Art. 552 del Código Penal, por los resultados que palpo el Juez, estimó como agravantes, la Fiscalía está de acuerdo que se puso en riesgo a la concurrencia, que estaban en el momento y lugar de los hechos. La alarma social tiene efecto potencial, cuando la ciudadanía toma en cuenta estos actos de delincuencia, la alarma social debe ser entendida objetivamente respecto a la integración de un hecho delictivo. No existe error al momento de realizar la calificación jurídica de los hechos, como una calificación exclusiva y excluyente, tomando en cuenta que el recurrente manifiesta que hay robo, no existe error en vista de la estimación de las agravantes numéricas, de los concurrentes a ese lugar. Causó espectacularidad en cuanto al peligro, a la inmediatez que ponía en peligro a las personas. Dimensionado en el Art. 30, al juzgador le corresponde vía interpretación elaborar la tesis que se encasillen en la norma; tampoco existe error al momento de considerar que existían atenuantes, el sometimiento impidiendo defensa alguna y resultaron con lesiones. La Fiscalía observa que no hay vicio de derecho en el nivel de participación. No hay error, la norma del Art. 42 del Código Penal desarrolla la tesis de autoría, cuando al acto delictivo concurren voluntades para el ejercicio de roles. División que implica una orientación o a la coadyuvación del delito. La autoría mediata también se inscribe en los términos mencionados en la sentencia. En el caso de Luis Collahuazo, él manejaba el vehículo, la posición de él fue determinante para conseguir los propósitos; proporcionó un medio necesario para el perfeccionamiento del acto. Tanto es así que se le encontró con los objetos producto del hecho delictivo. Para la Fiscalía no hay elementos, por estas razones reitero la posición institucional de la Fiscalía. Si acaso se considerara que el Juzgado ha incurrido en errores al momento, son errores fácticos que no son posibles subsanar con el recurso de casación. Frente a la fundamentación realizada solicito desestimar el recurso de casación propuesto por Luis Collahuazo Muñoz. Réplica del defensor: El Fiscal ha manifestado existe un riesgo, pero olvida que no existe una prueba que haya habido público, los actos se limitan a una lesión al riesgo de personas, no es agravante la violencia. El Art. 42 del Código Penal, habla de la autoría mediata, la perfección del delito de robo va con el apoderamiento. Errores in iudicando, de normas sustantivas. No se pide revalorizar pruebas, sino subsanar los errores, entregó documentación para respaldar mi fundamentación y alegaciones, por tanto pide se acepte el recurso incoado.

TERCERO: Este Tribunal apreciando el mérito de las intervenciones realizadas por los sujetos procesales en relación al contenido de la sentencia impugnada y al acta de juzgamiento por ser parte de esta, establece que: 1) El Tribunal juzgador no comete errores de derecho en el contenido de la sentencia; 2) Que la valoración de la prueba el juzgador la ha realizado conforme a las reglas de la sana crítica establecida en el Art. 86 del Código de Procedimiento Penal y al principio de concentración de la prueba establecido en el numeral 6 del art. 168 de la Constitución de la República, porque las ha considerando tanto individualmente como en su conjunto para arribar a la conclusión de certeza de la existencia del delito objeto del juicio y de la responsabilidad penal del acusado como su autor; 3) Que la calificación jurídica penal del delito objeto del juicio se encuentra conforme a derecho; 4) Que el fallo condenatorio se ha motivado con pruebas obtenidas, practicadas y valoradas constitucionalmente, por lo que se observa la garantía de la debida motivación contemplada en el literal 1) del No. 7 del Art. 76 de la Constitución de la República y en el Art. 304-A del Código de Procedimiento Penal. **CUARTO:** El recurrente reclama atenuantes sin especificar cuales son las que tiene a su favor y la forma en que las ha probado, por lo que esta alegación carece de fundamento. No obstante la Sala revisando la sentencia establece que no existen atenuantes a favor del acusado por no haber presentado prueba en este sentido, sino que por el contrario el Tribunal declara que existe el agravante de haber ocasionado alarma social, por la forma en que se sucedieron los hechos, al haberse puesto en peligro a varias personas. Por estas consideraciones, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY**, se declara improcedente el recurso de casación presentado por Luis Efraín Collahuazo Muñoz.- Notifíquese.

f.) Dr. Luis Abarca Galeas, Juez Nacional, Presidente.

f.) Dr. Máximo Ortega Ordóñez, Juez Nacional.

f.) Dr. Luis Quiroz Erazo, Juez Nacional (V.S.)

f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator, Segunda Sala de lo Penal, Corte Nacional de Justicia.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 24-6-2011.- las- Certifico.- f.) El Secretario Relator.

No. 030-2010

Juicio Penal No. 303-2009 seguido en contra de HERMINIO LEOPOLDO CHUCHUCA LEÓN como autor del delito tipificado y sancionado en el Art. 341 del Código Penal.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO PENAL

Quito, 15 de enero del 2010.- Las 09h20.

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en calidad de Jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia y Conjuez Nacional en virtud del oficio No. 067-SG-2010-PCH. En lo principal, el recurrente Herminio Leopoldo Chuchuca León, interponen recurso de casación de la sentencia dictada por el Segundo Tribunal de lo Penal del Azuay, que lo declara autor del delito tipificado y sancionado en el Art. 341 del Código Penal, imponiéndole la pena de dos años de prisión. Concluido el trámite y siendo el estado de la causa, el de resolver, para hacerlo se considera: **PRIMERO:** Esta Segunda Sala Especializada de lo Penal es competente para conocer y resolver este recurso de casación, en virtud del Art. 184 de la Constitución de la República del Ecuador, vigente a partir del 20 de octubre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 449; por lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 4 de la Sentencia Interpretativa: 001-08-SI-CC, de fecha 28 de noviembre de 2008, dictada por la Corte Constitucional de la República, publicada en el Registró Oficial No. 479, de 2 de diciembre de 2008; por el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal y por sorteo de 7 de enero de 2009. **SEGUNDO:** A fojas 3 a 6 del cuadernillo de casación, el recurrente Herminio Leopoldo Chuchuca León, realizan un análisis desde su particular punto de vista de las actuaciones probatorias practicadas en esta causa y a continuación fundamentan el recurso de casación expresando en lo principal: Que la instrucción ha sido iniciada únicamente con una copia certificada entregadas por el Juzgado de lo Civil del Azuay, y que la condena impuesta ha sido injusta ya que él sigue a su cuñada un juicio ejecutivo y el documento ha sido auténtico, firmado por ella como lo confirma el perito Dr. Galo Rodas en su informe que no ha sido aceptado por la Fiscalía ya que ha sido presentado cuando se declaró concluida la instrucción, por lo que en la sentencia se ha violado los Arts. 24 numeral 7 de la Constitución y 4 del Código Penal. **TERCERO:** El señor Representante del Ministerio Público, contestando al traslado con la fundamentación del recurso de casación, luego de realizar el respectivo análisis de la sentencia impugnada emite su criterio en los siguientes términos: "(...) *No tiene asidero legal los alegatos planteados por el acusado pues conforme se deja especificado en líneas anteriores el acto ejecutado obedece a una conducta imputable., de la que se advierte pleno conocimiento y voluntad para ejecutarlo. No se aprecian como trasgredidas las normas consignadas en el artículo 24 de la Constitución Política del Estado y la invocada por el recurrente respecto del Código de Procedimiento Penal, que tiene que ver con el debido proceso y los principios fundamentales, pues son justamente las constancias procesales las que demuestran que el imputado y luego acusado gozó de los derechos consignados en la Carta Magna (...)*" **CUARTO:** El sentenciado recurrente dentro de la fundamentación de su recurso de casación se concreta al análisis de las actuaciones procesales practicadas en el curso de la instrucción fiscal, así como las pruebas practicadas en la audiencia de juzgamiento, expresando que el Juzgador no ha considerado en su verdadero significado estas pruebas para resolver, lo cual evidentemente no es

materia de casación penal, porque el objeto de ésta se concreta a corregir los errores de derecho cometidos por el Juzgador en la sentencia, violando la ley en cualquiera de las formas establecidas en el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal. **QUINTO:** La alegación de que el Juzgador no ha valorado la prueba conforme a los intereses del acusado deviene en inepta porque no se precisa qué Ley ha violado el juzgador en la valoración de la prueba, puesto que solo cuando esta valoración es inconstitucional o ilegal, es materia de casación penal, pero no para realizar una nueva valoración sino solamente para verificar si efectivamente se viola la ley en dicha valoración. **SEXTO:** En la casación penal no se juzga al acusado sino a la sentencia, por lo que, en la fundamentación del recurso de casación deberá señalarse la ley que se ha violado y la forma en la que se la ha violado lo cual no costa en la fundamentación presentada en esta causa. **SEPTIMO:** No obstante, la Sala frente a la alegación del recurrente en el sentido de que solamente se ha presentado un perito que elaboró el informe en el que la Fiscal fundamentó su acusación, por lo que no tiene valor de prueba, se observa que para la práctica de las experticias en la institución fiscal solamente se requiere de la intervención de un perito, incluyendo entre estas las experticias documentológicas, en aplicación del Art. 95 del Código de Procedimiento Penal salva el caso de los documentos electrónicos en la que se requiere dos peritos, según lo establece el Art. 156 de este mismo Código procesal por lo que deviene en improcedente la alegación del recurrente. Por estas consideraciones, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY**, se declara improcedente el recurso interpuesto por el recurrente Herminio Leopoldo Chuchuca León. Actúe el Dr. Milton Álvarez Chacón, Secretario Relator Encargado, por licencia del Titular. Notifíquese.

f.) Dr. Luis Abarca Galeas, Juez Nacional Presidente.

f.) Dr. Máximo Ortega Ordóñez, Juez Nacional.

f.) Dr. Luis Quiroz Erazo, Conjuez Nacional.

Certifico:

f.) Dr. Milton Álvarez Chacón, Secretario Relator, encargado.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 24-6-2011; las- Certifico.- f.) Ilegible.- El Secretario Relator.

No. 031-2010

Juicio Penal No. 232-2009 seguido en contra de DANIEL CRIOLLO ALBARRACIN, como autor del delito tipificado y sancionado en los Arts. 550 y 551 del Código Penal en relación con el numeral 2 (noche) del Art. 552 del mismo cuerpo punitivo.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO PENAL

Quito, 15 de enero del 2010.- Las 17h10.

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en calidad de Jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia y Conjuez Nacional en virtud del oficio No. 067-SG-2010-PCH. En lo principal, el representante del Ministerio Público, interpone recurso de casación de la sentencia dictada por el Segundo Tribunal de lo Penal del Azuay, que declara autor del delito tipificado y sancionado en el Art. 550, 551 del Código Penal en relación con el Art. 552 numeral 2(noches) del mismo Cuerpo punitivo, a Daniel Criollo Albarracín, imponiéndole la pena de cinco meses, diez días de prisión correccional. Concluido el trámite y siendo el estado de la causa, el de resolver, para hacerlo se considera: **PRIMERO:** Esta Segunda Sala Especializada de lo Penal es competente para conocer y resolver este recurso de casación, en virtud del Art. 184 de la Constitución de la República del Ecuador, vigente a partir del 20 de octubre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 449; por lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 4 de la Sentencia Interpretativa: 001-08-SI-CC, de fecha 28 de noviembre de 2008, dictada por la Corte Constitucional de la República, publicada en el Registro Oficial No. 479, de 2 de diciembre de 2008; por el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal y por sorteo de 7 de enero de 2009. **SEGUNDO:** El señor Representante del Ministerio Público en su fundamentación del recurso de casación, luego de realizar el respectivo análisis de la sentencia impugnada emite su criterio en los siguientes términos: "(...) En la causa el Segundo Tribunal Penal del Azuay hace una adecuada valoración de la prueba, de la que concluye, como se dijo anteriormente, que el acusado es el autor del delito de robo calificado; pero le impone la pena de dos años de prisión correccional, la misma que posteriormente es atenuada, infringiendo lo dispuesto en las normas antes citadas, pues el Art. 552 del Código Penal señala: "el máximo de la pena establecidas en el artículo anterior, se aplicará al responsable si concurre alguna de las siguientes circunstancias: ... 2. Si el robo se ha ejecutado con armas o por la noche, o...", estableciendo el Art. 551 ibidem la pena máxima de cinco años de prisión correccional; razonamiento que determina que el Juzgador infringió las normas citadas, por lo que insisto y fundamento el recurso de casación interpuesto (...)".- **TERCERO:** La Fiscalía General formula contra la sentencia el cargo de que la pena impuesta al acusado no corresponde a la que establece la ley porque concurre la circunstancia constitutiva determinada en el No. 2 del Art. 552 del Código Penal. Al respecto, revisado el contenido de la sentencia la Sala establece que en el considerando QUINTO el juzgador declara: "Para graduar la pena que corresponde imponer se considera que no es reincidente, de que no existe ninguna agravante no constitutiva ni modificatoria de la infracción y que se han probado atenuantes contempladas en los numerales 6 y 7, 8 y 11 del Art. 29 del Código Penal, que, por lo que procede la modificatoria de la pena" en tanto que en la resolución declara al acusado autor responsable del delito de robo tipificado y sancionado en el Art. 550, 551 en relación al Art. 552, numeral 2 (noche) todos del Código Penal, por lo que se le impone la pena de

dos años de prisión correccional, la misma que por las atenuantes probadas, se la modifica de conformidad con lo dispuesto en el Art. 73 del Código Penal y en definitiva se le impone al pena de cinco meses diez de prisión correccional..". Observándose, que existe un error de derecho tanto en el referido considerando como en la parte resolutive de la sentencia porque si ocurrió en la noche el máximo de la pena prevista en el Art. 552, en referencia al Art. 551 del Código Penal es la de seis años, en consideración a que el robo cometido por la noche califica al delito y determina que se imponga la pena de seis años de reclusión menor ordinaria, ya que la nocturnidad es circunstancia constitutiva y determinante de que el robo simple se convierta en robo agravado por concurrir atenuantes en aplicación del inciso final del Art. 72 del Código Penal, determina que se la reduzca a prisión correccional de uno a tres años, por lo que la alegación de la Fiscalía General es procedente y amerita que se proceda a la corrección de este error cometido tanto en el referido considerando como en el fallo condenatorio. Por estas consideraciones, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY**, se acepta el recurso de casación deducido por la doctora Julia Vásquez Moreno, Agente Fiscal del Distrito del Azuay y corrigiendo los errores de derecho cometidos en la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Penal del Azuay, se le impone al acusado la pena de dos años de prisión correccional, por cuanto la calificación jurídica penal del delito objeto del juicio corresponde a la de robo agravado tipificado en el Art. 552 con relación con los Arts. 550 y 551 del Código Penal. Actúe el Dr. Milton Álvarez Chacón, Secretario Relator Encargado, por licencia del Titular. Notifíquese.

f.) Dr. Luis Abarca Galeas, Juez Nacional Presidente.

f.) Dr. Máximo Ortega Ordóñez, Juez Nacional.

f.) Dr. Luis Quiroz Erazo, Conjuez Nacional.

Certifico:

f.) Dr. Milton Álvarez Chacón, Secretario Relator, encargado.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 24-6-2011.- las- Certifico.- f.) El Secretario Relator

No. 032-2010

Resolución No. 032-2010.- Juicio Penal No. 568-2007 seguido en contra de EDISON ARTURO PALMA OSTAIZA, como autor del delito tipificado en el Art. 554 del Código Penal y sancionado en el Art. 555 del mismo cuerpo legal.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO PENAL

Quito, 15 de enero de 2010, las 17h00.

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en calidad de Jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia y Conjuez Nacional en virtud del oficio No. 067-SG-2010-PCH. En lo principal, el recurrente Edison Arturo Palma Ostaiza, interpone recurso de casación de la sentencia dictada por el Cuarto Tribunal de lo Penal de Manabí, que lo declara autor del delito tipificado en el Art. 554 del Código Penal y sancionado en el Art. 555 del mismo cuerpo legal, imponiéndole la pena de dos años de prisión. Concluido el trámite y siendo el estado de la causa, el de resolver, para hacerlo se considera: **PRIMERO:** Esta Segunda Sala Especializada de lo Penal es competente para conocer y resolver este recurso de casación, en virtud del Art. 184 de la Constitución de la República del Ecuador, vigente a partir del 20 de octubre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 449; por lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 4 de la Sentencia Interpretativa: 001-08-SI-CC, de fecha 28 de noviembre de 2008, dictada por la Corte Constitucional de la República, publicada en el Registro Oficial No. 479, de 2 de diciembre de 2008; por el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal y por sorteo de 19 de noviembre de 2007. **SEGUNDO:** A fojas 3 a 8 del cuadernillo de casación, el recurrente Edison Arturo Palma Ostaiza, fundamenta el recurso de casación expresando en lo principal: Que se ha violado en la sentencia los Arts. 71, 80, 92, 106, 250 del Código de Procedimiento Penal, Arts. 25, 216 numerales 2, 5, 8, 9, 10 del mismo cuerpo de leyes; Art. 23, numerales 8, 17, 23, 26, 27, Art. 24 numeral 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, Art. 192 y 194 de la Constitución de la República, haciendo una falsa aplicación del texto de las normas sustantivas y adjetivas, ya que sin que exista la esencia material de la infracción conforme lo establece el Art. 106 en esta sentencia dictada por el Tribunal la que se sanciona de acuerdo al Art. 554 y 555 del Código Penal, siendo completamente falsa la aplicación. **TERCERO:** El señor Representante del Ministerio Público, contestando al traslado con la fundamentación del recurso de casación, luego de realizar el respectivo análisis de la sentencia impugnada emite su criterio en los siguientes términos: "(...) Es importante señalar que de acuerdo con la doctrina penal en referencia a las infracciones del caso, en la ley ecuatoriana se ha tipificado en primer lugar como tipo general el robo, esto es la sustracción ilícita de cosa ajena por empleo de fuerza en las cosas o violencia en las personas; y, en segundo lugar el abigeato que es un tipo penal subsidiario de robo o de hurto según sea el caso, en que el objeto material se concreta en la sustracción de animales pertenecientes al ganado caballar, vacuno, porcino, lanar desde los sitios destinados para la conservación, cría y ceba de los mismos; en consecuencia, en la especie se ha configurado el delito de abigeato porque el sujeto activo ha sustraído un animal en las circunstancias tipificantes del abigeato. Por las razones antes indicadas, existe coherencia y sistematización entre los hechos que describe el juzgador en la parte expositiva con lo resuelto en la parte dispositiva y con las disposiciones legales aplicadas al caso (...)" **CUARTO:** La Sala después del análisis del contenido de la sentencia en relación a la fundamentación del recurso de casación y a la

contestación presentada a esta, establece que el acusado recurrente pretende una nueva valoración de la prueba, ya que la analiza desde su punto de vista de su interés personal pretendiendo que el Tribunal de Casación haga una nueva valoración de la prueba, lo cual no se encuentra dentro de sus facultades si no solamente la de verificar que el fallo condenatorio se encuentre debidamente motivado con pruebas obtenidas, practicadas y valoradas constitucionalmente. Al respecto, revisada el acta del juzgamiento y el contenido de la sentencia, no se observa que el juzgador haya utilizado para motivar el fallo condenatorio pruebas inconstitucionales, ni tampoco que haya violado las reglas de la sana crítica establecida en el Art. 86 del Código de Procedimiento Penal y el principio de la valoración de la prueba establecido en el No. 6 del Art. 168 de la Constitución de la República. En efecto la materialidad del delito objeto del juicio se ha establecido conforme lo determina la ley con pruebas actuadas constitucionalmente en la audiencia de juzgamiento así como también se ha comprobado la responsabilidad del acusado ahora recurrente Edison Arturo Palma Ostaiza conforme lo requiere el Art. 1 del Código de Procedimiento Penal. **QUINTO:** Por lo tanto, el fallo condenatorio se encuentra debidamente motivado acorde lo exige el literal 1) del No. 7 del Art. 76 de la Constitución de la República y el Art. 304-A del Código de Procedimiento Penal, por lo que el juzgador no ha cometido los errores de derecho que sin fundamento alguno se le imputan en la fundamentación del recurso de casación. Por estas consideraciones, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY**, se declara improcedente el recurso de casación presentado por Edison Arturo Palma Ostaiza. Actúe el Dr. Milton Álvarez Chacón, Secretario Relator Encargado, por licencia del Titular. Notifíquese.

f.) Dr. Luis Abarca Galeas, Juez Nacional Presidente.

f.) Dr. Máximo Ortega Ordóñez, Juez Nacional.

f.) Dr. Luis Quiroz Erazo, Conjuez Nacional.

Certifico:

f.) Dr. Milton Álvarez Chacón, Secretario Relator, encargado.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 24-6-2011.- las- Certifico.- f.) Ilegible.- El Secretario Relator.

No. 034-2010

Juicio Penal No. 570-2009 seguido por FRANCISCO LEONARDO GARCÍA BAZURTO en contra de REYES CASIMIRO CARRANZA TUÁREZ, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 76 en concordancia con el Art. 79, literal b), de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO PENAL

Quito, 21 de enero del 2010, las 09h50.

VISTOS (570-2009): Avoco conocimiento de la presente causa en mi calidad de Conjuez Nacional en virtud del oficio No. 067-SG.2010.PCH. En lo principal, en el juicio penal que por accidente de tránsito, atropello, sigue Francisco Leonardo García Bazurto contra Reyes Casimiro Carranza Tuárez, en calidad de chofer de la volqueta, marca volvo, color blanco, de placas MCS-501 y de la señora Enma Peggy Elizabeth Viteri Abeiga, en calidad de representante legal de la Compañía Inmobiliaria del Norte Mobinorte S.A., dueña del vehículo, los acusados deducen recurso de casación contra la sentencia pronunciada por la Primera Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí que confirma en todas sus partes el fallo dictado por el Juez Primero Provincial de Tránsito de Manabí que dicta sentencia condenatoria en contra de REYES CASIMIRO CARRANZA TUÁREZ de conformidad con lo dispuesto en el Art. 76 en concordancia con el Art. 79, literal b), de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre imponiéndole la pena de DIECIOCHO MESES DE PRISIÓN ORDINARIA, y declara además con lugar la acusación particular y ordena el pago de daños y perjuicios "pago que lo hará el causante del accidente, en este caso el conductor de la volqueta de placas MCS - 501, Carranza Tuárez Reyes Casimiro, en forma solidaria con el propietario del vehículo señalado que ocasionó el accidente, perteneciente a la Compañía Inmobiliaria "MOBINORT S. A...." y, determinando en cuatro mil sesenta y un dólares con cincuenta centavos (\$ 4.061,50), el valor total de daños y perjuicios ocasionados sin considerar el valor que por daño emergente y lucro cesante se debía establecer por estimar que no se ha justificado por parte del acusador en forma cuantitativa este reclamo.- Concedido el recurso, por el sorteo de Ley, ha correspondido el conocimiento a esta Sala, la misma que concluido el trámite y siendo el estado de la causa, el de resolver, para hacerlo considera: **PRIMERO.** Esta Segunda Sala Especializada de lo Penal es competente para conocer y resolver este recurso de casación, en virtud del Art. 184 de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No.449, vigente a partir del 20 de octubre del 2008; por lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 4 de la sentencia interpretativa 001-08-SI-CC de fecha 28 de noviembre de 2008, dictada por la Corte Constitucional de la República y publicada en el Registro Oficial No. 479 de 2 de diciembre de 2008; por Resolución Sustitutiva de 22 de diciembre del 2008; publicada en el Registro Oficial No. 511 de 21 de enero de 2009 a la aprobada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, el 17 de diciembre de 2008; por la Resolución dictada por el Tribunal Constitucional, publicada en el Registro Oficial S-331 , de 2 de diciembre de 1999; y, por el sorteo legal de 17 de febrero de 2009. **SEGUNDO:** Revisado el procedimiento de la presente acción, no se advierte vicio u omisión de solemnidad sustancial que pudiera acarrear su nulidad: por lo que este Tribunal de Casación declara la validez de esta querrela penal. **TERCERO:** De fojas 5 a 7 vuelta del cuaderno de la Sala, consta el escrito de fundamentación del recurso de casación presentado por Enma Peggy Elizabeth Viteri Abeiga y Reyes Casimiro Carranza Tuárez, el mismo que

asimila ser un alegato de instancia pues reseñan lo que a su discernimiento aconteció en el juicio destinado a orientar al Tribunal a tomar una decisión a su favor y no acuden a la esencia misma del recurso de casación que es la de ilustrar con suficientes fundamentos jurídicos la violación que según su criterio existe en la sentencia, indicando con claridad las normas que considera infringidas ya por contravenir expresamente a su texto, o por haber hecho una falsa aplicación de ellas o por haberlas interpretado erróneamente, más bien solicitan se realice una nueva valoración de la prueba al manifestar que "...los reparos que por la forma se esbozan pretenden lograr su revocatoria, mediante la correcta valoración del material probatorio y no se condene a los acusados de acuerdo a lo que determina el Art. 75, 76, 10 y 11 de la actual Constitución Política del Ecuador, se precautele el bien real y el bien personal que también la antigua Constitución Política lo establecía en sus Art. 23 y 24 ..."; sin que sea procedente mediante este recurso dicha petición. En una parte de su escrito sostienen "Estamos en presencia de un caso fortuito, que excluye la tipicidad de la conducta, pues la envestida por la parte frontal izquierda súbita y repentina es un evento imprevisible y, por esa razón inevitables las consecuencias que de él se deriven.", manifiestan además que, el accidente se produjo por fuerza mayor es decir se trata de un hecho o evento que por su naturaleza, aún cuando fuera previsible es inevitable y terminan solicitando que la Sala resuelva de esta forma la impugnación. **CUARTO:** La Fiscalía General del Estado, en su escrito de contestación a la fundamentación del recurso con el que se le corrió traslado manifiesta que, los recurrentes evidencian la pretensión de que se haga una nueva valoración de la prueba que fue analizada por la Sala Penal de la Corte Provincial de Manabí, la misma que en aplicación de las reglas de la sana crítica las valoró conforme constan en el juicio, por lo que confirma la sentencia del inferior, cumpliendo de esta manera con lo establecido en el Art. 304 A del Código de Procedimiento Penal; señalando que existen pruebas suficientes que evidencian que el procesado Reyes Casimiro Carranza Túarez, fue el responsable del accidente luego de lo cual se dio a la fuga, sin auxiliar a la víctima, circunstancias agravantes contenidas en el Art. 70 literales b) y c) de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre vigentes a esa época, que considera no fueron tomados en cuenta por el juzgador para imponer la pena, solicitando en esta parte la Fiscalía, "que se case la sentencia de oficio, tomando en cuenta los derechos constitucionales que amparan al sentenciado." **QUINTO:** La Casación es un recurso extraordinario especial, que procede únicamente cuando en sentencia se ha violado la Ley por cualquiera de las formas previstas en el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal que taxativamente establece: por contravenir expresamente a su texto; por haber hecho una falsa aplicación de ella; o , por haberla interpretado erróneamente. No puede por virtud de este recurso, la Sala de casación efectuar una nueva valoración de la prueba, esa es atribución exclusiva y excluyente del juzgador de instancia. **SEXTO:** Revisada la sentencia expedida por la Primera Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Portoviejo, con la finalidad de establecer si existe o no violación de la ley, la Sala observa que el Tribunal Aquo en el considerando cuarto de su resolución realiza un análisis de las pruebas presentadas por las partes procesales que se encuentran establecidas en el acta de audiencia de juzgamiento en las que destaca: **a)** el testimonio rendido en

la audiencia de juicio por el perito Policía Henry Cicerón Colina Pazos, quien ha practicado el reconocimiento mecánico y avalúo de los daños de los vehículos colisionados, indicando que el taxi de propiedad del acusador ha presentado daños en el tercio izquierdo y la volqueta marca Volvo que conducía el acusado ha sufrido daños en la parte delantera llegando a la conclusión que los daños han sido mayores en el automóvil Lada (taxi); asimismo, se ha ratificado en el acta de reconocimiento del lugar de los hechos en el que indica que ha observado las huellas que habían dejado los vehículos y que al señor García Bazaruto lo habían trasladado a una casa asistencial mientras que el conductor de la volqueta de propiedad de la Compañía Mobinort, no se encontraba en el lugar, presumiendo que se había dado a la fuga; añadiendo que los semáforos se encontraban funcionando normalmente y que ha acudido al lugar de los hechos en un lapso de diez a quince minutos después de ocurrido el accidente. **b)** la declaración del Dr. Vicente Párraga Bernal, Médico Legista del Ministerio Público, quien, en la audiencia de juicio se ha ratificado en su informe en el que ha señalado que en la intervención quirúrgica Leonardo Bazaruto ha recibido una sutura de diez centímetros para corregir fracturas tanto del maxilar inferior como del superior causadas a consecuencia del accidente; **c)** los testimonios de Jim Luis Guillermo Baird Andrade, Manuel Isidro Franco Pinargote y Benito Segundo Cevallos Zambrano, quienes han coincidido en señalar que la volqueta, por tratar de tomar la delantera ha invadido el carril izquierdo, Franco Pinargote ha manifestado además, que el taxi con dirección a Santa Ana ha pasado por el lugar cuando la luz del semáforo se ha encontrado en verde, concordando todos en señalar que el conductor del taxi después del accidente ha quedado como muerto; **d)** el testimonio rendido por Reyes Casimiro Carranza Túarez, en el que reconoce principalmente que se dio a la fuga luego del accidente porque se puso nervioso y estaba con su hija y su suegro; **e)** el testimonio de Eddy Luis Mieles Moreira, quien ha manifestado que el taxi si bien cruzó cuando se encontraba el semáforo en verde, se ha cerrado mucho a la curva y se ha pegado con el frente de la volqueta que se encontraba parada; **f)** los testimonios de Nelson José Tena Alcívar y Gilbert Alberto Caicedo Preciado, quienes únicamente dan referencias de que estuvieron en el sitio al momento del accidente, sin aportar con mayores datos.- Por otra parte también analiza los documentos legalmente introducidos en la audiencia de juicio por parte de la Fiscalía como la historia clínica referente al tratamiento recibido por Francisco Bazaruto en la Clínica San Antonio de la ciudad de Portoviejo y los informes topográficos realizados en su persona. **SÉPTIMO.-** De lo examinado se colige que la Primera Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, con absoluto apego a la realidad procesal realiza una correcta valoración de la pruebas aportadas en el juicio, conforme a las reglas de la sana crítica y motivó constitucionalmente al confirmar en todas sus partes, de la sentencia dictada por el Juez Primero Provincial de Tránsito de Manabí, y da una apropiada calificación jurídica penal del acto culposo realizado por REYES CASIMIRO CARRANZA TUAREZ, al adecuado tipo penal establecido en el 76 en concordancia con el Art. 79, literal b de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y su correspondiente sanción de dieciocho meses de prisión ordinaria, ya que por su imprudencia y negligencia en la conducción de su vehículo, sin respetar las señales de tránsito, fue causante

del accidente que produjo los daños materiales y principalmente las lesiones en la persona del acusador Francisco García Bazurto, que lo imposibilitó para el trabajo por más de 120 días conforme lo determina el acervo procesal.- En cuanto al pago de la indemnización de daños y perjuicios cuyo valor esta correctamente establecido por el Juez A quo, y que debe ser solidariamente pagado, tanto por el causante del accidente y conductor de la volqueta, Reyes Casimiro Carranza Tuárez, como por la propietaria de la misma, Enma Peggy Elizabeth Viteri Abeiga, legalmente justificada su calidad como tal en autos y en aplicación a lo dispuesto en los artículos 57 y 118 literal a) de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre vigente a la época, por lo que las alegaciones que los impugnantes realizan no son procedentes y quedan como meros enunciados, pues la sentencia se encuentra debidamente motivada, conforme lo establece el numeral 13 del Art. 27 de la anterior Constitución consagrado actualmente en el literal i) del número 7 del Art. 76 de la Carta Magna vigente y cumple además con lo estipulado en los Arts. 304 A y 309 del Código de Procedimiento Penal. Por las consideraciones que anteceden **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY**, la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, declara improcedente el recurso de casación interpuesto por ENMA PEGGY ELIZABETH VITERI ABEIGA Y REYES CASIMIRO CARRANZA TUAREZ y dispone remitir el proceso a la Primera Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, para los fines legales consiguientes. Actué el Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator Titular.- Notifíquese.

f.) Dr. Luis Abarca Galeas, Juez Nacional.

f.) Dr. Máximo Ortega Ordóñez, Juez Nacional.

f.) Dr. Luis Quiroz Erazo, Conjuez Nacional.

Certifico:

f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 24-6-2011.- las- Certifico.- f.) El Secretario Relator.

No. 036-2010

Juicio Penal No. 350-2009 seguido en contra de JHON JADMAN CORDOVA CASTILLO Y VICTOR HUGO JARRO GUASHIMA, como cómplices del delito tipificado y sancionado en el Art. 450 con las circunstancias uno y cuatro del Código Penal.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO PENAL

Quito, 20 de enero de 2010, las 17h50.

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en calidad de Jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia y Conjuez nacional en virtud del oficio No. 067-SG-2010-PCH. En lo principal, los recurrentes, el Representante del Ministerio Público y Vicente Baldemar León Betancourt y Gladis Esperanza González Sarmiento, interponen recurso de casación de la sentencia dictada por el Tribunal Penal de Zamora Chinchipe, que declara a Jhon Jadman Córdova Castillo, y Víctor Hugo Jarro Guashima cómplices del delito tipificado y sancionado en el Art. 450 del Código Penal con las circunstancias una y cuatro, imponiéndole la pena de seis años de reclusión mayor extraordinaria. Concluido el trámite y siendo el estado de la causa, el de resolver, para hacerlo se considera: **PRIMERO:** Esta Segunda Sala Especializada de lo Penal es competente para conocer y resolver este recurso de casación, en virtud del Art. 184 de la Constitución de la República del Ecuador, vigente a partir del 20 de octubre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 449; por lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 4 de la Sentencia Interpretativa: 001-08-SI-CC, de fecha 28 de noviembre de 2008, dictada por la Corte Constitucional de la República, publicada en el Registro Oficial No. 479, de 2 de diciembre de 2008; por el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal y por sorteo de 7 de enero de 2009. **SEGUNDO:** A fojas 4 a 5 vta. del cuadernillo de casación, el representante del Ministerio Público, realiza un análisis de las actuaciones probatorias practicadas en esta causa y a continuación fundamenta el recurso de casación expresando en lo principal: Que a los acusados Jhon Córdova Castillo y Víctor Hugo Jarro Guashima los ha declarado cómplices del mismo ilícito argumentando que su participación ha sido indirecta y secundaria en el acto punible y no haber sido los causantes de la muerte del joven, imponiéndoles la pena de doce años de reclusión mayor extraordinaria, de acuerdo al Art. 47 del Código Penal, misma que ha sido modificada a seis años de reclusión mayor extraordinaria, para cada acusado, considerando para ello la existencia de atenuantes, de conformidad con el inciso segundo del Art. 72 del Código Penal. Que los acusados Jhon Córdova Castillo y Víctor Hugo Jarro Guashima no son cómplices del referido asesinato sino autores, y segundo que aún en el evento no consentido de ser declarados cómplices no se justifica las atenuantes reconocidas por el Tribunal para efectos de rebaja de la pena impuesta, conforme consta en la sentencia impugnada que de doce años de reclusión mayor extraordinaria se ha modificado a seis años a favor de cada acusado por lo que no guarda conformidad con la Ley por no encontrarse justificadas conforme a derecho las atenuantes aludidas, así como el haberse omitido la aplicación de normas pertinentes, por lo que se ha existido una violación a la ley por haberse hecho una falsa aplicación del Art. 43 cuando se debió aplicar el Art. 451 del Código de Procedimiento Penal, el mismo que al normar sobre la presunción de responsabilidad establece que "cuando hayan concurrido a un robo u otro delito dos o más personas, todas serán responsables del asesinato que con éste motivo u ocasión se comete...", nótese que la disposición hace referencia al robo u otro delito, en la causa

motivo de análisis estamos frente a ese otro delito en el que resultó una persona asesinada; bajo esas circunstancias la norma general es que todos son responsables, excepto cuando se pruebe quien lo cometió, hecho que en el presente caso se encuentra comprobado, especialmente con los testimonios rendidos que coinciden en señalar que quien apuñaló al ciudadano Paolo León González fue el acusado Roberth Manuel Buitrón Moreno, hecho respecto del cual no cabe duda alguna; sin embargo no basta que se conozca quien cometió el delito, pues ésta misma norma ha determinado dos condicionantes para que opere la falta o ausencia de responsabilidad, así: 1) que los demás acusados no hubieren tenido parte en el ilícito, lo cual en el presente caso no se cumple, puesto que según lo manifestado por los testigos presenciales, todos ellos se han bajado de una camioneta y han comenzado a agredir sin mediar motivo alguno primero a Danny León González, hermano del occiso, luego al chofer del taxi por intentar pedir ayuda, se ha acercado al lugar Paolo León González para defender a su hermano, pero ha sido agredido por Roberth Manuel Buitrón y los demás acusados, quienes le han pateado en el piso hasta inmovilizarlo, para finalmente Roberth Buitrón asestarle seis puñaladas y cuando Leonardo Cabrera se ha acercado a cogerlo también ha recibido una puñalada por la espalda, quedando el agresor teniendo en su mano sólo el mango del cuchillo, para luego todos huir del lugar en la misma camioneta gritando que con la banda de manuco nadie se mete; es decir sí hubo participación de éstos acusados en el ilícito; y 2) que no hubieran podido remediarlo o impedirlo; constituye la segunda condicionante cuya razón de ser radica en la obligación que tiene toda persona de evitar la comisión de un delito a fin de no incurrir en comisión por omisión de conformidad con lo establecido por el Art. 12 del Código Penal; más en el presente caso se encuentra probado que los acusados Jhon Córdova Castillo y Víctor Hugo Jarro, pudieron haber impedido el ilícito de diferentes formas como quitando el cuchillo a Roberth Manuel Buitrón, separándolo del occiso cuando le ha lanzado al piso; sin embargo, no sólo que no impidieron el ilícito sino que además no hicieron nada para remediarlo, pues de acuerdo a sus propios testimonios rendidos ante el Tribunal, después de dejar a los dos heridos se fueron a seguir bebiendo como si nada hubiera pasado, siendo detenidos en circunstancias que se encontraban paseando en la camioneta por el mismo lugar de los hechos, por lo expuesto, la presunción de responsabilidad regulada en el Art. 451 del Código Penal alcanza a los acusados Jhon Córdova Castillo y Víctor Hugo Jarro dejando entrever claramente con las pruebas aportadas que su participación se encuadra dentro de la autoría y no de la complicidad. Que en lo que respecta a la sanción impuesta a los acusados: Jhon Jadman Córdova Castillo y Víctor Hugo Jarro Guashima, consta para cada uno el siguiente texto en la sentencia impugnada: "...hoy detenido por ésta causa cómplice del delito de asesinato antes indicado, y por haber justificado atenuantes y conforme lo indica el inciso segundo del Art. 72 del Código Penal, se le impone la pena de doce años de reclusión mayor extraordinaria y conforme al Art. 47 del mismo Código se le modifica a SEIS AÑOS de reclusión mayor extraordinaria." Entendiéndose que el Tribunal les ha impuesto la pena de doce años de reclusión mayor extraordinaria por considerarlos cómplices del delito de asesinato, guardando conformidad con el Art. 47 del Código Penal que determina para los cómplices la mitad de la pena que se les hubiere impuesto en caso de ser autores

del delito, puesto que al único declarado como autor, el acusado Roberth Manuel Buitrón se le ha impuesto la pena de veinte y cinco años de reclusión mayor especial, guardando cierta lógica con los doce años impuestos a los otros acusados considerados cómplices; pero pierde ésta lógica y armonía jurídica cuando invocando disposiciones contenidas en el inciso segundo del Art. 72 y Ar1. 47 del Código Penal rebaja la pena de doce años a seis años a favor de los acusados: Jhon Jadman Córdova Castillo y Víctor Hugo Jarro Guashima, provocando una errónea aplicación de dichas normas por las siguientes razones jurídicas: 1) Por mandato legal del mismo No. 47 del Código Penal el Tribunal al sancionar a dichos acusados con la pena de doce años ya aplicó la mitad de la pena, de tal forma que no puede volver a invocar el Art. 47 para aplicar una nueva rebaja de doce a seis años como consta en la sentencia impugnada; 2) el Art. 72 del mismo Código Penal exige que para efectos de modificación o reducción de las penas no sólo se justifiquen dos o más circunstancias atenuantes, sino que no existan agravantes constitutivas o modificatorias de la infracción; en la presente causa la infracción determinada es el asesinato de conformidad con lo tipificado y sancionado en el Art. 450 circunstancias 1 y 4 del Código Penal, esto es con alevosía y ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido (seis puñaladas), hecho en el que, conforme las pruebas aportadas, han concurrido circunstancias agravantes como el haber sido ejecutado en horas de la noche y en pandilla, (los testigos presenciales han coincidido en manifestar que los acusados al retirarse fueron gritando que con la banda del manuco nadie se mete), y obviamente se encuentra justificado con las páginas de diferentes periódicos agregados al proceso la gran consternación y alarma que ha ocasionado dicho crimen entre los habitantes de la ciudad de Zamora; circunstancias que el Tribunal no ha tomado en consideración al momento de aplicar el Art. 72 del Código Penal, de cuyo texto se colige que existiendo circunstancias agravantes como las indicadas no caben las rebajas concedidas a los acusados, aún más cuando las atenuantes supuestamente justificadas no responden a la realidad, pues se encuentra probado que antes de cometer el ilícito los acusados ya tuvieron problemas en el Cabaret Las Palmas donde uno de los acompañantes de Roberth Buitrón le ha entregado a éste el cuchillo con el que ha sido amenazado Taylor Quezada Carpio, para luego con el mismo cuchillo herir al hermano de éste, hecho que desdice respecto a la buena conducta anterior de los acusados; 3) Atendiendo a la misma disposición contenida en el Art. 72 encontramos que el inciso segundo invocado en la sentencia impugnada permite sustituir las penas que van de dieciséis años a veinte y cinco años por penas que van de doce a dieciséis años; habiendo el Tribunal aplicado erróneamente ésta disposición al modificar la pena impuesta a los acusados: Jhon Jadman Córdova Castillo y Víctor Hugo Jarro Guashima de doce años a seis años, sanción que no guarda ninguna relación con el inciso referido contraviendo expresamente al texto del inciso segundo del Art. 72 del Código Penal, ocasionando una desproporción entre el hecho acusado y la pena modificada, violentando con ello también el principio consagrado en el numeral 3 del Art. 24 de la Constitución Política del Estado que en su parte pertinente dice: "Las Leyes establecerán la debida proporcionalidad entre infracciones y sanciones...".

TERCERO: Los acusadores particulares fundamentan su recurso expresando lo siguiente: Las disposiciones legales

que se han violado en la sentencia que se impugna así como de las que se ha hecho una falsa aplicación y se las ha interpretado erróneamente son Art. 24 ordinal 13, Arts. 16, 17 y 18 de la Constitución Política de la República, Arts. 12, 33, 42, 43, 451, 596 y 601 del Código Penal y Arts. 1, 2, 79 y 85 del Código de Procedimiento Penal. **CUARTO:** El señor Representante del Ministerio Público, contestando al traslado con la fundamentación del recurso de casación, luego de realizar el respectivo análisis de la sentencia impugnada emite su criterio en los siguientes términos: *"(...)Respecto al recurso de casación interpuesto y fundamentado por los acusadores particulares Vicente Baldemar León Betancourt y Gladis Esperanza González Sarmiento, la Fiscalía General del Estado se ratifica en su integridad en los términos y contenido del pronunciamiento fiscal que, como quedó explicado en el dictamen que obra de fojas 4 y 5 del presente expediente, el Tribunal Penal debe revocar la Sentencia en la parte pertinente a la sanción penal, debiendo la Sala condenar a los acusados Jhon Jadman Córdova Castillo y Víctor Hugo Jarro Guashima en el grado de autores en la comisión del delito de asesinato tipificado y sancionado en el Art. 450 numerales 1 y 4 del Código Penal, en concordancia con los Arts. 451 y 42 del mismo Código, en virtud que el Tribunal aplicó erróneamente el Art. 72 del Código Penal al modificar la pena impuesta a los acusados, de doce a seis años, sanción que no guarda ninguna relación con el inciso segundo del referido Art. 72, según el cual, la reclusión mayor especial de dieciséis a veinte y cinco años se sustituirá con reclusión mayor extraordinaria de doce a dieciséis años, ocasionando una desproporción entre el hecho acusado y la pena modificada; además de que, conforme a las pruebas aportadas, existen circunstancias agravantes como el haber sido ejecutado el delito en horas de la noche y en pandilla, las mismas que no fueron tomadas en cuenta por el Tribunal a efectos de que se declare la no procedencia ni aceptación de atenuantes. (...)"* **QUINTO:** El Representante de la Fiscalía General del Estado imputa contra la sentencia el cargo de que viola la ley al declararlos cómplices del delito, cuando en realidad son autores. Al respecto, del análisis del contenido de la sentencia en relación a la fundamentación del recurso presentada por la Fiscalía General del Estado, se establece que la calificación jurídica penal del delito es la correcta, así como el grado de participación de los acusados que han sido sentenciados, por lo que no procede la alegación de que los acusados que han sido sentenciados como cómplices y son autores, ya que el Tribunal juzgador motiva correctamente el fallo condenatorio en este sentido. **SEXTO:** También alega el Representante de la Fiscalía General del Estado de que el Tribunal juzgador ha cometido error de derecho en la imposición de la pena porque concurren las agravantes de haberse ejecutado el delito durante la noche y en pandilla, por lo que se comete error de derecho al imponerle la pena de seis años de reclusión mayor extraordinaria. Al respecto, la Sala observa que por haber concurrido en primer lugar la circunstancia constitutiva de la alevosía, se configuró el asesinato por alevosía tipificado en el numeral 12 del Art. 450 del Código Penal; en tanto que por haber concurrido la circunstancia determinada en el numeral 4 de este mismo artículo en segundo lugar esta funciona como agravante. Observándose también que concurre la agravante de agresión en pandilla, pero no la agravante de haber buscado el propósito de la noche, ya que no se ha probado esta circunstancia, por lo

que, el Tribunal juzgador comete error de derecho en la imposición de la pena, atenuándola en presencia de agravantes violándose de esta forma el Art. 72 del Código Penal. **SEPTIMO:** Los acusadores particulares formulan contra la sentencia el cargo de que se viola la ley porque todos los sentenciados son autores, no obstante lo cual a uno solo se le condena como tal y a los demás como cómplices, es decir que en este aspecto coinciden con las alegaciones del señor Fiscal General del Estado por lo que este punto ya ha sido resuelto. Sin embargo es necesario relieves que en la motivación de la sentencia el Tribunal juzgador hace constar claramente que el acusado que provocó la muerte del ahora occiso fue Roberth Manuel Buitrón Moreno, utilizando un puñal, así como también apuñaló a la otra víctima expresando a este respecto en el considerando DECIMO TERCERO en que se contiene la motivación de la sentencia lo siguiente: *"1) Roberth Manuel Buitrón Moreno fue la persona que desde un inicio procedió a golpear a los hermanos León González para luego en un descuido de todas las presentes inferir seis puñaladas en la humanidad de Paola León González, provocándole una de estas la puñalada la muerte, y por supuesto herir con la misma arma a Leonardo Cabrera, persona que salvó su vida, por el hecho de haberse roto la cacha del cuchillo.- 2) La participación de Jhon Jadean Córdova Castillo y de Víctor Hugo Jarro Guashima en el acontecimiento que se juzga, fue intervenir en la riña, el primero de ellos peleándose con Daniel León González a puños; y el segundo su participación fue indirecta y secundariamente cooperando en la agresión de Daniel León González Segundo: la participación de los acusados Córdova y Jarro, fue indirecta y secundaria del acto punible, pues si bien se encontraron en el lugar de los hechos en una pelea, no fueron éstos quienes causaron la muerte de Paola León González.-* Por lo tanto, carece de fundamento la imputación de que existe error de derecho en la calificación jurídica penal de la participación delictual de los acusados que en la sentencia se los declara cómplices responsables del delito porque el Tribunal juzgador luego de valorar las pruebas constitucionalmente actuadas en la audiencia de juzgamiento por haber sido obtenidas y practicadas con observancia de la constitución y la ley, mediante la aplicación de las reglas de la sana crítica, arriba a la certeza de la existencia del delito objeto del juicio y de la responsabilidad penal de los acusados de uno como autor y de los demás como cómplices. Si algo se debe corregir es que el juzgador indebidamente califica de riña a los que participan como cómplices, ya que esta presupone la existencia de un desafío aceptado por ambos bandos y que la contienda se realiza en igualdad de condiciones o de fuerzas, lo cual no ocurre en el presente caso ya que, el acusado autor del delito se encontraba armado de un puñal y consecuentemente no se trata de una riña sino de una agresión, y además no se trató de una contienda sino que inmotivadamente las víctimas fueron atacadas. **OCTAVO:** Los acusadores particulares con el propósito de apoyar sus pretensiones realizan un análisis, desde su particular punto de vista e interés de las pruebas actuadas en la audiencia de juzgamiento, pretendiendo de esta forma una nueva valoración de la prueba de esta Sala de Casación, lo cual es inadmisibles, porque la casación no tiene por objeto una nueva valoración de la prueba sino solamente la de verificar que esta se haya obtenido, practicado y valorado constitucionalmente lo cual en el presente caso así ha ocurrido, porque el juzgador motiva la sentencia con

pruebas constitucionales y consecuentemente el fallo condenatorio expedido se encuentra debidamente motivado conforme lo exige la garantía establecida en el literal 1) del No. 7 del Art. 76 de la Constitución de la República y el Art. 304-A del Código de Procedimiento Penal. Por estas consideraciones, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY**, aceptando parcialmente el recurso de casación deducido por el señor Dr. Roy Poma Lalangui, Agente Fiscal del Distrito de Zamora Chinchipe, corrige los errores de derecho cometidos en la sentencia condenatoria expedida por Tribunal Penal de Zamora Chinchipe, el 11 de marzo de 2008, las 16h00, reformándola en el sentido de que la pena que se les impone a Jhon Jadman Córdova Castillo y Víctor Hugo Jarro Guashima declarados por el juzgador cómplices responsables es la de doce años de reclusión mayor extraordinaria, por haber concurrido las agravantes que se señala en el considerando **SEXTO** de esta resolución. Notifíquese.

f.) Dr. Luis Abarca Galeas, Juez Nacional, Presidente.

f.) Dr. Máximo Ortega Ordóñez, Juez Nacional.

f.) Dr. Luis Quiroz Erazo, Conjuez Nacional.

Certifico:

f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 24-6-2011.- las- Certifico.- f.) El Secretario Relator.

No. 041-2010

Juicio Penal No. 356-2009 seguido en contra de IVAN ZENEN BRAVO CARRIÓN, como autor del delito tipificado y sancionado en el Art. 547 y 549 numeral 2 del Código Penal.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO PENAL

Quito, 27 de Enero de 2010.- Las 17:20.

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en calidad de Jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia y Conjuez Nacional en virtud del oficio No. 067-SG-2010-PCH. En lo principal, el recurrente Iván Zenén Bravo Carrión interpone recurso de casación de la sentencia dictada por el Tribunal Segundo de lo Penal de El

Oro, que lo declara autor del delito tipificado y sancionado en el Art. 547 y 549 numeral 2 del Código Penal, imponiéndole la pena de un año de prisión correccional. Concluido el trámite y siendo el estado de la causa, el de resolver, para hacerlo se considera: **PRIMERO:** Esta Segunda Sala Especializada de lo Penal es competente para conocer y resolver este recurso de casación, en virtud del Art. 184 de la Constitución de la República del Ecuador, vigente a partir del 20 de octubre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 449; por lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 4 de la Sentencia Interpretativa: 001-08-SI-CC, de fecha 28 de noviembre de 2008, dictada por la Corte Constitucional de la República, publicada en el Registro Oficial No. 479, de 2 de diciembre de 2008; por el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal y por sorteo de 7 de enero de 2009. **SEGUNDO:** A fojas 3 a 5 vta. del cuadernillo de casación, el recurrente Iván Zenén Bravo Carrión, realiza un análisis desde su particular punto de vista de las actuaciones probatorias practicadas en esta causa y a continuación fundamenta el recurso de casación expresando en lo principal: Que en la especie no existe delito, toda vez que la ley exige que la cosa sustraída sea ajena y en el presente juicio nadie justificó; que no existe persona alguna como perjudicado por su acción, porque de ser así, estaba obligado a cumplir con las exigencias del Art. 106 del Código de Procedimiento Penal; tampoco se ha demostrado que él ingresó a la Notaría el día en que ocurrieron los hechos; y, en la etapa del juicio no se presentó el dinero que presuntamente recuperaron con lo cual se hubiese demostrado la prueba material de la infracción, consecuentemente el Tribunal Penal violó los Arts. 547 y 549 del Código Penal, los Arts. 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87 y 88 del Código de Procedimiento Penal, interpretando erróneamente el Art. 304-A ibidem. **TERCERO:** El señor Representante del Ministerio Público, contestando al traslado con la fundamentación del recurso de casación, luego de realizar el respectivo análisis de la sentencia impugnada emite su criterio en los siguientes términos: "(...) *El Segundo Tribunal de Manabí, en uso de la sana crítica tal como lo dispone el Art. 86 de la Código de Procedimiento Penal, llegó a sus conclusiones con respecto a la culpabilidad del acusado y las fundamentó razonablemente en extensa motivación del fallo (...)*". - **CUARTO:** El acusado recurrente formula contra la sentencia el cargo de que no se ha establecido la existencia material del delito. Al respecto, la Sala observa que en el considerando SEGUNDO de la sentencia el Tribunal juzgador hace constar que rindió su testimonio en la audiencia de juzgamiento el perito Ingeniero Edgar Wilfrido Yari Tenicela, sobre la experticia practicada en la evidencia consistente en los billetes con los que fue sorprendido el acusado, para cuyo efecto se ha presentado la respectiva acta de reconocimiento así como también el acta de entrega recepción de los billetes de la suma de ciento cuarenta y cinco mil setecientos treinta. Por lo tanto, cuando existe evidencia y esta ha sido sujeta a experticia estableciéndose la autenticidad de los billetes, así como también se ha formado legalmente la cadena de custodia, no puede alegarse que no existe el delito de hurto objeto del juicio. **QUINTO:** También alega el recurrente que no se ha probado que la cosa sustraída sea ajena, lo cual no merece consideración de la Sala porque para deducir tal alegación el acusado debía establecer que le pertenecían los billetes, ya que por las circunstancias en que fue sorprendido con los billetes se establece que fueron sustraídos, ya que se lo

encontró con la evidencia previo cacheo y revisión, significando que se trata de un delito flagrante. **SEXTO:** El acusado manifiesta que ninguna persona se ha presentado a reclamar el dinero, por lo que no existe perjudicado, ante lo cual la Sala establece que si bien es verdad el hurto es delito de sujeto pasivo determinado, cuando consiste en la sustracción de dinero confundido con otros valores de dinero, no se requiere establecer cuál es el dueño de los billetes que porta el autor de la sustracción, siendo suficiente que se determine que fueron sustraídos del lugar en donde se encontraba depositado conjuntamente con dinero de otras personas lo cual en el presente caso el Tribunal lo establece con certeza. **SÉPTIMO:** EL Tribunal juzgador no viola ninguna de las disposiciones legales que infundadamente cita el recurrente sino que por el contrario el fallo condenatorio se encuentra debidamente motivado, por ser coherente con la realidad de los hechos constitucionalmente probados en la audiencia de juzgamiento y consecuentemente, se cumple con la exigencia determinada en el literal 1) del Art. No. 7 del Art. 76 de la Constitución de la República y el Art. 304-A del Código de Procedimiento Penal. Por estas consideraciones, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY**, se declara improcedente el recurso de casación presentado por el recurrente Iván Zenén braco Carrión. Notifíquese.

f.) Dr. Luis Abarca Galeas, Juez Nacional, Presidente.

f.) Dr. Máximo Ortega Ordóñez, Juez Nacional.

f.) Dr. Luis Quiroz Erazo, Conjuez Nacional.

Certifico:

f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 24-6-2011.- las- Certifico.- f.) El Secretario Relator.

No. 042-2010

Juicio Penal No. 458-2008 seguido en contra de SEGUNDO EDUARDO BUESTÁN LLIGUÍN y MAURA LOURDES GUTAMA LEÓN, como autores y responsables del delito tipificado en el número 1 del Art. 580 del Código Penal.

**CORTE NACIONAL DE JUSTICIA
SEGUNDA SALA DE LO PENAL**

Quito, 28 de enero de 2010. Las 10h00.

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa los doctores: Luis Abarca Galeas, Máximo Ortega Ordóñez, y Luis Quiroz Erazo, en calidad de Jueces y Conjuez

Permanente, respectivamente, de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, en virtud de lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 4, del acápite IV de la Sentencia Interpretativa No. 001-08-SI-CC, emitida por la Corte Constitucional el 28 de noviembre del 2008, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 479, de 2 de diciembre del 2008, por resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia de fecha 17 de diciembre del año 2008.- Néstor Moisés Velecela Alvarracín, interpone recurso de casación de la sentencia dictada el 18 de septiembre del 2008, por los Miembros de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Cuenca (hoy Corte Provincial de Justicia), quienes revocan la sentencia subida en grado dictada por el Juez Segundo de lo Penal el Azuay, que aceptando la querrela, declara a Segundo Eduardo Buestán Lliguín y Maura Lourdes Gutama León, autores y responsables del delito tipificado en el número 1 del artículo 580 del Código Penal, y les impone la pena de un mes de prisión correccional, y además les condena al pago de costas, daños y perjuicios.- Concluido el trámite previsto para esta impugnación, y encontrándose la causa en estado de resolver para hacerlo se considera: **PRIMERO:** La Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso al amparo del artículo 184, numeral 1, y Disposición Transitoria Octava de la Constitución de la República del Ecuador, Resolución dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia el 22 de diciembre del 2008, publicada en el Registro Oficial número 511, de 21 de enero del 2009, en relación con el artículo 360 reformado del Código de Procedimiento Penal; y, el correspondiente sorteo de ley.- **SEGUNDO:** En la sustanciación del recurso, no se advierte vicio u omisión de solemnidad sustancial que pueda afectar la decisión de esta causa y del expediente se establece habérselo hecho con observancia de las garantías básicas del debido proceso, así como las prescripciones constantes en el Capítulo IV, del Título IV, del Libro IV del Código de Procedimiento Penal, por lo que se declara su validez.- **TERCERO:** Del contenido de la sentencia y libelo de querrela presentada por Néstor Moisés Velecela, la Sala conoce los siguientes antecedentes: "el día martes 12 de febrero del año dos mil ocho, a eso de las catorce horas aproximadamente, es decir a las dos de la tarde más o menos, llega hasta este cuerpo de terreno los ciudadanos Segundo Eduardo Buestán Lliguín i Maura Lourdes Gutama León para proceder, en abusiva forma, a cortar la hierba que manteníamos i riegan abono en el terreno para luego retirarse. Al día siguiente, miércoles 13 de marzo del dos mil ocho, a eso de las tres de la tarde, más o menos, nuevamente, estos mismos sujetos ingresan al terreno en referencia, con picos i diciendo que tienen derecho a la heredad comienzan a preparar el inmueble para la siembra procediendo nuevamente a retirarse pensando, de nuestra parte, que habría terminado el abuso con esas actitudes. Más, al día siguiente Jueves 14 de febrero del 2008, a las dos i media de la tarde, una vez más, llegan estos sujetos, con machete en mano i proceden a destruir el huerto que habíamos conservado i levantan una casucha en la que pernoctan esa noche. Al día siguiente viernes 15 de febrero del 2008, a las siete horas más o menos i frente a los abusos que se cometieron los días anteriores, mi cónyuge i Yo, pacíficamente, acudimos para reclamar pacíficamente por el respeto a nuestros derechos frente a lo que recibimos la agresión de parte de estos sujetos que nos golpearon = también a una cuñada que nos acompañó = incluso con machete en las piernas del exponente procediendo así a

consumar su delito i privarnos de la posesión que hemos venido teniendo en la heredad descrita en líneas anteriores para tomarla los agresores de la forma en que queda descrito" (sic).- **CUARTO:** El actor, al fundamentar su recurso de casación, concretamente señala: que es falso lo expresado en el inicio mismo de la redacción de la sentencia dictada por la Primera Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Cuenca, ya que jamás fue pronunciada en tales términos, desde que el delito que señalan los jueces, que es el del artículo 480 del Código Penal, se refieren a uno de "abandono de personas" y no al de usurpación; que la sentencia recurrida vulnera el contenido del numeral 1 del artículo 580 del Código Penal, al asumir que los actos previos llevados a cabo por los acusados en días anteriores al despojo, constituyen actos de "posesión"; señalan que la verdad es que los acusados a la fuerza, con violencia, consumaron el hecho el día y hora señalados en la formalización de la acusación; destaca que confunde la sentencia impugnada los actos previos, los actos preparatorios del delito con el hecho consumado, puesto que llegar cortar y roturar el terreno para luego retirarse no es despojar la posesión que tenían el exponente y su cónyuge; recalca que el despojo se da cuando impiden su presencia en el terreno y cuando destruyen por completo, todas las construcciones y sembríos que han conseguido con su trabajo; y, finalmente, sin puntualizar cual otra norma de derecho ha sido vulnerada por la sentencia recurrida, concluye expresando que no se le puede dejar en la más absoluta desprotección al absolver a quienes, prevalidos de la fuerza y la violencia les han quitado definitivamente su posesión.- **QUINTO:** Es obligación jurídica y procesal de este Tribunal asegurar la aplicación de los derechos y garantías determinados en la Constitución de la República, particularmente las garantías básicas del debido proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 169 (antes artículo 192, en relación con el numeral 27 del artículo 23) de la Ley Suprema, o si de alguna forma se han restringido el ejercicio de los mismos.- **SEXTO:** Al respecto la Sala realiza la siguiente puntualización: por ser el recurso de casación una impugnación de carácter especial y extraordinaria, el análisis que deben efectuar los juzgadores ha de centrarse únicamente en su objeto exclusivo, esto es, al examen de la sentencia impugnada, con la finalidad de determinar si en la misma se han cometido errores de derecho (*in iudicando*), y, de existir éstos, corregirlos; siendo sólo admisible analizar la valoración del acervo probatorio que no es conforme a las reglas contempladas en el Código Procesal Penal, como son las de la sana crítica contenidas en su artículo 86.- **SEPTIMO:** Del examen efectuado por la Sala para verificar si en la sentencia de mérito se ha violado la ley, tomando en cuenta lo sostenido por el recurrente en su fundamentación, se tiene: **1)** El recurso de casación, al tenor de lo previsto en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, es un medio de impugnación que procede cuando en la sentencia se hubiere vulnerado el derecho, por falsa aplicación, interpretación errónea, o por contravenir expresamente el texto de la Ley, mas no constituye un medio impugnativo para crear en este nivel una nueva instancia y pretender que en ella se revise todo el proceso, o que se revalorice el acervo de prueba que ya fue analizado por el Juez de Instancia o el Tribunal ad quem. En este sentido la Sala estima menester recordar que la casación, en efecto, no constituye nueva instancia en la cual se puedan revisar los recaudos procesales y las constancias

probatorias, en orden a establecer distintas conclusiones fácticas a las determinadas por el inferior; por el contrario, constituye un recurso extraordinario, previsto únicamente para la corrección de los errores de derecho en que pudieron haber incurrido los juzgadores de instancia, siendo ellos soberanos en la apreciación de la prueba conforme a las normas contempladas en el Código de Procedimiento Penal. Por lo tanto, persuadir a que se vuelva a valorar el acervo probatorio practicado en el respectivo período de prueba, como es la pretensión del proponente, conforme se infiere de la consideración que en este sentido, el solicitante sugiere a lo largo de su libelo de fundamentación, es impertinente y carece de fundamento legal y jurídico, so pena de que ello constituya una extralimitación en las facultades de la Sala, lo cual está fuera de la naturaleza de la casación y torna improcedente su recurso; **2)** Es de advertir en la resolución de mérito, que los miembros del Tribunal Inferior, en ejercicio de su potestad pública y en aplicación de lo estatuido en los artículos 85 y 86 del Código de Procedimiento Penal, han recogido la prueba en el primer considerando Quinto del fallo, y la han analizado y valorado en el segundo considerando Quinto (por constar en la sentencia dos apartados Quinto), tomando para el efecto aquellas que dentro de todo el conjunto probatorio, han considerado idóneas y suficientes para poder llegar a formar su convicción acerca de la existencia de la infracción penal de acción privada (usurpación), así como la responsabilidad del acusado, y, aún más, han puntualizado desde el punto de vista jurídico, todas aquellas particularidades y circunstancias que en este caso han rodeado a esta clase de infracción, así como aquellas concernientes a la propia valoración, lo cual guarda armonía con los hechos probados; **3)** Es menester consignar que, en efecto, ninguna de las pruebas antes enunciadas y referidas en la sentencia materia de la impugnación y aún en la resolución del Juez de instancia (Segundo de lo Penal del Azuay), en modo alguno acreditan las circunstancias contenidas en el numeral uno, del artículo 580 del Código Penal, como haber actuado "**por violencia, engaño o abuso de confianza**", las mismas que en el caso *sub lite*, constituyen elementos *sine quanon* para la configuración del delito de usurpación acusado, en la modalidad del numeral uno del artículo 580 anteriormente anotado, en los que el referido Juez, funda la sanción a los accionados; es decir, no se ha producido aquella prueba idónea y suficiente para llegar a formar la convicción acerca de la existencia de la infracción de acción privada descrita en el primer numeral del artículo 580, señalado por el juzgador en la parte resolutive de su fallo, ni de la responsabilidad penal del acusado, motivo por el cual la Sala concuerda con la conclusión expuesta por el Tribunal Inferior, en el sentido de no haberse comprobado conforme a derecho el delito al que se refiere la acusación; tanto más que, como se colige del mismo fallo, la solución de la presente controversia ha sido planteada en la esfera civil donde harán valer tanto la pretensión del hoy accionante, cuanto de la parte acusada; **4)** En virtud de lo dicho, es evidente que en la sentencia de mérito no se han vulnerado las garantías básicas del debido proceso, previstas en los artículos 76 y 169 (antes artículo 24, en relación con el artículo 23 y 192) de la Constitución de la República, y en ella se observa que se han enunciado normas jurídicas y explicado con detalle la pertinencia de su aplicación a los hechos en el caso concreto, por lo que se ha dado cumplimiento a lo prescrito por el artículo 24 número 13 de la Constitución Política de la República, respecto a la

motivación.- Por lo anteriormente expuesto, sin que sea necesario realizar otro análisis, esta **Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY**, declara improcedente el recurso de casación interpuesto por parte de Néstor Moisés Velecela Albarracín; disponiendo la inmediata devolución del proceso al Órgano Judicial Inferior para los fines de ley.- Cúmplase y Notifíquese.

f.) Dr. Luis Abarca Galeas, Juez Presidente.

f.) Dr. Máximo Ortega Ordóñez, Juez.

f.) Dr. Luis Quiroz Erazo, Conjuez.

Certifico:

f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 24-6-2011; las- Certifico.- f.) Ilegible.- El Secretario Relator.

No. 044-2010

Juicio Penal No. 556-2007 seguido en contra de MARIO ROBERTH BRICEÑO ROJAS, por el delito estipulado en los Arts. 341 y 339 del Código Penal.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO PENAL

Quito, 22 de enero de 2010. Las 10h00.

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa los doctores: Luis Abarca Galeas, Máximo Ortega Ordóñez y Luis Quiroz Erazo, en calidad de Jueces y Conjuez Permanente, respectivamente, de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, en virtud de lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 4, del acápite IV de la Sentencia Interpretativa No. 001-08-SI-CC, emitida por la Corte Constitucional el 28 de noviembre del 2008, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 479, de 2 de diciembre del 2008, por resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia de fecha 17 de diciembre del año 2008.- El doctor Carlos Medina Riofrío, Agente Fiscal del Distrito de Tungurahua-Baños, interpone recurso de casación de la sentencia dictada el 28 de septiembre del 2007, por los Miembros del Tribunal Primero de lo Penal de Tungurahua, quienes considerando que "no se ha

comprobado la existencia del delito por el que se ha llamado a juicio a Mauro Roberto Briceño Rojas, Arts. 341 y 339 del Código Penal", dictan a favor de MARIO ROBERTH BRICEÑO ROJAS, sentencia absolutoria, disponiendo su inmediata libertad y la cesación de todas las medidas cautelares dictadas en su contra en el auto de llamamiento a juicio, conforme al artículo 311 del Código de Procedimiento Penal.- Encontrándose la causa en estado de resolver para hacerlo se considera: **PRIMERO:** La Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso al amparo del artículo 184, numeral 1, y Disposición Transitoria Octava de la Constitución de la República del Ecuador, Artículo 4 de la Resolución de la Corte Nacional de Justicia de fecha 17 de diciembre del 2008; en relación con el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal; y, el correspondiente sorteo e Ley.- **SEGUNDO:** El recurso se ha tramitado con observancia de las garantías básicas del debido proceso y las prescripciones constantes en el Capítulo IV, del Título IV, del Libro IV del Código de Procedimiento Penal, aplicables al caso, por lo que se declara su validez.- **TERCERO:** Del texto de la sentencia, contenido de la denuncia y resolución de inicio de la Instrucción Fiscal, la Sala conoce los siguientes antecedentes: en relación a la denuncia presentada el sábado 24 de febrero del 2007, por Paulina Gabriela Reyes Espinoza, quien expresa "el día de ayer a las 13H34 recibí una llamada de Galo Gomes Funcionario del Banco del Pichincha Pelileo para solicitar la autorización de un retiro de \$ 1000 dólares de mi cuenta Ganadolar No 3186669500, solicitud que me sorprendió ya que yo me encontraba laborando en mi oficina ubicada en Cumbayá Av. Chimborazo y Pampite de la ciudad de Quito, en ese momento le dije al funcionario del banco que me espere un momento para confirmar si mi madre Paulina Espinosa que es copropietaria de la cuenta se encontraba haciendo algún retiro, por lo que pude confirmar que ella tampoco lo estaba haciendo; En ese momento le dije al funcionario del banco que no autorizaba el pago de los \$ 1000 dólares ya que era una transacción fraudulenta y trataban de estafarme. Esta llamada del Funcionario me inquieto, por lo que mi madre Paulina Espinosa se acercó a verificar a la agencia del Banco del Pichincha ubicado en Urdesa de la ciudad de Guayaquil, lugar de su residencia y verifiqué que de esta cuenta conjunta Ganadolar No 3186669500 se habían realizado retiros fraudulentos en diferentes ciudades del país que detallo a continuación: Sucursal Banco Pichincha Pelileo de fecha 22 de febrero del 2007 por le valor de \$ 4500 dólares. Sucursal Banco Pichincha Riobamba de fecha 23 de febrero del 2007 por le valor de \$ 4500 dólares. Sucursal Banco Pichincha Pelileo de fecha 23 de febrero del 2007 por le valor de \$ 1000 dólares. Es importante notificar que el día de ayer luego del último retiro fraudulento se presentó al Banco del Pichincha la debida solicitud de bloqueo de la cuenta Ganadolar, y la solicitud de investigación y devolución de los fondos retirados en forma fraudulenta; por lo que el banco empezó las investigaciones y pudo capturar el día de hoy a un sospechoso de nombres Mauro Roberth Briceño Rojas tratando de realizar otro retiro fraudulento de \$ 1000 dólares de mi cuenta ... que el detenido que trataba de realizar el retiro de dinero de mi cuenta tenía en su posesión una cédula falsificada con la que suplantaban mi identidad para realiza estos retiros antes mencionados y que la señora que realizó lo anteriores retiros responde a los nombres de Mery Esther Rueda Moreno con CI 1708776388 y además que tiene una

detención en 2003 en la ciudad de Ambato ..." (sic); **CUARTO:** El Fiscal General del Estado, al fundamentar el recurso de casación (fojas 3-5), de conformidad a lo dispuesto en el artículo 354 del Código de Procedimiento Penal, expresa: que en el escrito por el cual el Dr. Carlos Medina Riofrio, Agente Fiscal de Tungurahua interpone el recurso y que obra a fojas 46 y 47 del expediente del Primer Tribunal Penal de Tungurahua, sostiene que el Juzgador ha violado los artículos 40, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 123, 124, 291, y 304-A del Código de Procedimiento Penal; artículo 180 inciso tercero el Código de Procedimiento Civil; y, artículos 4, 33, 341 y 339 del Código Penal; por cuanto de la prueba actuada se establece la existencia de la infracción y la responsabilidad del acusado; que en la presente acción no es aplicable la prejudicialidad que establece el artículo 201 del Código de Procedimiento Civil; que se hizo una falsa aplicación de los artículos 341 y 339 del Código Penal; sostiene que las pruebas no fueron analizadas conforme a las reglas de la sana crítica; por otra parte en su fundamentación señala que en el delito de falsificación, la acción típica consiste en crear un documento o alterar materialmente al verdadero, modificando de esta manera su contenido por la agregación, supresión o modificación de palabras, o cifras, teniendo como objetivo final cambiar la información, certificación de datos que tal documento tiene por objeto acreditar. Los delitos contra la Fe Pública, dentro de los cuales se encuentra la falsificación de documentos y su uso doloso, trata de proteger la integridad y fidelidad de aquellos documentos que por su función pública, deben gozar de la confianza general respecto de su autenticidad o veracidad, razón por la cual, considero que los hechos y actos que motivaron el presente enjuiciamiento si se ajustan a la hipótesis jurídica del delito de uso doloso de documento público falso, desvirtuando de esta manera lo afirmado por la sentencia, en el sentido de que el delito no se cometió o fue una mera tentativa, ya que el acusado realizó los actos idóneos para su cometimiento, esto es contar con una papeleta de retiro de dinero, supuestamente autorizado por la cuentacorrentista, a la cual acompañaba una cédula de ciudadanía que había sido alterada tanto en la firma de su titular, como la fotografía que contenía ésta, para luego acercarse a la Institución Bancaria, obtener la autorización y tratar de realizar el retiro del dinero, siendo detenido con los documentos e instrumentos que le sirvieron para ejecutar el delito, adecuando su conducta a lo dispuesto en los artículos 339 y 341 del Código Penal; señala que el delito por el cual fue juzgado el acusado, es el de uso doloso de documento falso, tipificado y sancionado en el artículo 341 del Código Penal, en concordancia con el artículo 339 ibídem, por cuanto el acusado trató de apropiarse de dineros que pertenecían a otra persona, para lo cual se valió de documentos falsos, siendo éstos tanto la papeleta de retiro del Banco del Pichincha, el que tenía la firma falsificada de Paulina Gabriela Reyes Espinosa, como la cédula de ciudadanía de la mencionada cuentacorrentista, la misma que se encontraba con una fotografía cambiada y falsificada también su firma en el anverso, como se comprobó con la experticia técnica practicada; agrega que con el mandato contenido en el artículo 21, numeral 3, del Código de Procedimiento Penal, que señala: "Cuando una persona hubiera cometido infracciones conexas de la misma o distinta gravedad en un mismo lugar o en diversos lugares habrá un proceso penal por cada una de las infracciones, y serán competentes los jueces del lugar que prevengan en el conocimiento de la causa", se desvirtúa lo afirmado por el

Primer Tribunal de lo Penal de Tungurahua, en el sentido de que el delito de uso doloso de documento falso es un delito medio que sirve para. cometer otro, no siendo procedente su juzgamiento independientemente, por lo que se ha in observado la disposición del artículo 21 antes referido; concluye manifestando que en la sentencia recurrida, el Tribunal no valoró debidamente la prueba actuada, violando de esta manera lo dispuesto en los artículos 85 y 86 del Código de Procedimiento Penal, al apreciar los actos procesales con un criterio apartado de la ley, contrariando las reglas de la sana crítica; interpretó erróneamente el contenido de los artículos 341 y 339 del Código Penal, por cuanto los actos realizados por Mauro Roberth Briceño Rojas, se encasillan en la norma antes señalada, razón por la que el Juzgador debió imponerle la pena señalada en el citado artículo; e infringió el artículo 4 del Código Penal, puesto que realizó una interpretación extensiva de los artículos 40 del Código de Procedimiento Penal y 180 inciso tercero del Código de Procedimiento Civil, lo que condujo a su vez a que el Tribunal interprete en forma indebida y errónea el contenido del artículo 315 del Código de Procedimiento Penal, razón por la cual pide a la Sala case la sentencia dictada por el citado Tribunal.- **QUINTO:** Es obligación jurídica y procesal de la Sala asegurar la aplicación de los derechos y garantías determinados en la Constitución de la República, particularmente las garantías básicas del debido proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 169 (antes artículo 192, en relación con el numeral 27 del artículo 23) de la Ley Suprema, o si de alguna forma se han restringido el ejercicio de los mismos.- **SEXTO:** Al respecto, la Sala efectúa la siguiente puntualización: por ser el recurso de casación una impugnación de carácter especial y extraordinaria, el análisis que deben efectuar los juzgadores ha de centrarse únicamente en su objeto exclusivo, esto es, al examen de la sentencia, con la finalidad de determinar si en la misma se han cometido errores de derecho (*in iudicando*), y, de existir los mismos, corregirlos; siendo sólo admisible analizar la valoración del acervo probatorio que no es conforme a las reglas contempladas en el Código Procesal Penal, como son las de la sana crítica contenidas en su artículo 86.- **SÉPTIMO:** Del examen efectuado por la Sala para verificar si en la sentencia de mérito se ha violado la ley, tomando en cuenta lo sostenido por la parte recurrente (fiscal) en su fundamentación, se tiene: **1)** El Tribunal Primero de lo Penal de Tungurahua, al pronunciar su sentencia, con la finalidad de analizar la existencia material de la infracción y la responsabilidad penal del acusado, en el considerando Tercero, se refiere a las pruebas de cargo, como son: a) Testimonio de la ofendida Paulina Gabriela Reyes Espinoza que dice "que es Ingeniera Comercial, que trabaja en Quito, que es titular de la cuenta gana dólar del Banco del Pichincha N° 3186669500; que por funcionarios del Banco supo que de su cuenta han retirado en la ciudad de Riobamba cuatro mil quinientos dólares y mil dólares, los días 22 y 23 de febrero del presente año 2007, un total de diez mil dólares y que el sábado 24 del mismo mes se ha tratado de retirar otros mil dólares siendo detenida la persona que trató de hacerla. Que el dinero retirado supuestamente lo hizo ella pero no lo ha hecho ni autorizado se lo haga, habiéndosele estafado en la suma de diez mil dólares, que no se le ha devuelto de parte del Banco ni por persona alguna.- A repreguntas dice que no son sus firmas las de la papeleta de retiro; al presentársele la cédula adulterada dice que es su cédula

alterada datos, como la de su edad y con otra foto que no es la suya; dice que la que ha estado utilizando su cédula alterada ha sido Mery Esther Rueda y la que ha utilizado el acusado Mauro Roberth Briceño Rojas, para pretender apoderarse mil dólares más; que a él le han detenido portando dicha cédula".- b) Testimonio del Policía Libio Danilo Llerena Arroba, que dice "que el sábado 24 de febrero del presente año, a las 11H05 en que se encontraba de patrullaje en la ciudad de Pelileo en el "Yankee -3" se ha presentado el señor Galo Oswaldo Gómez Campaña, gerente del Banco del Pichincha Sucursal Pelileo, el que le dijo que en el Banco se encontraba un ciudadano en la fila para retirar fondos de la cuenta 3186669500 perteneciente a la señora Paulina Gabriela Reyes Espinoza, de la que ya habían hecho otros retiros, sin que su titular lo haya hecho o autorizado hacerla, por lo que ha acudido a dicha Institución y ha aprehendido a Mauro Roberth Briceño Rojas que se encontraba en la fila detrás de unas cinco o seis personas, esperando turno para realizar el retiro de mil dólares. Dice que dijo que la titular de la cuenta se encontraba en la ciudad de Ambato, la que le ha ofrecido pagarle por el retiro del dinero, que aprehendido ha sido trasladado a la P. J. de la ciudad de Baños".- c) Testimonio del Cabo Juan Carlos Cruz, "que dice que realizó junto con el cabo Juan Carlos Sánchez el examen documentológico de la cédula dubitada de ciudadanía N° 171536586-0 a nombre de Paulina Gabriela Reyes Espinosa con fecha de expedición 9 de septiembre del 2004; que luego de los exámenes correspondientes han concluido que es un documento auténtico en cuanto presenta las medidas de seguridad de las nuevas cédulas que circulan desde abril del 2000; y que en cuanto a la firma constante en el anverso, no guarda similitud gráfica y morfológica con las firmas indubitadas de la ciudadana Paulina Gabriela Reyes Espinoza en su cédula N° 171536586-0 ... Dice que también realizó la comparación de las huellas dactilares de la cédula dubitada con número de especie 0166146 y de la indubitada con número de especie 0213824, concluyendo luego de su estudio técnico que las dos huellas dactilares no se corresponden y que pertenecen a distintas personas. Dice que presentó su informe el que puesto a su vista reconoce como suyas firma y rúbrica constante en su pie, habiéndose adjuntado dice fotos de las dos cédulas y láminas demostrativas del estudio de las dos huellas, que son exhibidas también al Tribunal y que a simple vista se ve son distintas, como distintas son las fotos de las dos cédulas" (sic).- d) Testimonio de Silvia Susana Llerena Viteri, cajera del Banco Pichincha Sucursal Pelileo, que dice "que una señora embarazada los días jueves y viernes 22 y 23 de febrero del presente año les sorprendió y haciéndose pasar por la cuentacorrentista Paulina Gabriela Reyes Espinosa ha logrado se le entregue las sumas de cuatro mil quinientos dólares y mil dólares, respectivamente, tratando de retirar mil dólares más el día sábado 24 de febrero, por intermedio del acusado Mauro Briceño Rojas, mas como estaban sobre aviso con la policía le hicieron detener, encontrándose en su poder la cédula que aparecía como de la cliente Paulina Gabriela Reyes Espinoza pero que había sido falsa, pues difiere en datos como la edad y la foto que es de otra persona.- A preguntas dice que el acusado quiso estafarlos pues estaba en la fila para hacer el cobro, **luego de conseguir la autorización;** que el jueves y viernes retiró los valores la señora; que no estaba el acusado; que el acusado estaba en la fila para hacer el cobro; que no cobró; que ella estaba en la ventanilla; **que pasados los quinientos**

dólares se necesita autorización.- El señor Fiscal solicita se incorpore como su prueba las copias certificadas de fs. 63, 67 y 68" (sic - lo resaltado con negrilla nos pertenece); 2) La prueba por parte del acusado la ha recogido el Tribunal Inferior en el considerando Cuarto, constituida básicamente por los testimonios de: "las hermanas Zulay Eureka y Grace Aracelly Ninacuri Cunalata, que dicen que son compañeras de trabajo del acusado en el Centro de Rehabilitación Oasis, y que trabajó normalmente jueves y viernes 22 y 23 de febrero del presente año y que el sábado viajaron con él a Pelileo a hacer compras, luego de lo cual fueron al mercado a comer y Mauro Briceño les dijo que tenía que entrar al Banco del Pichincha a hacer alguna gestión, por lo que ellas le esperaron en unas jardineras que hay en la entrada, cuando luego de unos momentos entraron policías y se hizo una bulla y vieron que le detuvieron.- Héctor Abraham Zambrano, que señalan que el acusado es compañero de trabajo en el Centro de Rehabilitación Oasis de esta ciudad de Ambato, en donde dicen laboró normalmente los días jueves y viernes 22 y 23 de febrero del presente año ...; y los testigos Hugo Rodrigo Torres, James Napoleón Manzano Naranjo, Vinicio Ojeda Frutos y Wilver Ángel Jácome Lapo, que abonan la honradez y buena fama del acusado Mauro Roberth Briceño Rojas.- Presenta la siguiente prueba documental: Certificaciones de los Tribunales y Juzgados Penales de este Distrito y del Distrito de Imbabura de donde dice es oriundo, de no registrar antecedentes penales, de la Dirección Nacional de la Policía en igual sentido; del Centro de Rehabilitación Social de Ambato de registrar allí "conducta excelente"; auto de nulidad por la instrucción fiscal seguida en contra de Mauro Roberth Briceño Rojas y Mery Esther Rueda Moreno, por estafa, respecto a los retiros de dinero del Banco del Pichincha Sucursal Pelileo; auto de sobreseimiento definitivo a favor de Mauro Roberth Briceño Rojas y Mery Esther Rueda Moreno, en la instrucción fiscal que se les ha iniciado por asociación ilícita por los motivos del juicio del anterior auto declarado nulo, y del actual por uso de instrumento público; registros de asistencia del Centro de Rehabilitación "OASIS", que abarca hasta los días 22 y 23 de febrero del presente año; contrato de trabajo del acusado con el administrador de dicho Centro; certificados de honradez y buena fama concedido por el Director Administrativo del citado Centro, Wilver Jácome y que declaró también en el juicio, todo de fs. 22 a la 41 del cuaderno del juicio" (sic); 3) Es menester consignar que pese a que los Miembros del Tribunal Inferior, en el considerando Quinto han tratado y examinado la prueba introducida durante el juicio, entre otras cosas, concluyen: "Que la prueba señalada en los considerandos que anteceden tienen valor procesal ...; mismas que apreciadas conforme las reglas de la sana crítica ... dan al Tribunal la certeza de que en la especie no se ha comprobado la existencia del delito por el que se ha llamado a juicio a Mauro Roberto Briceño Rojas, Arts. 341 y 339 del Código Penal... Ha pretendido se dice cobrar la suma de mil dólares en el Banco del Pichincha Sucursal de la ciudad de Pelileo, el sábado 24 de febrero del presente año, siendo aprehendido cuando se encontraba en la fila esperando turno para efectuar el cobro.- Es decir que no se ha consumado el hecho dañoso acusado ... Portaba la cédula que ciertamente resultó falsa... pero no le dejaron hacer uso de la misma..." (sic), la Sala considera que no es conforme a Derecho la valoración que en el caso sub lite, el juzgador ha hecho de la misma, puesto que contrariamente la prueba

mencionada en el apartado Tercero del fallo de mérito, de conformidad con lo previsto en los artículos 85, 86, 87 y 88 del Código de Procedimiento Penal, es idónea y suficiente para formar la convicción del Tribunal, acerca de la existencia de la infracción penal de acción pública (utilización dolosa de documento falso, en el grado de tentativa), así como de la responsabilidad en contra del acusado Mauro Roberth Briceño Rojas, quien efectuó un viaje desde la ciudad de Ambato hasta la Sucursal del Banco del Pichincha de la ciudad de Pelileo, con el propósito antes anotado, esto es, conociendo de la ilicitud del acto que se encontraba realizando, encontrándosele en su poder la papeleta de retiro y la cédula alteradas; y, particularmente, se advierte que no es conforme a derecho la valoración que se ha dado a la prueba testimonial introducida en el proceso, por haberse apartado de los requisitos previstos en los artículos 115 y 207 del Código de Procedimiento Civil (Supletorio en materia penal), en relación con el artículo 124 del Código de Procedimiento Penal, vulnerando en este sentido lo dispuesto por los artículos 85 y 86 del Código de Procesal Penal; **4)** Sobre la base todo lo dicho es evidente que la sentencia examinada inevitablemente también incurre en error en la **motivación**, toda vez que no se han enunciado correctamente normas y principios jurídicos y ni se ha explicado con todo detalle la pertinencia de su aplicación a los hechos comprobados, por lo que se ha incumplido con lo establecido en el artículo 24 número 13 de la Constitución Política de la República aplicable al caso. Todo lo cual constituye una violación de derecho, que es indispensable tenerla en cuenta por constituir violación de los derechos y garantías determinados en la Constitución de la República, en particular los del debido proceso, establecidos en sus artículos 192, en relación con el numeral 27 del artículo 23 (hoy artículos 24, 76 y 169); sin que la Sala comparta la conclusión expuesta en los numerales 1) y 2) de la última parte del fallo, respecto a la existencia de prejudicialidad, y además que el ilícito se trata de estafa.- Por lo anteriormente expuesto, sin que sea necesario realizar otro análisis, esta **Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY**, aceptando el recurso de casación interpuesto por el doctor Carlos Medina Riofrío, Agente Fiscal del Distrito de Tungurahua-Baños, y la fundamentación formulada por el Fiscal General del Estado, casa la sentencia, y en su lugar dicta sentencia condenatoria en contra de MAURO ROBERTH BRICEÑO ROJAS, por ser responsable del delito tipificado en el artículo 341, en relación con el 339 del Código Penal, en el grado de tentativa; por lo que en concordancia con lo dispuesto en los artículos 16, 42 y 46 del Código Penal, en relación con el artículo 29, numerales seis y siete y en aplicación del artículo 72 ibídem, se le impone la pena reducida de UN AÑO de prisión correccional.- Devuélvase de inmediato el proceso al Órgano Judicial Inferior para los fines de ley.- Cúmplase y Notifíquese.

f.) Dr. Luis Abarca Galeas, Juez Presidente.

f.) Dr. Máximo Ortega Ordóñez, Juez.

f.) Dr. Luis Quiroz Erazo, Conjuez.

Certifico:

f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 24-6-2011; las- Certifico.- f.) El Secretario Relator.

No. 045-2010

Juicio Penal No. 726-2009 seguido por VICTOR HUGO MOLINA ENCALADA en contra de CÉSAR CRUZ.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO PENAL

Quito, 26 de enero de 2010. Las 10h00.

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa los doctores: Luis Abarca Galeas, Máximo Ortega Ordóñez y Luis Quiroz Erazo, en calidad de Jueces y Conjuez Permanente, respectivamente, de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, en virtud de lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 4, del acápite IV de la Sentencia Interpretativa No. 001-08-SI-CC, emitida por la Corte Constitucional el 28 de noviembre del 2008, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 479, de 2 de diciembre del 2008, por resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia de fecha 17 de diciembre del año 2008. Víctor Hugo Molina Encalada, interpone recurso de casación de la sentencia dictada el 26 de febrero del 2009, por los Miembros de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Cañar, quienes desechando el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, confirma la sentencia dictada por el Juez Primero de lo Penal de Azogues, que declara sin lugar la acción propuesta por el doctor Víctor Hugo Molina Encalada en contra de César Cruz.- Encontrándose la causa en estado de resolver para hacerlo se considera: **PRIMERO:** La Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso al amparo del artículo 184, numeral 1, y Disposición Transitoria Octava de la Constitución de la República del Ecuador, Artículo 4 de la Resolución de la Corte Nacional de Justicia de fecha 17 de diciembre del 2008; y Resolución No. 006-2003-01 expedida por el Tribunal Constitucional, publicada en el Registro Oficial número 194 de 21 de octubre del 2003.- **SEGUNDO:** El recurso se ha tramitado con observancia de las garantías básicas del debido proceso y las prescripciones constantes en el Capítulo IV, del Título IV, del Libro IV del Código de Procedimiento Penal, aplicables al caso, por lo que se declara su validez.- **TERCERO:** Del texto de la sentencia y querrela presentada por Víctor Hugo Molina Encalada, la Sala conoce los siguientes antecedentes: "el día lunes 3 de marzo de 2008, en el Noticiario que se emite en el canal de

televisión de esta ciudad de Azogues, Austral T.V. a las 20h30, obviamente por su difusión el señor CESAR CRUZ, a la par de los descomedidos términos que empleó dicho ciudadano, palabras altisonantes y que desdichan de la calidad de una persona, no se canso de proferir epítetos y expresiones de injurias que van en contra de la honra y el buen nombre de Víctor Hugo Molina Encalada como persona de sus derechos y del Alcalde de la ciudad, así como de la Municipalidad en general y particularmente acusándome de **mentiroso, arbitrario, engañador, pendejo, cucaracha extraña, a proferir amenazas, con desafíos y acusándome de no realizar mis funciones sino mi absoluta dedicación al Deportivo Azogues**, con frases como las que constan en la reproducción video magnética que nos fue conferida por los personeros del Canal ante nuestra petición en la Fiscalía de nuestra ciudad, documento o equipo que me permito aparejar a la presente y que pido se considere insertada de manera textual el contenido de las palabras y términos calumniosos en mi contra ... "-

CUARTO: El actor, al fundamentar su recurso de casación concretamente señala: que las normas de derecho que se estiman infringidas **"o las solemnidades del procedimiento que se hayan omitido"**, son: Los artículos 23 numeral 8 y artículo 97 numeral 5, de la Constitución Política de la República del Ecuador de 1998, vigente a la fecha de haberse cometido las injurias; artículo 11, numeral 4; artículo 424 de la Constitución Política de la República del Ecuador vigente; artículos 232, 489, 490 numerales 2 y 3 y artículo 430 segundo inciso, del Código Penal; y, artículos 79, 86 y 98 del Código de Procedimiento Penal; reitera que la Sala Provincial Inferior no ha aplicado los preceptos de la Carta Magna, en la toma de su resolución, como el artículo 23, numeral 8 de la Constitución que trata el derecho a la honra a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar, e igualmente el artículo 97, numeral 5, que se refiere al deber de respetar la honra ajena, y artículo 11, numeral 4, respecto a que ninguna norma podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales; señala las violaciones a las normas del Código Penal, como la del artículo 232 que trata de las ofensas a autoridades en el cumplimiento de sus funciones, así como las de los artículos 489, 490 e inciso segundo del 493 ibídem, que las transcribe textualmente; en igual sentido expresa respecto a las pruebas, señalando que los jueces, "no consideran ni valoran en forma alguna la presentada en este proceso, tales como el video presentado con la oportunidad debida, peor aún el informe pericial, que no ha sido observado ni tomado en cuenta para emitir la resolución", que no se ha analizado toda la prueba que ha presentado en esta causa; destaca el contenido del artículo 79, el 86 y 98 del Código de Procedimiento Penal, que los transcribe textualmente en su defensa; y, concluye su fundamentación solicitando a la Sala revoque la sentencia subida en grado y se imponga la sanción al querellado César Cruz.- **QUINTO:** Es obligación jurídica y procesal de este Tribunal asegurar la aplicación de los derechos y garantías determinados en la Constitución de la República, particularmente las garantías básicas del debido proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 76 y 169 (antes artículo 192, en relación con el numeral 27 del artículo 23) de la Ley Suprema, o si de alguna forma se han restringido el ejercicio de los mismos.- **SEXTO:** Al respecto la Sala realiza la siguiente puntualización: por ser el recurso de casación una impugnación de carácter especial y extraordinaria, el análisis que deben efectuar los

juzgadores ha de centrarse únicamente en su objeto exclusivo, esto es, al examen de la sentencia impugnada, con la finalidad de determinar si en la misma se han cometido errores de derecho (*in iudicando*), y, de existir éstos, corregirlos; siendo sólo admisible analizar la valoración del acervo probatorio que no es conforme a las reglas contempladas en el Código Procesal Penal, como son las de la sana crítica contenidas en su artículo 86.- **SÉPTIMO:** Del examen efectuado por la Sala para verificar si en la sentencia de mérito se ha violado la ley, tomando en cuenta lo sostenido por el recurrente en su fundamentación, se tiene: **1)** El recurso de casación, al tenor de lo previsto en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, es un medio de impugnación que procede cuando en la sentencia se hubiere vulnerado el derecho, por falsa aplicación, interpretación errónea, o por contravenir expresamente el texto de la Ley, mas no constituye un medio impugnativo para crear en este nivel una nueva instancia y pretender que en ella se revise todo el proceso, o que se revalorice el acervo de prueba que ya fue analizado por el Juez de Instancia o el Tribunal *ad quem*, o que se examine aquella no considerada jurídicamente por el *a quo*, o lo que es peor se examinen violaciones de procedimiento. En este sentido la Sala estima menester recordar que la casación, en efecto, no constituye nueva instancia en la cual se puedan revisar los recaudos procesales y las constancias probatorias, en orden a establecer distintas conclusiones fácticas a las determinadas por el inferior; por el contrario, constituye un recurso extraordinario, previsto únicamente para la corrección de los errores de derecho en que pudieron haber incurrido los juzgadores de instancia, siendo ellos soberanos en la apreciación de la prueba conforme a las normas contempladas en el Código de Procedimiento Penal. Por lo tanto, persuadir a que se vuelva a valorar el acervo probatorio practicado en el respectivo período de prueba, como es la pretensión del proponente, conforme así se infiere de la consideración que en este sentido, el solicitante sugiere a lo largo de su libelo de fundamentación, es impertinente y carece de fundamento legal y jurídico, so pena de que ello constituya una extralimitación en las facultades de la Sala, lo cual está fuera de la naturaleza de la casación y torna improcedente su recurso; **2)** Es de advertir que los miembros del Tribunal de Apelación, aún cuando en ejercicio de su potestad pública y en aplicación de lo estatuido en los artículos 85 y 86 del Código de Procedimiento Penal, se han referido a la prueba en el considerando Cuarto del fallo, valorándola en el apartado Quinto, considerando sólo aquella que es idónea para formar su convicción acerca de la existencia de la infracción penal de acción privada (injurias), así como la responsabilidad del acusado, se observa falta de análisis de la misma en relación al conjunto probatorio como lo exige el artículo 146 del Código de Procedimiento Penal, que en la especie es ciertamente escasa, a efecto de dar cumplimiento con el objeto y finalidad previstas en los artículos 84 y 85 del Código de Procedimiento Penal; sin embargo, consta en el apartado Tercero, la consideración jurídica e incluso doctrinal respecto a la introducción de la prueba al proceso y su valoración, lo cual guarda armonía con los hechos probados; **3)** Del examen de la resolución de mérito, en relación a la intervención del hoy querellado en el caso que es materia de la acusación, la Sala encuentra innegable vinculación de su proceder con el deber constitucional que se impone a todos los ciudadanos para

denunciar y combatir irregularidades o actos de corrupción, considerando el contenido del documento (video-grabación) materia de la controversia, que se refiere a varias irregularidades ocurridas, presuntamente imputables al hoy accionante, en la gestión de la Alcaldía de la ciudad de Azogues, aspecto que debe ser considerado por el Tribunal *ad quem*; siendo por demás claro que tratándose de un derecho el reconocimiento de la referida garantía, es un **deber constitucional** que le asiste al acusado, acorde con lo previsto en el artículo 97, numeral 14 de la Constitución Política de la República (anterior), disposición fundamental que este Tribunal, considera debe ser tomada en cuenta en el presente proceso; tanto más que, lo anotado anteriormente, es un criterio reiteradamente sostenido en varios fallos dictados por esta Sala de lo Penal de este Alto Tribunal, en el sentido de que "toda persona que presuma o conozca del cometimiento de actos de corrupción se encuentra obligado a denunciarlos, sin que por lo mismo una denuncia de actos de corrupción constituya delito de injuria" (Gaceta Judicial Serie XVII, No. 8, enero-abril 2002, p. 2420 y Resolución No. 101-2008); **4)** Por otra parte, es menester consignar que en relación a la grabación (video cassette) del Noticiero emitido el día de los hechos, lunes 3 de marzo de 2008, a las 20h30, en el canal de televisión de la ciudad de Azogues, Austral T. V., en efecto, por constituir un requisito de procedibilidad, al plantear su acción, el actor incumplió con el previo procedimiento de exhibición y transcripción, con la intervención del fiscal y autorización judicial, previsto en las normas contenidas en los artículos 384, 385, 386, 387 y 388, en relación con los artículos 155 y 156 del Código de Procedimiento Penal; **5)** En virtud de lo dicho, es evidente que en la sentencia de mérito no se han vulnerado las garantías básicas del debido proceso, previstas en los artículos 76 y 169 (antes artículo 24, en relación con el artículo 23 y 192) de la Constitución de la República, y en ella se observa que se han enunciado normas jurídicas y explicado con detalle la pertinencia de su aplicación a los hechos en el caso concreto, por lo que se ha dado cumplimiento a lo prescrito por el artículo 24 número 13 de la Constitución Política de la República, respecto a la motivación.- Por lo anteriormente expuesto, sin que sea necesario realizar otro análisis, esta **Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY**, declara improcedente el recurso de casación interpuesto por Víctor Hugo Molina Encalada; disponiendo la inmediata devolución del proceso al Órgano Judicial Inferior para los fines de ley.- Cúmplase y Notifíquese.

f.) Dr. Luis Abarca Galeas, Juez Presidente.

f.) Dr. Máximo Ortega Ordóñez, Juez.

f.) Dr. Luis Quiroz Erazo, Conjuez.

Certifico:

f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 24-6-2011.- las- Certifico.- f.) Ilegible.- El Secretario Relator.

No. 048-2010

Juicio Penal No 785-2009 seguido en contra de VICTOR MANUEL RODRIGUEZ SEMPER, como autor del delito tipificado y sancionado en el Art. 563 del Código Penal.

JUEZ PONENTE: Dr. Luis Abarca Galeas

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO PENAL

Quito, 29 de enero del 2010.- Las 10H30.

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en calidad de Jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia y Conjuez Nacional en virtud del oficio No. 067-SG-2010-PCH. Agreguése al proceso el escrito presentado por Víctor Manuel Rodríguez Semper, tómese en cuenta la autorización que le confiere al Dr. Alonso Puente Viteri, así como el casillero judicial para futuras notificaciones. En lo principal, el recurrente Víctor Manuel Rodríguez Semper, interpone recurso de casación de la sentencia dictada por el Tercer Tribunal de lo Penal de Pichincha, que lo declara autor del delito tipificado y sancionado en el Art. 563 del Código Penal, imponiéndole la pena de tres años de prisión y multa de ocho dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Concluido el trámite y, siendo el estado de la causa, el de resolver, para hacerlo sé considera. **PRIMERO:** Esta Segunda Sala Especializada de lo Penal es competente para conocer y resolver este recurso de casación, en virtud del Art. 184 de la Constitución de la República del Ecuador, vigente a partir del 20 de octubre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 449; por lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 4 de la Sentencia Interpretativa: 001-08-SI-CC, de fecha 28 de noviembre de 2008, dictada por la Corte Constitucional de la República, publicada en el Registro Oficial No. 479, de 2 de diciembre de 2008; por el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal y por el sorteo de 27 de abril del 2009. **SEGUNDO:** A fojas 7 a 8 del cuadernillo de casación, el recurrente Víctor Rodríguez Semper, realiza un análisis desde su particular punto de vista de las actuaciones probatorias practicadas en esta causa y a continuación fundamenta el recurso de casación expresado en lo principal: que se han violado los Arts. 24 numeral 13 de la Constitución Política 31 de la Ley de Modernización del Estado y 20 de su Reglamento Arts. 4, 11, 29, 32, 41, 42, y 75 del Código Penal Arts. 14, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 119, 250, 304-A y 309 del Código de Procedimiento Penal Arts. 274 y 275 del Código de Procedimiento Civil, ya que la resolución es carente de motivación y ha aplicado la ley en manera extensiva **TERCERO.** El señor Representante del Ministerio Público, contestando al traslado con la fundamentación del recurso de casación, luego de realizar el respectivo análisis de la sentencia impugnada emite su criterio en los siguientes términos: (...) *El primer cargo invocado por el recurrente en su escrito de fundamentación, es aquel que tiene que ver con que la sentencia no habría sido producto de una correcta motivación, apreciándose en ese sentido que la resolución es consistente en cuanto, luego de apreciar los medios de información impuestos a consideración del tribunal, eleva a calidad de prueba aquellos que le dieron la certeza de que el acusado, de manera fraudulenta dispuso en su propio beneficio el dinero*

que le fuera entregado y que llevaba consigo una obligación o descargo, como era la de suscribir la escritura definitiva de compraventa, apreciándose como suficiente en cuanto a su argumentación, pues el pronunciamiento de los hechos declarados como probados, guardan plena armonía con la norma que ha sido seleccionada y que se relaciona al caso en concreto, y lejos de ser deficiente o defectuosa, en estricto sentido ha producido los efectos jurídicos correspondientes, al describir el hecho concreto por el cual la situación jurídica de inocencia del acusado se viera interrumpida, de manera que no se aprecia que el Tribunal Penal haya transgredido el artículo 24 numeral 13 de la Constitución Política del Estado de 1998, en relación con los Artículos 31 y 20 de la Ley de Modernización y su Reglamento, menso aún si dicho precepto meramente descriptivo, repetitivo, monótono rutinario, superficial, unilateral y parcializado o que esta responde al impedimento que realizaron los jueces al impedir que dos testigos comparezcan ante el tribunal a desvirtuar los testimonios presentados por la acusación, pues al ser este un cargo procedente tan solo a través del recurso de nulidad, conforme lo establece el numeral 2 del artículo 330 del Código de Procedimiento Penal, resulta inatendible vía casación, más de todos modos, y con la intención de contestar de alguna forma el alegato planteado por el recurrente y tomando en cuenta que el objetivo de este tipo de impugnación, es el imperio del derecho, se hace pertinente una debida enunciación de las pruebas, practicadas y las relacionadas de manera precisa y circunstancia con el hecho punible. No se advierte que el Juzgador haya tenido ante sí una disyuntiva respecto a la aplicación de una norma, como para que se diga que ésta debía ser aplicada a favor de quien recurre de la sentencia, pues conforme se ha dicho, han sido los medios de prueba debidamente actuados los que le dan la certeza de que el acusado es responsable de los actos practicados como consecuencia de su acción, y contrario a lo manifestado por el casacionista en su escrito de fundamentación, se observa que el tribunal penal sí consideró a favor del sentenciado las circunstancias atenuantes, en mérito de los cuales fue modificada la pena, de manera que no se advierte que las normas contenidas en los artículos 14 del Código de Procedimiento Penal; y 4, 11, 29, 32, 41 y 42 del Código Penal hayan sido violadas, llamando sobremanera la atención que el recurrente invoque el artículo 75 ibidem, como norma transgredida en la sentencia, cuando dicho precepto legal se refiere a las causas de excusa en los delitos de homicidio y lesiones. Son los medios de información producidos una la audiencia del juicio, los que apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, alcanzaron la calidad de prueba e hicieron posible que el juzgador arribe a la certeza de que tanto la existencia material de la infracción, como la responsabilidad del acusado fueron debidamente acreditadas, de modo que los cargos presentados por el recurrente en el sentido de que los artículos 79, 80, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 119, 250 y 304-A del Código de Procedimiento Penal habría sido transgredidos por el Tercer Tribunal Penal de Pichincha en su sentencia, no tienen asidero, como tampoco lo tiene aquellos cargos que reclaman la violación de los artículos 274, y 275 del Código de Procedimiento Civil, pues al existir norma expresa en la ley procesal penal al tema en ellos descritos, no cabe invocar norma supletoria. (...)).

CUARTO: El acusado recurrente formula contra la sentencia el cargo de que carece de motivación. Al respecto,

la Sala luego del análisis del contenido de la sentencia establece que el Tribunal hace constar los siguientes hechos

1.- Que el hecho materia del juzgamiento consiste en que Fernando Aníbal Cabezas Canelos, "...ha conocido que por una anuncio de clasificados del diario El Comercio, ha conocido de la venta de un terreno, ubicado en la Urbanización Quito Tenis y Golf Club, parroquia Chaupicruz de esta ciudad de Quito, que por este terreno luego de haber realizado las respectivas negociaciones con el señor Víctor Manuel Rodríguez Semper, dueño aparente el día 23 de agosto del 2004, se ha otorgado la escritura pública de promesa de compraventa en la Notaría Décima Octava del cantón Quito, entre el denunciante y el promitente vendedor, que en la cláusula quita de la escritura se ha establecido como plazo para la suscripción de la escritura definitiva el día 23 de septiembre del 2004, que dicha obligación nunca se ha cumplido, que por esta razón y por exigencia de los perjudicados se ha firmado la ampliación de la promesa de compraventa, que las partes contratantes han pactado como precio la suma, USD\$ 171.000 dólares, que de esta suma ha sido cancelado USD\$ 56.000 más del vehículo de propiedad del denunciante, marca Honda CRV, de placas PXH-451, avaluado en \$ 18.000; que se ha entregado el cheque No. 5893 por la suma USD\$ 20.000, y el cheque No. 5894 por la cantidad de USD\$ 8.000, que pese a estos hechos antecedentes el señor Víctor Manuel Rodríguez Semper no ha comparecido a firmar la escritura definitiva de compraventa, que el denunciante preocupado por las evasivas de Rodríguez Semper ha acudido a las oficinas del Registro Civil para obtener una copia de la tarjeta índice del denunciado, que al comprobar la identidad del vendedor del terreno se ha encontrado con la sorpresa que quien suscribió la promesa de compraventa era otra persona que había suplantado la identidad del denunciado...";

2.- Que el acto denunciado se encuentra previsto en el Art. 178 del Código de Procedimiento Civil, porque contiene una suposición fraudulenta consistente en que el promitente vendedor suplanta al verdadero dueño del terreno;

3.- Que la suposición fraudulenta contenida en la escritura de la promesa de compraventa constituye un asunto prejudicial, en aplicación de lo dispuesto en el Art. 180 del Código de Procedimiento Civil, que textualmente expresa en su inciso final "... En caso de declararse falso un instrumento, en la misma sentencia se ordenará la remisión de copias del enjuiciamiento civil al fiscal competente para que ejerza la acción penal, sin que se pueda ejercerla antes de tal declaración...", así como en el Art. 40 del Código de Procedimiento Penal, que establece el principio de legalidad de la prejudicialidad, la que en el presente caso se encuentra específicamente estatuida en la citada disposición del Código de Procedimiento Civil.

QUINTO: Que el Tribunal juzgador al haber trasgredido en la sentencia las disposiciones legales citadas en el considerando anterior, no solo que conculcó el derecho al debido proceso del acusado, contemplado en el Art. 76 de la Constitución de la República sino que también conculcó su derecho a la seguridad jurídica establecido en el Art. 82 ibidem, por no haberse aplicado las disposiciones legales anteriormente citadas y como consecuencia se ha seguido una causa penal en base a una escritura presuntamente falsa contra la persona que ha sido suplantada en ésta, sin que previamente un juez civil haya declarado su falsedad, conforme lo exige

el Art. 42 del Código de Procedimiento Penal.- **SEXTO:** Por lo tanto el fallo condenatorio carece de motivación, porque se lo motiva en una escritura pública cuya falsedad es asunto prejudicial, sin que previamente haya sido declarada su falsedad por un juez civil, por lo que se viola la garantía del debido proceso establecida en el literal i) del numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de la República y como consecuencia se produce una falsa aplicación, así como el Art. 304-A del Código de Procedimiento Penal, y como consecuencia de la falta de motivación se produce una falsa aplicación del Art. 563 del Código Penal. Por cuanto la prejudicialidad impide el ejercicio de la acción penal, no procede la petición de prescripción de ésta, ya que todavía no entró en vigencia. Por estas consideraciones, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY**, se acepta el recurso de casación interpuesto por el recurrente y corrigiendo los errores de derecho contenidos en la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Tercero de lo Penal del Pichincha de fecha 17 de enero del 2008, a las 17h30, se la revoca y en su lugar se dicta sentencia absolutoria del acusado Víctor Manuel Rodríguez Sempere, se levanta las medidas reales y personales.- Notifíquese.

f.) Dr. Luis Abarca Galeas, Juez Nacional Presidente.

f.) Dr. Máximo Ortega Ordóñez, Juez Nacional.

f.) Dr. Luis Quiroz Erazo, Conjuez Nacional.

Certifico:

f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 24-6-2011; las- Certifico.- f.) El Secretario Relator.

Certifico.- f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

No. 052-2010

Juicio Penal No. 798-2009 seguido en contra de MANUELA CESARINA LUCAS PINCAY, como autora responsable del delito tipificado en el último inciso del Art. 489, en concordancia con el numeral 1 del Art. 490 del Código Penal.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO PENAL

JUEZ PONENTE: Dr. Luis Abarca Galeas.

Quito, 1 de febrero de 2010; las 10h00.

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en calidad de Jueces Nacionales de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia.- En lo principal, la

recurrente Manuela Cesarina Lucas Pincay, interpone recurso de casación de la sentencia dictada por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, que la declara autora responsable del delito tipificado en el último inciso del Art. 489 en concordancia con el numeral 1 del Art. 490 del Código Penal y la sanciona con el Art. 495 del mismo cuerpo legal, imponiéndole la pena de tres meses de prisión y multa de seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Concluido el trámite y siendo el estado de la causa, el de resolver, para hacerlo se considera: **PRIMERO:** Esta Segunda Sala Especializada de lo Penal es competente para conocer y resolver este recurso de casación, en virtud del Art. 184 de la Constitución de la República del Ecuador, vigente a partir del 20 del octubre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 449; por lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 4 de la Sentencia Interpretativa: 001-08-SI-CC, de fecha 28 de noviembre de 2008, dictada por la Corte Constitucional de la República, publicada en el Registro Oficial No. 479, de 2 de diciembre de 2008; por el Art. 349 del código de Procedimiento Penal y por el sorteo legal de 4 de mayo del 2009.- **SEGUNDO:** A fojas 8 a 9 la recurrente Manuela Cesarina Lucas Pincay, fundamenta su recurso expresando que: Se ha violentado el Art. 330 numerales 2 y 3 del Código de Procedimiento Penal que tiene relación con el Art. 309 numeral 4 de la misma norma jurídica. Así como se han practicado experticias sin que haya sido notificada o citada que le han dejado en absoluta indefensión; es decir se ha violentado el Art. 76 numerales 7 incisos a), b), c) y d) y el numeral 6 de la Constitución Política de la República del Ecuador y en especial el Art. 330 numeral 3 del Código de Procedimiento Penal. Que el actor no tipifica la disposición legal que sanciona el supuesto delito. **TERCERO:** Que es obligación de todo Juez o Tribunal verificar que la causa haya sido sustanciada con respeto de los derechos humanos y observancia de las garantías del debido proceso, en aplicación de los Arts. 11, 169 y 426 de la Constitución de la República. En el presente caso, el querellante formaliza la acusación particular expresando que: "*Fundamento mi querrela en el artículo 371, y 36 literal c del mismo cuerpo de ley por lo que solicito se la sentencie a la acusada MANUELA CESARINA LUCAS PINCAY de conformidad con lo que prescribe el artículo 491 y 494 del código penal*", por lo que esta formalización de la acusación es inepta, en consideración a que por lo dispuesto en el numeral 3 del Art. 21 del Código de Procedimiento Penal y en el inciso tercero del Art. 25 de este mismo Código procesal, todo proceso penal solamente puede tener por objeto un delito y no dos como ocurre en el presente caso, por lo que se viola el principio de legalidad procesal establecido como garantía del debido proceso en la segunda parte del No. 1 del Art. 24 de la Constitución Política antes vigente y en el actual numeral 3 del Art. 76 de la Constitución de la República. La formalización es inepta y no produce ningún efecto jurídico procesal porque el juzgador en ningún caso puede pronunciarse sobre dos delitos ya que se encuentra obligado el principio dispositivo establecido como garantía del debido proceso en el numeral 6 del Art. 168 de la Constitución de la República, que le impide corregir los errores de derecho en que incurre el acusador, en salvaguarda de la imparcialidad necesaria para garantizar que la resolución que se expida sea justa. En esta causa, este Tribunal observa que el juzgador violó la ley en la sentencia al corregir al acusador particular dictando fallo

condenatorio por un delito que no fue acusado, declarando a la querellante que es **“autora responsable del delito de injuria calumniosa tipificado y sancionado en los Art. 489 inciso 2 y 491 del Código Penal”**, violando en esta forma el Tribunal Juzgador el principio dispositivo contemplada como garantía del debido proceso, porque corrige el error de derecho cometido por el acusador particular en la determinación del delito acusado. **CUARTO:** La Sala observa que para la existencia del delito de injuria calumniosa se requiere la falsa imputación específica del cometimiento de un delito lo cual significa que deberá constar en esta en qué lugar lo cometió, el día y la hora, y las circunstancias en que lo cometió lo cual no aparece en el presente caso y consecuentemente, no basta decir bigamo para que se configure el delito de injuria calumniosa ni tampoco es suficiente que se diga falsificador para que se configure este delito, porque en estos casos nos encontramos ante imputaciones injuriosas genéricas que no se adecuan al tipo penal de injuria calumniosa establecido en el inciso segundo del Art. 489 del Código Penal. **QUINTO:** La recurrente alega también que se ha violado el Art. 76 numeral 7 literales a), b), c) y d) de la Constitución de la República por cuanto no se le ha notificado o citado para las diligencias extra procesales que obran a fs. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de los autos y como consecuencia se le ha dejado en total y absoluta indefensión. Al respecto, la Sala establece que efectivamente la querellada no ha sido notificada para que intervenga en las diligencias preprocesales que menciona violándose en esta forma el literal a) del numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de la República y el inciso segundo del 70 del Código de Procedimiento en que garantizan la vigencia de las garantías del debido proceso desde el primer instante en que se inicia el procedimiento, entre ellas el derecho a la defensa. Además, se viola el Art. 156 del Código de Procedimiento Penal, por no haberse obtenido la autorización judicial para que el Fiscal proceda a la transcripción de las grabaciones transcripción que necesariamente debía hacerse en presencia de la ahora querellada, por lo que esta transcripción carece de valor en aplicación del numeral 4 del Art. 76 de la Constitución de la República y Art. 80 del Código de Procedimiento Penal; y como consecuencia se ha motivado la sentencia con actos procesales inconstitucionales por lo que se viola el literal 1) del No. 7 del Art. 76 de la Constitución de la República y el Art. 304-A del Código de Procedimiento Penal. Por estas consideraciones, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY**, se acepta el recurso de casación interpuesto por Manuela Cesarina Lucas Pincay y corrigiendo los errores de derecho cometidos por la sentencia de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, las 09h30, se la revoca y en su lugar se absuelve a Manuela Cesarina Lucas Pincay.- Notifíquese.

f.) Dr. Luis Abarca Galeas, Juez Nacional Presidente.

f.) Dr. Máximo Ortega Ordóñez, Juez Nacional.

f.) Dr. Luis Quiroz Erazo, Conjuez Nacional.

Certifico:

f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 24-6-2011.- las.....- Certifico.- f.) Ilegible.- El Secretario Relator.

No. 053-2010

Juicio Penal No. 339-2009 seguido en contra de JHON KENNEDY CUARÁN QUETA, como autor responsable del delito de asesinato, previsto y sancionado en el Art. 450, numerales 1, 4, 5, 6 y 9 del Código Penal.

JUEZ PONENTE: Dr. Máximo Ortega Ordóñez.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO PENAL

Quito, 29 de enero de 2010; las 10h00.

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en calidad de Jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia y Conjuez Nacional, en virtud del Oficio No. 067-SG-2010-PCH. En lo principal, Jhon Kennedy Cuaran Queta, interpone recurso de casación de la sentencia expedida el 18 de abril del 2007, por el Tribunal Penal del Carchi, que lo declara autor responsable del delito de asesinato, previsto y sancionado en el Art. 450 numerales 1, 4, 5, 6 y 9 del Código Penal, imponiéndole la pena de veinticinco años de reclusión mayor especial. Concluido el trámite y siendo el estado de la causa, el de resolver, para hacerlo se considera: **PRIMERO.-** Esta Segunda Sala Especializada de lo Penal es competente para conocer y resolver este recurso de casación, en virtud del Art. 184 de la Constitución Política de la República del Ecuador, vigente a partir del 20 de octubre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 449; por lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 4 de la sentencia interpretativa 001-08-SI-CC de fecha 28 de noviembre de 2008, dictada por la Corte Constitucional de la República, publicada en el Registro Oficial No. 479 de 2 de diciembre de 2008; por Resolución Sustitutiva de 22 de diciembre de 2008, (publicada en el Registro Oficial No. 511 de 21 de enero de 2009), a la aprobada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, el 17 de diciembre de 2008; y, por el sorteo legal de 7 de enero del 2009. **SEGUNDO.-** A fs. 3 y 3 vta., del cuaderno de esta Sala consta el escrito de fundamentación del recurso formulado por el sentenciado Jhon Kennedy Cuaran Queta, en el que, en lo principal expresa: que el Tribunal Juzgador en su sentencia ha violado los Arts. 4; 29 y 52 del Código Penal, que en su orden dice, han sido erróneamente interpretados el principio indubio pro reo; no se ha considerado atenuantes y habérsele condenado al pago de daños y perjuicios, sin que se haya deducido acusación particular; por lo que alega que el Tribunal Juzgador debió imponerle la pena de dieciséis años en lugar de veinticinco que se le impusiera en la

sentencia. **TERCERO.-** El Ministro Fiscal General del Estado, al contestar el traslado corrido con la fundamentación del recurso constante a fs. 6 a 7 vta. del cuaderno de la Sala, luego de realizar el análisis de las pruebas actuadas en la audiencia de juzgamiento, en lo fundamental expresa que: "... La prueba introducida en juicio ha sido valorada en debida forma por el juzgador, y al fallar subsume la conducta del procesado en el delito previsto y sancionado por el Art. 450 del Código Penal, en el grado de autoría, con las agravantes establecidas, lo que jurídicamente imposibilita la consideración de las atenuantes que invoca, en orden a modificar la pena impuesta; armonizando entonces con la realidad histórico procesal y la conducta del infractor", considera además el Ministro Fiscal, que el Tribunal Juzgador en la sentencia recurrida no ha violado la Ley, contraviniendo expresamente su texto, mediante falsa aplicación o errónea interpretación de las disposiciones penales que invoca el recurrente, por lo que finaliza solicitando que la Sala declare improcedente el recurso de casación propuesto por el procesado. **CUARTO.-** Examinada la sentencia por parte de la Sala, se observa que en la misma, el Tribunal Juzgador expresa que tanto la materialidad de la infracción como la responsabilidad del procesado se ha comprobado conforme a derecho con la práctica de las siguientes diligencias procesales actuadas en la audiencia del juicio. En lo que se refiere a la materialidad de la infracción con la prueba documental y testimonial presentada por la Fiscalía se ha comprobado que el 21 de mayo del 2006, a las 14H30, en el interior del Centro de Rehabilitación Social de Tulcán se produjo la muerte de los Guías Penitenciarios Leonel Guerrero Enríquez y Carlos Arturo Ordóñez, personas que por la naturaleza de su trabajo se encontraban de servicio en dicho Centro, cumpliendo funciones específicas. La Responsabilidad del procesado se la establece con: **1.-** Los informes del protocolo de autopsia presentado por el perito médico legista Nelson Enríquez Luna que establece en su orden, como causa de la muerte violenta de Carlos Arturo Ordóñez, "hemorragia aguda interna, laceración cerebral, pulmonar, fractura de cráneo, consecutiva a penetración paso y salida de proyectiles de arma de fuego"; y, de "Leonel Guerrero Enríquez, "hemorragia aguda interna, fractura de cráneo, politraumatismos, consecutiva a penetración de proyectil de arma de fuego". **2.** Los respectivos partes informativos de levantamiento de cadáver, suscritos por el cabo de policía Kléver Lafuente. **3.-** El reconocimiento del lugar de los hechos llevado a cabo en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Social de Tulcán, suscrito por el perito cabo de policía Bolívar Guevara, que describe los vestigios existentes sobre el suceso, en una puerta de hierro color negro (pagaduría) y observando la existencia de tres orificios por paso de proyectil, y en otro portón de acceso, cinco orificios por la misma causa, así como manchas de "color rojo", presumiblemente sangre. **4.-** El informe de inspección ocular técnica, suscrito por el investigador PJC teniente de policía Pablo Yacelga Medina que describe la escena del crimen y las evidencias encontradas en el lugar, entre otras, varias armas de fuego, vainas y balas percutidas correspondientes a diversos calibres y una granada. Información que se acredita y judicializa con los testimonios propios rendidos en la audiencia de juzgamiento por los suscriptores de los informes técnicos. **5.-** Los testimonios propios de los guías penitenciarios Gonzalo Puma, Ornar Merino y Luis Lucero, el primero de los

nombrados herido en el suceso, quienes han manifestado, que el día 21 de mayo del 2006, encontrándose de servicio en el Centro de Rehabilitación Social de Tulcán, en las requisas de ingreso a las víctimas, habiendo transcurrido unos minutos, se ha producido una detonación y balacera, ocasionada por uno de los grupos de visitantes, a consecuencia de la cual resultan fallecidos dos guías penitenciarios. **6.-** Los testimonios del personal policial de servicio Jessica Chala, Bélgica Montenegro, Ricardo Medina, Wilson Guerrero, Oscar Hernández, Darwin Riofrio, Ramiro Chingal, Galo Palacios, Armando Montenegro, Hernán del Pozo y Pablo Yacelga, de cuyos testimonios se conoce que el día de los hechos, escucharon disparos de arma de fuego que portaban ciudadanos vestidos de civil, que también han arrojado una granada al patrullero que se encontraba en la parte exterior del Centro, que los internos trataban de fugarse, observaron que tres guías resultaron heridos, la fuga de los sospechosos en un bus de color amarillo, el operativo de persecución y la posterior detención de aquéllos. Además, el policía Hernán del Pozo afirma que reconoció al ciudadano Jhon Cuaran como la persona que disparaba en el interior del Centro de Rehabilitación. **7.-** Los testimonios rendidos por los acusados José Jahir Parra Torres, Freddy Alfonso Bedoya Tordecilla e Iván Guillermo Vargas Flores, quienes niegan haber participado en los hechos, admitiendo que estuvieron en las inmediaciones donde se produjeron los mismos; y, **8.-** Testimonios de los también acusados Edgar Jurado Enríquez y Jhon Kennedy Cuaran Queta, de sus propias declaraciones se establece el hecho cierto de que fueron ellos los que ingresaron al Centro de Rehabilitación de Tulcán, juntamente con el acusado Carlos Alberto Gómez (fallecido); manifestando Jurado que ingresó efectivamente portando una metralleta, pero sin acordarse si disparó o no, arma que fue presentada en la audiencia de juzgamiento, la que fue reconocida por el acusado como la misma que portaba el día de los hechos. Jhon Cuaran por su parte, afirma que él también ingresó al Centro de Rehabilitación ese día, con el objeto de realizar una visita sin especificar a que persona, teniendo amistad desde hace mucho tiempo con Jurado quien le había ofrecido un trabajo que era duro, circunstancia que le endilgan directa participación en los hechos. De todo lo examinado esta Sala, advierte que para establecer el nexo causal entre el acto ilícito que motiva el proceso con el agente activo del mismo, el Tribunal Penal del Carchi procedió a realizar un estudio prolijo y detallado de toda la prueba, solicitada, ordenada y producida en la audiencia de juzgamiento, para luego en acto soberano efectuar su valoración con estricto apego a las normas legales pertinentes y de conformidad a las reglas de la sana crítica llegó a declarar con convicción y certeza tanto la existencia material del hecho que se juzga, como la responsabilidad del acusado, por lo que esta Sala estima que el Tribunal Juzgador adecuó correctamente la conducta del procesado en el delito de asesinato tipificado y sancionado en el Art. 450 bajo las circunstancias constitutivas de los numerales 1, 4, 5, 6 y 9; así también es correcta la pena impuesta sin la consideración de atenuantes, pues según el tratadista ecuatoriano Francisco Pérez Borja, cuando existe varias agravantes aplicables al Art. 450 ibidem como en este caso las contempladas en los numerales 1, 4, 5, 6 y 9 una de ellas es constitutiva del tipo de asesinato, y las demás operan como agravantes propiamente dichas, por lo cual no se puede aplicar atenuantes, al tenor de lo dispuesto en el Art. 72 del Código Penal, como lo solicita el

recurrente. Consiguientemente, el Tribunal Juzgador, al dictar su sentencia lo hace con estricto apego a las normas de derecho, sin que pueda observarse violación de la ley y mucho menos el Art. 4 del Código Penal, porque los hechos narrados y referidos conducen a la sola conclusión que el Tribunal Juzgador formula, respaldado en la convicción y certeza de la existencia material del hecho y de la culpabilidad del recurrente; por lo que los cargos que se le imputan a la sentencia resultan infundados y no enervan, las conclusiones a las que arribó el Tribunal Juzgador. En cuanto a la alegación formulada por el recurrente respecto a que no procede la fijación al pago de daños y perjuicios, cuando en el proceso no hay acusación particular, de conformidad con el Art. 52 del Código Penal; efectivamente la disposición invocada ordena que los daños y perjuicios serán pagados en forma solidaria por todos los responsables contra quienes se haya ejercido acusación particular con el objeto de alcanzar tal indemnización; y, en el caso, los Juzgadores equivocadamente disponen este pago, particular que expresamente se lo corrige dejándolo sin efecto, sin perjuicio de que se proceda conforme a lo previsto en el literal b) del Art. 31 del Código de Procedimiento Penal. Consecuentemente, esta Segunda Sala de lo Penal, con arreglo a lo ordenado por el Art. 358 del Código de Procedimiento Penal, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY**, declara improcedente el recurso de casación interpuesto por el recurrente Jhon Kennedy Cuaran Queta, ordenándose la devolución del proceso al Tribunal Penal de origen.- Notifíquese.

f.) Dr. Luis Abarca Galeas, Juez Nacional Presidente.

f.) Dr. Máximo Ortega Ordóñez, Juez Nacional.

f.) Dr. Luis Quiroz Erazo, Conjuez.

Certifico:

f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 24-6-2011.- las.....- Certifico.- f.) Ilegible.- El Secretario Relator.

No. 68-2010

Juicio Penal No. 402-2008 seguido por SANDY INÉS ROMERO LÓPEZ y DR. ADOLFO SEGUNDO CUVI GAIBOR, como Procurador Judicial de la señora ROSA LAURA ROMERO ROJAS, en contra de REINA AMELIA ZAMBRANO ZAMBRANO; MERCEDES ILEANA ZAMBRANO RODRIGUEZ; ANGEL NICANOR VELEZ MENENDEZ; ELENA EUGENIA BONILLA MOREIRA; MARIA LINA CEDEÑO RIVAS, Notaria Pública Primera del cantón Manta; DR. JAIME VILLAVICENCIO VELEZ, Notario Público del cantón Montecristi; DR. RIGOBERTO CARVALLO JARAMILLO; AB. RISKEE RENE VERA VIVAS; AB. SALIN VILLACIS CHÁVEZ, Juez Sexto de

lo Civil de Manabí; AB. FATIMA CORRAL PALACIOS; FRANKLIN VICENTE IZURIETA GAVIRIA, Registradora de la Propiedad Encargada y titular del cantón Montecristi; CESAR RICARDO BUSTOS ZAMBRANO; Y, RICARDO FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA CARVAJAL, por COLUSIÓN.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA SEGUNDA SALA DE LO PENAL

Quito, 02 Febrero de 2010, las 11h00.

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en calidad de Jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia y Conjuez Nacional en virtud del oficio No. 067-SG-2010-PCH. En lo principal: Interponen recurso de apelación Sandy Inés Romero López y Dr. Adolfo Segundo Cuvi Gaibor, Procurador Judicial de la señora Rosa Laura Romero Rojas, de la sentencia dictada por la Primera Sala Especializada de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo, que declara sin lugar la demanda de acción colusoria planteada a fs. 2 a 7 señalando a sus demandados Reina Amelia Zambrano Zambrano, Mercedes Ileana Zambrano Rodríguez, Ángel Nicanor Vélez Menéndez, Elena Eugenia Bonilla Moreira, María Una Cedeño Rivas, Notaria Pública Primera del Cantón Manta, Dr. Jaime Villavicencio Vélez, Notario Público Primero del Cantón Montecristi, Dr. Rigoberto Carvallo Jaramillo, Ab. Risker René Vera Vivas, Ab. Salín Villacís Chávez, Juez Sexto de lo Civil de Manabí, Ab. Fátima Corral Palacios, Franklin Vicente Izurieta Gaviria, Registradora de la Propiedad Encargada y titular del Cantón Montecristi, César Ricardo Bustos Zambrano y Ricardo Fernández de Córdova Carvajal. Concedida las apelaciones, para resolver se considera: **PRIMERO:** Ha correspondido su conocimiento a esta Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, por lo dispuesto en el literal a) y b) de numeral 4 de la sentencia interpretativa: 001-08-SI-CC de fecha 28 de noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 479 de 2 de diciembre de 2008, y por resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia de 10 de febrero de 2009 publicada en el Registro Oficial No. 572, en concordancia con el Art. 184 de la Constitución de la República del Ecuador y sorteo de 2 de septiembre del 2008. Una vez agotado el trámite del recurso, y estudiado las constancias procesales, para resolver se considera: **SEGUNDO:** Que el presente proceso colusorio es válido, por cuanto ha sido sustanciado en la forma requerida por la Ley para el Juzgamiento de la Colusión, y las pertinentes disposiciones del Código de Procedimiento Civil, sin incurrirse en ninguna omisión de solemnidad sustancial.- **TERCERO:** Que el accionante deduce demanda colusoria en contra de los referidos demandados manifestando en síntesis que: Del certificado de defunción del señor Arcadio Bolívar Romero Zambrano padre de los accionantes ha fallecido en San Juan de Puerto Rico el 1 de agosto del 2000, en vida de éste, ante el Notario Público abogado José Porben Ulloa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con fecha junio 6 de 1998 formalizó su última voluntad celebrando su testamento abierto a favor de las comparecientes y de su hermana ahora menor de nombres María Gabriela Romero Zambrano, instituyéndoles como sus y universales herederas del patrimonio integrado por todos sus bienes que aparezcan al momento de su muerte, según se desprende de las cláusulas sexta y novena del indicado testamento y en cuya voluntad

legal a Nelda Altagracia Rojas madre de la compareciente Rosa Laura Romeo Rojas el apartamento Residencial N° 404 del Condominio Jardines de Francia localizado entre las calles "A Francia y Guayama, Hatorey San Juan Puerto, Rico, inscrito en el Folio 28 del Tomo 892 de Río Piedras Norte inca N. 25, 767 Registro de la Propiedad de San Juan Sección Segunda y a Ileana Mercedes Zambrano. Al ir a inscribir este documento en el Registro de la Propiedad del Cantón Manta, su titular se negó hacerlo luego de su protocolización realizada en la Notaría Cuarta Pública del cantón Manta el 24 de abril del 2002 cuya protocolización se encuentra signada con el N° 1042-1043, por cuanto el causante Arcadio Bolívar Romero Zambrano es propietario del 50% de los gananciales del primer inmueble que se halla singularizado procediendo el mismo doctor Julio Rigoberto Carvallo Jaramillo a pedir al mismo Juez Sexto de lo Civil de Manta que ordene la inscripción del testamento protocolizado en la Notaría Pública Cuarta, por cuanto no fue adquirido con la señora Mercedes Zambrano Rodríguez dejando a salvo este bien; por lo que este Juez en providencia de fecha 1 de agosto 2002 dictada a las 15h45 ha ordenado que el Registrador inscriba el testamento protocolizado, todo ello hace el Dr. Carvallo Jaramillo, sin tener poder ni facultad alguna para hacerlo, aprovechándose de la Posesión Efectiva otorgada a favor de la señora Mercedes Zambrano Rodríguez y del poder general que le da a la señora Reina Amelia Zambrano Zambrano.- El 12 de enero del 2002 en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta el Doctor Rigoberto Carballo Jaramillo como Gerente General de la COMPAÑÍA BIENES DEL AUSTRO BIENAUSTRO S.A. con la presencia de la señora Mercedes Zambrano Rodríguez de estado civil soltera, por sus propios y personales derechos, comparecen a otorgar y suscribir un contrato de aumento de capital y reforma del estatuto de la indicada compañía, constituida en la misma Notaría Pública Cuarta de Manta el 26 de septiembre del 2001 y registrada el 18 de octubre de igual año en el Cantón Santa Ana con un capital constitutivo de ochocientos dólares (\$800), y con fecha 18 de diciembre del 2001. Los accionistas fundadores Dr. Rigoberto Carvallo Jaramillo y Ab. Riskee René Vara Vivas han transferido la totalidad de las acciones iguales ordinarias y nominativas a favor de Mercedes Zambrano Rodríguez quedando como única accionista, una vez que la Junta General de Accionistas en la sesión llevada a cabo a las 09h00 del 2 de enero del 2002 presidida por el Ab. Riskee Vera Vivas y como secretario el Dr. Rigoberto Carvallo Jaramillo resuelven en presencia de Mercedes Zambrano Rodríguez mediante el aporte en especies de varios bienes inmuebles ubicados en las ciudades de Manta y Montecristi, dejados por Arcadio Romero Zambrano, y resuelven emitir 2'113.279 de nuevas acciones de un centavo de dólar cada una, ingresando los inmuebles: UNO. Un lote de terreno ubicado en la lotización Cielo del Mar del *sitio colorado del Cantón Montecristi* comprendido dentro de los linderos y medidas; por el frente ciento sesenta metros y carretera Montecristi Manta; por atrás ciento treinta y ocho metros y calle Pública sin nombre; por el costado derecho doscientos metros y lindando con terrenos de la compañía Polimetall SA, y por el costado izquierdo doscientos treinta y cuatro metros, lindando con propiedad particular; lote que tiene una superficie total de treinta y dos mil trescientos treinta y tres metros cuadrados, con un avalúo municipal de trece mil quinientos noventa con 77/100 dólares americanos. DOS.- Un terreno ubicado en la lotización Umiña en la ciudad de

Manta, Parroquia y Cantón del mismo nombre, comprendido dentro de los siguientes linderos y medidas: por el frente Avenida Transversal con quince metros; por atrás terrenos de varios propietarios de la Manzana "H" con trece metros treinta centímetros; por el costado derecho calle "Cinco" con diecinueve metros treinta centímetros; por el costado izquierdo terreno del propietario de la manzana "H". Lote de terreno descrito que se encuentra en la manzana "H" y tiene una superficie total de trescientos veintinueve metros cuadrados con setenta centímetros. Este terreno tiene un avalúo de cuatrocientos sesenta y nueve con 38/100 dólares americanos. TRES.- Un solar de terreno y edificación de tres plantas altas construidas en parte de dicho solar, ubicado en la ciudad de Manta, Parroquia y Cantón del mismo nombre, que tiene los linderos y medidas: por el frente, Malecón de Manta con veintidós metros; por atrás Avenida tres con veinte y dos metros; por el lado derecho, calle Dieciséis con cuarenta y cinco metros y cuarenta centímetros; y por el lado izquierdo, propiedad de la niña Roció Díaz García, antes de Emilio Bowen Roggeiro, con cuarenta centímetros, con un avalúo de cinco mil quinientos ochenta y dos con 48/100 dólares americanos. CUARTO.- Un terreno ubicado en la calle Veintiuno y Primera Transversal, en las inmediaciones del cementerio nuevo en la ciudad de Manta, Parroquia y Cantón del mismo nombre comprendido dentro de los linderos y medidas: por el frente, quince metros Calle Veintiuno, por atrás, quince metros y propiedad de Josefa Reyes de Pico; por el costado derecho veinte metros y calle Primera Transversal; y por el costado izquierdo, veinte metros y propiedad de Enma Rita Paz Muños. Con un área total de trescientos metros cuadrados, avaluado en setecientos catorce con 35/100 dólares americanos. CINCO.- Una parte de terreno signado con los números tres y cuatro, de la manzana "H", ubicado en el sitio La Silla de la ciudad de Manta, Cantón del mismo nombre, que tiene los linderos y medidas: por el frente, veinte y siete metros y avenida principal; por atrás veintisiete metros y lindera con lote H-cinco; por el costado derecho veintidós metros sesenta centímetros y lindera con el lote H-dos.; Con una superficie total de quinientos ochenta y cuatro metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados, con un avalúo de setecientos sesenta y cinco con 81/100 dólares americanos. Estos inmuebles forman parte de la universalidad de los bienes dejados a las comparecientes y a su media hermana María Gabriela Romero Zambrano y a pesar de que supuestamente ingresaron estos inmuebles a la mencionada compañía como aumento de capital, Reina Amelia Zambrano-Zambrano como apoderada de la señora Mercedes Zambrano Rodríguez procede enajenar los derechos y acciones contenidas en el cuerpo cierto del inmueble las medidas y linderos constantes en el ordinal UNO del contrato de aumento capital y reforma del estatuto social BIENAUSTRO S.A.; esto es, del que se encuentra ubicado en la lotización Cielo del Mar del sitio Colorado del Cantón Montecristi a favor de los cónyuges Ángel Nicanor Vélez Menéndez y Elena Eugenia Bonilla Moreira conforme se desprende de la escritura # 974 otorgada el 4 de octubre del 2004 en la Notaría Pública Primera del Cantón registrada el 22 del mismo mes y año de su otorgamiento, en cuyo título escriturario no consta documento habilitante alguno de la autorización que debía dar la Junta de Accionistas de la compañía BIENES DEL AUSTRO "BIENAUSTRO S.A."; a todo esto hay que agregar que la venta aparece realizada también por la

apoderada de Mercedes Zambrano Rodríguez a nombre de la menor María Gabriela Romero Zambrano con una autorización judicial otorgada por el Juez Sexto de lo Civil de Manabí Stalin Villacís Chávez conforme consta de la sentencia dictada a las 08h00 del 24 de septiembre del 2004, licencia que otorga en base a la demanda que deduce Mercedes Zambrano Rodríguez en la cual solicita que la autorización judicial se le otorgue a su apoderada o mandataria Reina Zambrano de Bustos sin considerar que María Gabriela Romero Zambrano como menor púber era la llamada a insinuar el nombre de la persona que debía representarle como curador, Insinuación que el Juez debía haberlo pedido para poder conceder la licencia judicial y no en la forma que ha permitido por insinuación de la madre de la menor. En esta forma las comparecientes han sido perjudicadas en el dominio que les corresponde en la sucesión de los derechos que tienen en ese bien y en otros que pertenecieron a su difunto padre conforme consta a continuación: A.- El inmueble de las medidas y linderos ubicado en la lotización Cielo del sitio Colorado del Cantón Montecristi fue adquirido por compraventa por el fallecido Arcadio Bolívar Romero Zambrano a los cónyuges Reina Amelia Zambrano Zambrano y a César Bustos Looz mediante escritura pública celebrada en la Notaría Primera del Cantón Montecristi el 29 de noviembre de 1997 de 8 de diciembre del mismo año de su otorgamiento. B.- En la escritura cuestionada signada con el número 974 celebrada en la Notaría Pública Primera del Cantón Montecristi el 4 octubre del 2004 e inscrita el 22 del mismo mes y año en la que Amelia Zambrano Zambrano como mandataria de Mercedes Zambrano Rodríguez y de su hija María Gabriela Romero Zambrano venden el lote de terreno situado en la lotización Cielo del Mar del Sitio Colorado del Cantón Montecristi a favor del Ing. Ángel Vélez Menéndez y señora Elena Bonilla Moreira, han hecho constar en la cláusula segunda que se refiere a los antecedentes que este inmueble que ha comprado Arcadio Romero Zambrano en su estado civil de casado con Mercedes Zambrano Rodríguez, cuando él adquirió este inmueble por compraventa mediante escritura pública celebrada en la misma Notaría Pública Primera de Montecristi el 19 de noviembre de 1997 Registrado el 8 de diciembre del mismo año en su estado de soltero y el casamiento celebrado entre su padre y Mercedes Zambrano Rodríguez se ha realizado en el Registro Civil del Cantón Manta el 12 de febrero de 1999, bajo el régimen de separación de bienes según las capitulaciones matrimoniales constantes en la escritura pública No. 149 otorgada el 8 de febrero de 1999 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Manta el 10 de febrero del mismo año de su otorgamiento, por lo que no iban a reclamar supuestamente por tener sus domicilios y residencias en otro país. C.- Mercedes Zambrano Rodríguez al solicitar la posesión efectiva de los bienes dejados en el Ecuador por su difunto padre declara que ella como cónyuge sobreviviente y su hija María Gabriela Romero Zambrano son herederas universales y que ese bien ubicado en la lotización Cielo del Mar lo adquirió en estado civil de casada con su difunto padre, quien aduce además que el último domicilio de su padre fue Manta, conforme se desprende de la propia demanda de posesión efectiva dirigida a la notaría y que como documento habilitante consta en la escritura de compraventa realizada por su apoderada Reina Amelia Zambrano el 4 de Octubre del 2004 e inscrita el 22 del mismo mes y año de su otorgamiento en que se enajena este inmueble a favor de los

cónyuges Ing. Nicanor Vélez y Elena Bonilla, cuando el indicado bien lo adquirió como soltero por divorcio a más de que su padre previo a su casamiento hizo las correspondientes capitulaciones matrimoniales que en forma clara se deja expuesto en el literal B de este libelo. D.- Para proceder con estos perjuicios en su contra se valen de la confabulación del doctor Rigoberto Carballo Jaramillo quien sin ser parte interesada, procedió a solicitar en forma personal al Juez Sexto de lo Civil de Manta Ab. Stalin Villacís Chávez la protocolización e inscripción del testamento dejado por su padre, testamento que se inscribe en el Registro de la Propiedad del Cantón Montecristi el 28 de Junio del 2001, mientras que el señor Registrador de la Propiedad del Cantón Manta se negó a inscribirlo, respecto de lo cual el Dr. Carballo refiere que la negativa del Registrador se basa en que el otorgante es dueño del 50% de los gananciales del primer inmueble descrito en el certificado Registral que obra en dicho expediente, certificado que no consta en el expediente al que hace referencia, para solicitar por sus propios derechos al mismo Juez Sexto de lo Civil de Manabí que ordene al Registrador de la Propiedad de Manta la inscripción del testamento lo que es acogido por el Juez en providencia de fecha 1 de agosto del 2002 inscribiéndose el 7 de Agosto del mismo año, todo ello sin haberse cumplido con la Inscripción en el Tribunal E.- La apoderada de Mercedes Zambrano Rodríguez la señora Reina Amelia Zambrano de Bustos al vender el inmueble de la ubicación linderos y medidas constantes en la Escritura Pública 974 celebrada en la Notaría Primera del Cantón Montecristi el 4 de octubre del 2004 e inscrita el 22 del mismo mes y año de su otorgamiento a favor de los cónyuges Ángel Vélez Menéndez y Elena Bonilla Moreira consta como documento habilitante un certificado conferido por la Registradora encargada del Cantón Montecristi, el cual se refiere al único bien adquirido por su padre sin que haya hecho constar la inscripción el testamento ni las desmembraciones realizadas a este inmueble; por tanto se confabuló también con el Notario Primero de Montecristi Dr. Jaime Villavicencio, con la Poderdante Mercedes Zambrano Rodríguez y con la apoderada Reina Amelia Zambrano de Bustos para perjudicarles en los derechos que tienen en este bien. Que el señor Registrador de la Propiedad de Montecristi inscribió la escritura de venta de derechos y acciones realizada a favor de Ángel Nicanor Vélez y su cónyuge, sin que en el aludido documento exista el comprobante de pago de impuesto a la Herencia, Legados y Donaciones ante el Servicio de Rentas Internas de Manabí, al igual que la diligencia de posesión efectiva agregada como habilitante se encuentra incorporada, puesto que no consta la copia del testamento que se encuentra incorporado a dicho acto Notarial. F.- El Dr. Rigoberto Carballo Jaramillo Mercedes Zambrano Rodríguez en el aumento de capital y reforma del estatuto social de la compañía BIENES DEL AUSTRO BIENAUSTR O.S.A. en el cual aparece el Dr. Rigoberto Carballo como Gerente General, y actuando como secretario en la supuesta sesión de Junta de accionistas llevada a cabo en el Cantón Santa Ana el 2 de enero del 2002 el Ab. Risker Vera Vivas con la presencia de la única accionista de las 800 acciones Mercedes Zambrano, en la cual acuerdan aumentar el capital de estas acciones con los bienes dejados por su padre, por haber alcanzado la Posesión Efectiva otorgada el 3 de octubre del año 2000 e inscrita en los Registros de la Propiedad de Manta y Montecristi el 23 de octubre del 2000 y el 4 de julio del

2001 respectivamente, y luego como se deja expresado, el inmueble ubicado en la lotización Cielo Mar del Cantón Montecristi que ingresó supuestamente como aumento de capital a la referida compañía fue materia de enajenación sin la autorización de la Junta de Accionistas a favor de los cónyuges Ing. Ángel Vélez Menéndez y señora Elena Bonilla Moreira, conforme se hace ver en el literal B de este libelo, concluyéndose la confabulación entre Reina Amelia Zambrano Zambrano, Mercedes Ileana Zambrano Rodríguez, Ángel Nicanor Vélez Menéndez, Elena Eugenia Bonilla Moreira, María Una Cedeño Rivas Notaría Pública Primera del Cantón Manta, Dr. Jaime Villavicencio Vélez Notario Público Primero del Cantón Montecristi, Dr. Rigoberto Carvallo Jaramillo, Ab. Riskee Vera Vivas, Ab. Salín Villacís Chávez, Ab. Fátima Corral Palacios, Franklin Vicente Izurieta Gaviria Registradora de la Propiedad Encargada y titular del Cantón Montecristi, César Ricardo Bustos Zambrano y Ricardo Fernández de Córdova Carvajal estos dos últimos que se han prestado para rendir la declaración juramentada y favorecer a Mercedes Zambrano Rodríguez en la posesión efectiva, perjudicándoles en los derechos que tienen en los bienes que dejó su padre. **CUARTO:** Aceptada a trámite la demanda y citados los demandados en la forma que consta en autos, han comparecido manifestando en síntesis que: **Ab. María Cedeño Rivas de Martínez manifiesta:** *Que adjunta la posesión efectiva pro indivisa a favor de la peticionaria y compareciente Mercedes Ileana Zambrano Rodríguez, como representante de su hija menor de edad María Gabriela Romero Zambrano, la primera en calidad de cónyuge sobreviviente de Arcadio Bolívar Romero Zambrano, documentos que acreditan la personería y representación legal como el derecho de solicitar a favor de su hija, la posesión efectiva de los bienes dejados por el causante, además a la declaración juramentada solicitada por la señora Mercedes Ileana Zambrano Rodríguez, se agregó un testamento otorgado por el fallecido Arcadio Bolívar Romero Zambrano cumpliendo con su obligación de Notaria conforme la Ley.* **Ángel Nicanor Vélez y Elena Eugenia Bonilla Moreira** dice: Improcedencia de la acción falta, de legítimo contradictor; litis pendencia Inexistencia de acto o procedimiento colusorio. **César Ricardo Bustos Zambrano** expresa: Negativa a los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta, falta de derecho de la parte actora; falta de legítimo contradictor; que es imposible que exista pacto colusorio con personas que jura desconocer; que se le ha involucrado en una supuesta acción, colusoria de la cual no existe prueba de su participación, que adjunta copia certificada, del oficio suscrito por la Abogada Isidra Bravo Zambrano profesional que ahora patrocina la demanda colusoria propuesta en su contra, donde le solicita el pago de más de dos mil dólares de honorarios, que la demanda colusoria sea calificada como maliciosa y se condene a las actoras al pago de daños y perjuicios, costas procesales y honorarios de su abogado defensor. **Ricardo Fernández De Córdova Carvajal** manifiesta: Negativa a los fundamentos de hecho, falta de derecho de la actora para deducir demanda colusoria; que es imposible que exista pacto colusorio con personas que jura desconocer; falta de legítimo contradictor; que se lo ha involucrado en acción colusoria del cual no existe constancia alguna de que haya participado; que la demanda colusoria; sea calificada como maliciosa y se condene a las actoras al pago de daños y perjuicios, costas procesales y honorarios de su abogado defensor. **Dr. Julio Rigoberto**

Carvallo Jaramillo y Riskee René Vera Vivas dicen: Negativa pura y simple a los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; falta de derecho de las accionantes para demandar a los comparecientes por cuanto no ha existido confabulación alguna, improcedencia de la acción planteada por las actoras para demandar en vía colusoria el resarcimiento de supuestos derechos como únicas y universales herederas del señor Arcadio Bolívar Romero Zambrano, improcedencia de la vía y acción propuestas por la forma, improcedencia de la demanda por su fondo, incompetencia de la demanda propuesta por su fondo Incompetencia de la demanda por su fondo Incompetencia de la Sala Penal para conocer impugnaciones Ilegitimidad de personería de la parte accionante e insuficiencia de poder de sus mandatarios; nulidad de todo lo actuado en esta causa por vicios de procedimiento debido a la indebida calificación y admisión. a trámite que la Sala Penal ha dado a la demanda. **Reina Amelia Zambrano Zambrano** deduce: Negativa pura y simple a los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, improcedencia de la demanda colusoria en vista que no reúne los elementos de los principios doctrinarios y la jurisprudencia Improcedencia de la acción por cuanto no se ha cumplido con los requisitos exigidos en el procedimiento civil, falta de derecho de la parte actora, falta de causa lícita para proponer esta demanda, ilegitimidad de personería de las demandantes, improcedencia del juicio colusorio, por solicitar las mismas cuestiones antijurídica y contrarias al derecho, prescripción de la acción colusoria, nulidades provenientes de la presente causa, que se deseche la demanda colusoria declarándola maliciosa y temeraria, condenando a las actoras al pago de daños y perjuicios y costas procesales. **Ab. Jaime Miguel Marian Rodríguez**, Procurador Judicial de la señora Mercedes Ileana Zambrano Rodríguez manifiesta: Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, improcedencia de la acción colusoria, improcedencia de la acción por cuanto no se ha cumplido con los requisitos señalados en el Código de Procedimiento Civil, falta de causa ilícita para proponer la demanda, ilegitimidad de personería, improcedencia del juicio colusorio, prescripción de la acción colusoria, a que se deseche la demanda colusoria, declarándola maliciosa y temeraria condenando a las actoras al pago de daños y perjuicios y costas procesales. **Dr. Jaime Rafael Villavicencio Vélez:** Que su actuación como Notario Público de manera alguna puede interpretársela como acto colusorio, que si los documentos fueron materia del contrato elevado a escritura pública por él fueron alterados, falsificados o se omitió los antecedentes en, tal instrumento, esto de manera alguna constituye un actos colusorio y de ello ha ratificado la Exma Corte Suprema de Justicia, encontrándose aplicaciones importantes criterios al respecto, declarar sin lugar la demanda, condenar a las accionantes al pago de daños y perjuicios, costas procesales y honorarios del abogado de la defensa y calificarla de maliciosa y al tenor del Art.9 de la Ley para el juzgamiento de la colusión. **Ab. Franklin Vicente Izurieta Gaviria** dice: Que niega los fundamentos de hecho y de derecho de la acción, que el acto colusorio materia de la presente acción no se encuentra configurado ya que en el libelo de demanda la parte accionante reconoce que el bien inmueble transferido es parte de la masa hereditaria, que el certificado otorgado por el Registrador de la Propiedad, en donde por error no consta el testamento abierto, fue entregado por la Registradora de la Propiedad encargada, legalmente por la

Corte Superior de Justicia de Portoviejo, la inscripción del traspaso de dominio del bien inmueble, celebrado en la Notaría Primera del cantón Montecristi, en Octubre 04 del 2004, cumplió con todos los requisitos de ley, que por lo dicho solicita se declare maliciosa y temeraria la demanda colusoria para iniciar las acciones por daño moral e indemnización por daños y perjuicios. **Ab. Octavio Villacís Chávez** dice: Negativa da los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, improcedencia de la acción, falta de derecho de la parte accionante para deducir demanda colusoria, prescripción de la acción, dualidad de la acción. **Ab. Fanny Mercedes Corral Palacios** expresa: Ilegitimidad de personería pasiva, negativa a los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, improcedencia de la acción; falta de legítimo contradictor; inexistencia de acto o procedimiento colusorio, por último no se allana a las nulidades habidas y supervinientes. **QUINTO:** Dentro del término de prueba, en lo fundamental, los demandantes presentan: **a)** Partida de defunción del difunto Arcadio Bolívar Romero Zambrano; **b)** Certificación otorgada por el Registrador de la Propiedad del cantón Manta, sobre los bienes inmuebles que se encuentran registrados en esa dependencia a nombre de Arcadio Bolívar Romero Zambrano. **c)** Copia certificada del testamento abierto suscrito en la ciudad de San Juan, Puerto Rico a los seis días del mes de junio del año 1998, ante el Notario Público José Porben Ulloa **d)** Copias certificadas del juicio especial No. 112-2002 propuesto en el Juzgado Sexto de lo Civil de Manabí por el Dr. Rigoberto Carvallo, solicitando calificar la legalidad y autenticidad del testamento suscrito en Puerto Rico, **e)** Copias certificadas del juicio especial No. 872-2002 propuesto en el Juzgado Sexto de lo Civil de Manabí por el Dr. Rigoberto Carvallo Jaramillo, demandando aquel citado Juez, ordena al Registrador de la Propiedad del Cantón Manta, inscriba a Escritura de protocolización otorgada por e/ señor Notario del Cantón Manta. **f)** Escritura Pública de posesión efectiva otorgada por la señora Notaria Primera del Cantón Manta, Ab. María Lima Cedeño Rivas, concediendo la posesión efectivo pro indiviso, de todos los bienes dejados por el fallecido Arcadio Bolívar Romero Zambrano, a favor de la señora Mercedes Ileana Zambrano Rodríguez y su hija María Gabriela Romero Zambrano. **g)** Contrato de aumento de capital y reforma del estatuto social de la Compañía de bienes EL AUSTRO BIENAUSTRO S.A. **h)** Escritura pública de compraventa de derechos ya acciones de un lote de terreno ubicado en la lotización cielo mar del Cantón Montecristi otorgada por los herederos del difunto Arcadio Romero Zambrano a favor de los cónyuges Ángel Nicanor Vélez Menéndez y Elena Eugenia Bonilla Moreira. **i)** Copia certificada de la partida de nacimiento de María Gabriela Romero Zambrano nacida en Manta el 10 de febrero de 1989 hija de Arcadio Romero Zambrano y Mercedes Ileana Zambrano Rodríguez. **j)** Copia certificada de la declaración jurada por la señora Mercedes Ileana Zambrano Rodríguez ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala Superior de San Juan, que en su parte principal dice: Que estuvo casada con Arcadio Bolívar Romero Zambrano Que en el matrimonio procreó una hija de nombre María Gabriela Romero Zambrano. Que con Arcadio Bolívar Romero Zambrano, otorgó testamento abierto mediante escritura pública No. 12 en San Juan Puerto Rico el 06 de junio del año 1998. **k)** Copia certificada de la inscripción de matrimonio, efectuada en Manta el 12 de febrero de 1999 entre Arcadio Bolívar Romero Zambrano y Mercedes Ileana

Zambrano Rodríguez **l)** Tercero y Primer testimonios de la Escritura pública del contrato de aumento de capital y reforma del Estatuto Social de la Compañía Bienes de AUSTROBIENASUSTRO S.A. cuya cuantía es de USD \$ 20.663,41, a cuyo acto comparecen los señores Dr. Rigoberto Carvallo Jaramillo y la señora Mercedes Zambrano Rodríguez el primero Gerente General de la referida empresa y la segunda por sus propios derechos, suscrita ante el señor Notario Cuarto del Cantón Manta, Ab. Simón Zambrano Vences **m)** Oficio No. 0988 de fecha febrero 05 del 2007, suscrito por el Ab Mario Santos Suárez, Secretario abogado de la Intendencia de Portoviejo quien indica que la Compañía BIENES DEL AUSTRO S.A. BIENAUSTRO a la fecha se encuentra cancelada y sin vida jurídica **n)** Copia segunda de la escritura poder General No. 142 otorgada por la señora Mercedes Zambrano Rodríguez a favor de la señora Reina Zambrano de Bustos. **SEXTO:** La Corte Suprema de Justicia y actualmente la Corte Nacional a través de sus Salas Penales en forma continúa ha resuelto que la acción colusoria es de última ratio, de tal modo que, cuando la ley contempla otras acciones para la tutela jurídica del derecho conculcado deberán ejercerse estas acciones y no la acción colusoria, ya que ésta procede solo en caso de que en la ley no se contemple ninguna otra acción para la tutela jurídica de los derechos del perjudicado. En efecto, la acción colusoria no se la puede deducir en todo caso en que la ley ha previsto otra vía para que este obtenga la tutela jurídica de sus derechos menoscabados, desconocidos o conculcados, y se le ha previsto con el objeto de que ninguna persona quede en indefensión a pretexto de que no existe ley que confiera alguna acción para tutelarlos, porque en tal caso procede la acción colusoria, siempre que se reúnan las condiciones que existe en el Art. 1 de la Ley para el Juzgamiento de la Colusión. **SEPTIMO:** Por la naturaleza y característica de los presuntos actos ilícitos que les atribuyen los accionantes a la demandada, se establece que la tutela jurídica de los derechos conculcados con tales actos podía obtenerlos en la forma en que establece el Art. 75 de la Constitución de la República, deduciendo otras acciones, como son la de nulidad, reivindicación, falsedad, etc. Por estas consideraciones, **ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY**, se confirma la sentencia venida en grado dejándose a salvo las acciones que le confiere la ley a las actoras para obtener la tutela jurídica de sus derechos. Notifiquese.

f.) Dr. Luis Abarca Galeas, Juez Nacional Presidente.

f.) Dr. Máximo Ortega Ordóñez, Juez Nacional.

f.) Dr. Luis Quiroz Erazo, Conjuez Nacional.

Certifico:

f.) Dr. Honorato Jara Vicuña, Secretario Relator.

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA, SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 24-6-2011.- las.....- Certifico.- f.) El Secretario Relator.



REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR

Suscríbase



Quito

Av. 12 de Octubre N1690 y Pasaje Nicolás Jiménez
Edificio Nader 2do. Piso
Teléfonos: 2234540 - 2901629 Fax: 2542835

Almacén Editora Nacional

Mañosca 201 y 10 de Agosto
Telefax: 2430110

Guayaquil

Malecón 1606 y 10 de Agosto
Edificio M.I. Municipio de Guayaquil
Teléfono: 2527107



www.registroficial.gob.ec